LA VIOLACION DEL DERECHO A LA EDUCACION BASICA PRIMARIA A
PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO
EN EL MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO)
DURANTE EL PERIODO 2007-2009.

EDGAR ANDRÉS CALDERÓN ORTIZ

Programa: MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS

MOCOA 2012

CONTENIDO

Introducción

	Pág
1. Proceso histórico que generó el problema de desplazamiento en Putumayo	
1.1 Aspecto histórico	...6
1.2 Política de Baldíos y colonización	...9
1.3 Fracaso de la política de Baldíos	...13
1.4 Incursión de los primeros colonos al Putumayo	...14
1.5 Colonización y violencia	...19
1.6 La violencia y el bipartidismo	...20
1.7 La explotación de petróleo y la colonización	...23
1.8 Los cultivos ilícitos en Putumayo y su expansión	...26
1.9 El conflicto armado y el desplazamiento en Putumayo	...34
2. Situación del problema de desplazamiento a nivel regional y local.	
2.1 Características del Departamento de Putumayo	...39
2.2 La economía de la coca en Putumayo	...41
2.3 Situación económica y social de la población de Putumayo	...45
2.4 El desplazamiento en Putumayo	...54
2.5 Guerrilla, narcotráfico y desplazamiento en Putumayo	...57
2.6 El desplazamiento en la última década	...65
2.7 Situación de los desplazados	...66
2.8 La población de Mocoa	...68
2.8.1 Situación económica	...69

2.8.2 Mocoa: municipio receptor de desplazamiento a causa de la violencia	..70
2.8.3 Perfil y características de la población desplazada	...74
2.8.4 Derechos vulnerados a la población desplazada	...77
3. El derecho a la educación básica a personas entre los 5 y los 17 años, en situación de desplazamiento.	...82
3.1 La educación en el marco de los Derechos Humanos	...84
3.2 Derecho a la educación para los desplazados en Colombia	...97
3.3 Derecho a la educación para los desplazados en el municipio de Mocoa	...106
3.4 Análisis de presupuestos (2007-2009)	...117
3.5 Inversión de la Administración Municipal en atención a población estudiantil desplazada	...122
3.5.1 Institución Educativa Pio XII	...123
3.5.2 Institución Educativa Fidel de Montclar	...134
3.5.3 Institución Educativa Ciudad Mocoa	...141
3.5.4 Escuela Rural Mixta Alto Afán	...148
3.5.5 Institución Educativa Fray Plácido	...152
4. Análisis de la política de desplazamiento	...168
5. Conclusiones	...175
Anexos	
Bibliografía	

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Putumayo, al igual que muchas otras regiones de Colombia, presenta un grave problema de desplazamiento forzado, este fenómeno social se ha dado desde el primer proceso de colonización en la segunda mitad del siglo XIX y llega hasta nuestros días. Todo el estudio que se han realizado sobre la región se debe mirar y analizar cuidadosamente, teniendo en cuenta esta problemática, agravada hoy por la proliferación y expansión de cultivos de usos ilícitos. En este último fenómeno se han originado un sinnúmero de problemas que han llevado a la delicada situación social que actualmente se vive en el departamento, y ante la cual la acción del Estado no ha sido eficiente.

El objetivo principal del presente trabajo se enfoca en señalar la falta de atención a personas en situación de desplazamiento durante los años 2007 – 2009 en el municipio de Mocoa y, en especial la violación del derecho a la educación básica primaria y todo lo que corresponde en proporcionarles un servicio de calidad, con base en la implementación de la política pública que ampara y proporciona todas las garantías a las personas en situación de desplazamiento (PSD) en edad escolar, teniendo como referente las recomendaciones que se hacen en los documentos suscritos por Colombia ante los organismos internacionales como la ONU, UNESCO y la UNICEF. Cuya grave situación de incumplimiento, se manifiesta en un sinnúmero de problemas, entre los cuales el principal es el abandono y la falta de presencia del Estado en el Putumayo. De los orígenes de toda esta problemática se da cuenta en el primer capítulo; señalando inicialmente las continuas equivocaciones en las políticas que el Estado ha utilizado en los procesos de poblamiento o colonización, junto a esto, el total abandono por parte del Estado de los primeros colonos que se ubicaron en estos territorios, a todo esto se agregan las continuas migraciones

causadas por la violencia que se venía dando al interior del país por el enfrentamiento bipartidista, siendo estos los primeros hechos en la que llegará a ser con el tiempo la triste y larga historia del desplazamiento forzado de personas hacia y desde el territorio putumayense. También en esta primera parte se narra lo que fue la fiebre del petróleo y las expectativas que fijaron muchos colonos en esta parte del territorio con la bonanza petrolera.

En la segunda parte de este trabajo se presenta la frágil y débil situación económica del departamento, se muestran las alternativas a que han acudido los campesinos para suplir sus necesidades, tomando decisiones equivocadas cuyas consecuencias con el tiempo le ha costado al Estado grandes cantidades de recursos subsanarlas. La siembra y cuidado de los cultivos de uso ilícito por parte de muchos campesinos trajo consigo gran cantidad de problemas que alteraron el normal y escaso desarrollo que se venía dando en el Putumayo. La adquisición de dinero fácil, propia de esta actividad ilegal, propició un incontrolable aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas y la aparición de prostíbulos y lugares de lenocinio, también se incrementó la comercialización y tenencia de armas, y con ello aumentó la criminalidad en cuanto a robos y asesinatos, así como otros delitos y contravenciones que han llevado a un gran deterioro social a los habitantes de los municipios del medio y bajo Putumayo. Una consecuencia inmediata para la economía de las familias fue el aumento en el costo de vida en estos municipios. Este aterrador panorama se agrava con la incursión de grupos al margen de la ley peleándose el dominio de estos territorios, lo que genera el abandono de las veredas y el desplazamiento hacia los cascos urbanos para huir de los enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y delincuencia común. Los principales destinos de estos desplazamientos han sido los municipios

considerados más seguros, como son Puerto Asís y Mocoa; siendo esta última la jurisdicción del departamento que ha recibido más población desplazada en los últimos 10 años.

Con todo esto se observa la alteración que ha hecho este grave fenómeno en los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos del municipio, concretándose en un total deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, quienes a la vez padecen el abandono y la negación de sus derechos por la irresponsable omisión de la administración departamental y municipal.

Como un complemento a la tercera parte de esta investigación, se presenta un detallado análisis de los derechos, que por mandato tanto universal como constitucional tienen los desplazados, y que continuamente se les han venido negando, en especial a la población desplazada en edad escolar; ya que la obligación estatal de brindarles y garantizarles un servicio educativo de calidad viene siendo cuestionada; sobre ello se presentan suficientes pruebas en este trabajo. Finalmente, se hace un análisis a las políticas públicas que amparan, protegen y dan garantías a la población en situación en desplazamiento, para constatar como la implementación de dichas políticas por parte de la administración municipal y departamental, hasta el momento no ha sido puesta en marcha, lo cual significa un grave perjuicio para esa población.

1. PROCESO HISTÓRICO QUE GENERÓ EL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO EN PUTUMAYO

1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTORICOS

El Departamento del Putumayo tiene una extensión de 25.500 km², está localizado en el Sur occidente de la República de Colombia entre el piedemonte amazónico y las llanuras o planicies de la misma Amazonía. Su división política administrativa consta de trece (13) municipios. Forma parte de la Región Amazónica que es un área de interés para la comunidad internacional debido al valor estratégico de su biodiversidad y a la riqueza multicultural de los pueblos que la habitan. Esta región, como reducto de las áreas boscosas del planeta, cumple un papel destacado en el equilibrio ambiental global y por ello la amenaza de su destrucción tiene un trasfondo ecológico y un significado para la humanidad que está más allá de la contemplación campestre y del proteccionismo a ultranza.

Mapa político del departamento de Putumayo. Fuente: www.departamentosdecolombia.com

Este departamento posee una de las reservas naturales más importantes del país, ubicada en el Parque Natural de La Paya, en el municipio de Puerto Leguizamo. Allí tienen su hábitat especies como los buefos o delfines rosados, junto a una exuberante variedad ictiológica, de serpientes y otras especies animales. Este parque natural posee 1.013.68 Acres de humedales y bosques tropicales y varias áreas de manejo especial como el páramo de Quilinsayaco, la Serranía de los Churumbelos y las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo nacidos en el Nudo de los Pastos en el Macizo Colombiano.

Además, el Putumayo conserva una variedad de flora que ha sido poco intervenida por el ser humano, destacándose el uso medicinal de muchas plantas por parte de las comunidades indígenas, que en unos 106 cabildos tratan de preservar sus tradiciones, en especial alrededor del rito religioso del Yagé. Cuando se habla de biodiversidad en la Amazonía se

debe incluir la especie humana, el espíritu ancestral, y entender el respeto, cuidado y admiración que merece la tradición indígena y la conciencia de esos pueblos ancestrales.

“La población indígena de Putumayo asciende a 30.000 personas aproximadamente. Existen 126 cabildos y 39 resguardos que corresponden a los pueblos camëntzá, inga, cofán, siona, murui, coreguaje, muinane, andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, emberá y paez”¹.

Sin embargo, pese a la diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos que posee el Putumayo y su vulnerabilidad, el Estado colombiano le ha dado un tratamiento generalizado al desarrollo agrícola de la región amazónica; como si fuera semejante a la región Andina; desconociendo así evidentes diferencias naturales como la composición del suelo amazónico, entre otras igualmente importantes.

La característica más relevante del sistema económico regional a lo largo de la historia, ha sido la de una economía sometida y soportada en la extracción selectiva de recursos naturales a través de sistemas de bajo costo, con un escaso o inexistente valor agregado para el departamento del Putumayo y en cambio sí de mucho beneficio para grupos ajenos a la región. Primero fue el caucho, luego el petróleo y ahora la coca.

La mayor parte de la historia de departamento de Putumayo ocurre en un escenario rural. Y desde un principio se presenta allí el problema de desplazamiento forzado de personas. Para comprender la magnitud y el significado de este fenómeno es necesario acercarnos a una descripción del proceso histórico a través de cual se ha ido conformando todo lo correspondiente lo que es hoy el departamento del Putumayo, desde finales del siglo XIX y

¹ Sistema Nacional de Información Cultural. Población Putumayo (indígena) en: www.sinic.gov.co

durante todo el siglo XX, con el fin de mostrar que los constantes desalojos de la gente campesina del departamento, no son más que el resultado de la crisis de la economía rural y la indiferencia Estatal; todo lo cual ha definido la historia del departamento desde la misma formación del Estado en el ámbito local y la percepción que se tiene de él en esta región del piedemonte Amazónico.

José Jairo González Arias en su estudio sobre la violencia en el Caquetá explica el origen de esta problemática, común para todos los territorios de colonización en nuestro país: “El proceso de ocupación del territorio en Colombia ha sido traumático y ha fracasado en el intento de conformar una unidad nacional, pues las políticas agrarias del Estado se han encaminado al fortalecimiento de medianas y grandes unidades agropecuarias, anulando y desviando la presión demográfica sobre las tierras fértiles y productivas ubicadas en las zonas centrales de las cordilleras y valles, promoviendo así las dinámicas de colonización hacia grandes zonas deshabilitadas o “territorios baldíos” como las planicies aledañas a los valles cálidos interandinos y hacia la llanura Amazónica”².

Al revisar todo el proceso que se venía dando desde ese tiempo y a pesar de la legislación sobre baldíos, que consiste en : “La adjudicación de terrenos muy lejanos que tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades del ocupante, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella y contribuir a mejorar las condiciones económicas y sociales de los beneficiados (Ley 56 de 1905)”³, adoptada por el Estado desde comienzos del siglo XX para darle una salida a la situación que ocurría en esos momentos, con la pretensión de fomentar empresas agrícolas y estimular la formación de

² GONZÁLES ARIAS, José Jairo. Aspectos Socioeconómicos y Políticos de la Violencia en el Caquetá 1978-1982. Florencia: Universidad de la Amazonia-ICFES, 1987. P 200

³ Titulación de terrenos baldíos: www.incoder.gov.co

“colonias agropecuarias”, pero que en realidad terminó favoreciendo la conformación de grandes latifundios improductivos, o en el peor de los casos dando paso a la explotación de la ganadería extensiva a expensas del campesino-colono, mostrando además un afán inexplicable del Estado por buscarle propietarios a las reservas territoriales antes de buscar quien las cultivara.

El movimiento colonizador que se originó en ese entonces, desbordó ampliamente la capacidad del Estado para controlarlo; además de que fue promovido de forma improvisada, creando un conflicto cultural entre indígenas y colonos, el cual llegó a excesos por la explotación de los recursos naturales tanto renovables como no renovables, entre estos están las maderas, pieles, fauna, flora para patentes nacionales y petróleo, entre otros; por último, la proliferación de cultivos de uso ilícito, como los de coca, amapola y marihuana. En este complejo contexto fue que se dio la vinculación de la Amazonía a la economía mundial y se inició el imparable avance de la frontera agropecuaria y los distintos procesos de ocupación y colonización de la región; todo esto a costa de la explotación indiscriminada de los trabajadores, primeramente indígenas, ya que por cercanía era el personal que estaba disponible en ese momento para trabajar en el sector agrícola, que por lo general eran aldeas completas de desplazados que recurrían a los grandes cultivadores de caucho como único medio de supervivencia, endeudándose luego hasta la esclavitud y posterior muerte debido a los malos tratos, tal como lo relata maravillosamente el poeta José Eustasio Rivera en su novela *La Vorágine*.

Fue en la Amazonía, y exactamente en el departamento de Caqueta y Putumayo en el poblado la Chorrera punto llamado el Encanto, donde se fundó la primera agencia cauchera que influyera en este conflicto de colonos e indígenas, la famosa y mal recordada Casa

Arana de capital peruano e inglés. Como es sabido por documentos de la época y también por la novela de Rivera, allí utilizaron para la explotación del caucho y otros oficios asociados a su extracción la mano de obra indígena; que fue vinculada a lo largo del tiempo de diferentes maneras: en un principio en condiciones de esclavitud, posteriormente en negociaciones desequilibradas que mantenían a los nativos en una semi-esclavitud para terminar en el establecimiento de simples relaciones mercantiles, ya en sus épocas finales. Este proceso afectó de manera definitiva las estructuras culturales y sociales de todos los grupos étnicos de la región, en especial a los Uitotos, Yucunas y Matapies.⁴

Hasta hoy la presencia del Estado en materia de colonización, poblamiento y desplazamiento en Putumayo prácticamente es inexistente, pues no se cuenta siquiera con la infraestructura física adecuada para la atención de la población, la cobertura y calidad de los servicios públicos es baja, y, lo que es más grave, la total ausencia de una infraestructura que apoye la producción y comercialización de los productos lícitos de la región. “En el departamento la infraestructura vial está reducida a la zona del piedemonte y para sus comunicaciones con el occidente, cuenta con los caudalosos ríos que lo atraviesan en sentido oriente – occidente. Los caseríos y pequeños poblados están situados a la orilla de los ríos que son las principales vías de comunicación. Cuenta con dos puertos fluviales de gran importancia, en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. En el departamento sólo se cuenta con una carretera que une a Puerto Asís y Mocoa y se conecta también con el municipio de San Miguel, frontera con el Ecuador; al interior del país, también otro pequeño tramo entre la Tagua y Puerto Leguízamo, que une los ríos Caquetá y Putumayo; el departamento

⁴ Sánchez, María Camila. *La bonanza del caucho en el Amazonas colombiano: una historia que no se olvida*. En: www.prensarural.org

también cuenta con cuatro aeropuertos ubicados en Villagarzón, Puerto Asís, Orito y Puerto Leguízamo. Su economía se basa principalmente en la producción agropecuaria, también está la explotación de petróleo, principal ingreso que obtiene el departamento por cuestión de regalías”⁵.

El departamento de Putumayo se distingue como región protagónica dentro del proceso de poblamiento de la Amazonía, pues forma parte de la Amazonía occidental colombiana y sirve como puerta de entrada a este gran ecosistema selvático desde el río Caquetá, el Ecuador o el norte del Perú. Por esta razón el Putumayo también se considera parte de la región denominada piedemonte Amazónico. “El departamento como toda la Amazonía a pesar de ser una región periférica no está desconectada de la realidad nacional. Por el contrario, la apropiación del espacio físico nacional y el dominio de las áreas adyacentes han estado presentes en la preocupación del Estado central colombiano así fuera con el interés de lograr una apertura de nuevas fronteras económicas por encima de la diversidad regional, lo que ha conllevado a desconocer la riqueza cultural y ambiental de la Amazonía, identificándola como “terrenos baldíos” ocupados por “salvajes” que debían ser civilizados por las misiones católicas”⁶.

Debemos tener en cuenta que, a pesar de las generalidades del fenómeno, la colonización es un proceso particular; es decir, propio de cada región, y que para ser comprendido debe ser caracterizado con precisión. Hay muchas formas de colonización, como hay múltiples formas de violencia, principalmente porque la colonización es una modalidad de producción, aunque sea también un modo de vida, una forma de desarrollo y una visión

⁵ Departamento de Putumayo: www.todacolombia.com

⁶ Santoyo Jimeno, Myriam. Los Procesos de colonización del siglo XX. En: Nueva historia de Colombia: Las relaciones internacionales, los movimientos sociales. Bogotá: Editorial Planeta, 1989, Vol. III. P. 371-395.

específica del mundo⁷. Por esta razón es necesario describirla de manera particular en Putumayo, pues su comprensión no se puede generalizar equiparándola a procesos vividos en otras regiones del país.

La caracterización del proceso fundador del departamento, resulta un poco complicado, pues a menudo los hechos que componen la historia de esta región se mezclan, convirtiendo así al proceso poblador en un fenómeno complejo de definir, pues su amplitud comprende causas y desarrollos muy variados.

Con todo lo que venía ocurriendo anteriormente, los asentamientos poblacionales que ha tenido el Departamento no se han dado a partir de un proceso planificado, sino como consecuencia del deterioro social, económico y político del país, pero en especial de la economía del campesinado. Así, en este caso como en el de muchos otros territorios, la colonización no es más que la única salida del campesino para sobrevivir, así sea que trágicamente contribuya a reproducir y empeorar la crisis agraria por la que ha ido a parar a las tierras de frontera, produciendo un mapa nacional de grandes contrastes regionales y desequilibrios sociales y culturales, pero sobre todo económicos. Absalón Machado explica muy bien los múltiples factores que implican toda esta problemática: “la tierra continúa siendo un factor especulativo acumulador y apropiador de rentas institucionales en lugar de ser un bien de producción o inversión. Seguido a esto vemos que existe un alto grado de concentración de la propiedad, lo cual es necesario verlo en términos regionales al tiempo que es notoria su fragmentación antieconómica. También está que los índices de pobreza rural son altos y superiores a los existentes en los sectores urbanos. A esto le agregamos que la institucionalidad rural es incompleta, ineficiente y caótica en su capacidad de atender

⁷ Molano Bravo, Op. Cit P. 27-41.

las demandas diversificadas de sus regiones y localidades, así como el apoyo a las familias rurales en el uso del escaso apoyo que disponen en materia de capital natural, humano, físico, social y financiero. Se anexa a esto la violencia y el conflicto que se da en las regiones rurales de nuestro país, acompañado de la irrupción de los cultivos ilícitos en las zonas de colonización junto con el desplazamiento forzado de los pobladores rurales. Todos estos problemas que han ocurrido y siguen sucediendo en Colombia, sintetizan una clara definición de qué es y qué fue el fracaso de la política de baldíos y la situación agraria del país”⁸.

INCURSION DE LOS PRIMEROS COLONOS AL PUTUMAYO

Podemos señalar varias causas que originaron el proceso de colonización del Putumayo con las consecuentes etapas de poblamiento. La primera etapa del proceso de colonización comprendido entre 1880- 1945 que fue la lucha por el monopolio de la propiedad territorial en el país, esto generó múltiples conflictos mediados por las relaciones de servidumbre impuestas al campesino por los terratenientes a principios del siglo XX en buena parte del territorio nacional. Ante toda esa situación de explotación, marginamiento, violencia y falta de oportunidades en el interior del país, el campesino fija sus expectativas en estas “tierras baldías” que aparentemente le ofrecen la posibilidad de liberarse de esa situación oprobiosa y llegar también a ser propietario. Se abre así el paso a un proceso que por sus condiciones económicas, demográficas y sociales es desigual y diversificado pero que trae como consecuencia la paulatina ampliación del límite agrícola. Todo esto se comienza a dar a orillas de los principales ríos del Departamento y de las primeras vías y caseríos que se

⁸ Machado C, Absalón. *Reforma Agraria o Reforma Rural*. En: Análisis Político. Nº 40 (Mayo- Agosto de 2000); p.81-82

intentan construir en el territorio putumayense. Es precisamente dentro de este desigual proceso de ocupación territorial donde se da paso a la formación y percepción del Estado dentro de un proceso todavía inacabado como es la construcción del Departamento de Putumayo como ente político administrativo. Y donde se origina también uno de los prototipos de poblador del departamento: el colono.

Comúnmente conocemos por colono a un campesino arruinado o perseguido, que se introduce en zonas donde la propiedad sobre la tierra no existe o es incompleta, estas zonas que conocemos como territorios de frontera agrícola o baldía se ubican en la periferia del país central o urbano. Es por eso que esta clase de población es obligada entonces a ir cada vez más lejos en busca de la tierra de sus sueños, únicamente con su fuerza de trabajo; es decir que el colono, es un desposeído que carece de toda forma de capital y apoyo del Estado⁹. Aunque el Putumayo como componente activo del Amazonas forma parte de un mismo proceso histórico, su aporte a este es bien particular y diferenciado; en el departamento han existido varias etapas de colonización y auge económico, con bonanzas asociadas a sistemas económicos de enclave, con modelos de desarrollo hacia afuera que no han generado un mínimo de intercambio de utilidades para las localidades.

“Al hoy Departamento de Putumayo los primeros habitantes (colonos) llegaron por diferentes rutas, unos por el Ecuador, otros por el Caquetá y Nariño, otros por Monopamba, entrando a Orito y al valle del Guamuez”¹⁰. Podemos ver que desde 1880 a 1940 se incrementó la colonización a orillas del río Putumayo y Napo de Ecuador con dos grandes expediciones; la primera para la extracción de plantas medicinales como la quina y la

⁹ Ibíd., p. 28

¹⁰ Guerrero Albán, Franco. Putumayo Economía y Sociedad. Bogotá: Editorial. 1995. 185P.

segunda para la explotación del caucho. “La explotación del caucho fue el primer paso que inició la recomposición territorial y étnica de la región y en sí no generó procesos consolidados de colonización que permitieran la ampliación de la frontera agropecuaria”¹¹.

La ocupación del piedemonte amazónico significó desde su inicio el dominio de agentes externos, entre estos están los misioneros católicos jesuitas y capuchinos, como parte del concordato que estableció y se firmó en 1887, el cual consistió en un acuerdo entre el gobierno colombiano y el Vaticano con el fin de establecer misiones en los llamados territorios de fronteras de la región amazónica, con el propósito de evangelizar los grupos indígenas y vigilar los territorios a su cargo. En el Putumayo se establecieron en las poblaciones de Puerto Umbría (1912), Puerto Asís (1912), Puerto Limón (1922) y San Antonio del Guamuez (1922). Los misioneros se apoyaron en los puestos militares fronterizos, y junto con ellos constituyeron por largos años la única y precaria presencia del Estado colombiano.

Durante esta misma época, con el auge de la explotación de árboles nativos y de caucho también se establecieron grandes haciendas arroceras y ganaderas, esto con el propósito de abastecer de alimento a los caucheros, dando lugar a la apropiación de grandes territorios que contribuyeron al origen de las interminables disputas entre los colonos y quienes mostraban títulos de adjudicación, empujando a muchos campesinos a invadir los territorios de las débiles comunidades indígenas, transformando la composición étnica de la región¹².

¹¹ Ramírez. María Clemencia. Entre El Estado y la guerrilla: Identidad y Ciudadanía en el Putumayo Bogotá: Colciencias, 2001. 351P.

¹² Santoyo J. Op. cit., p. 375.

Bajo el gobierno de Rafael Reyes, en 1906, los capuchinos iniciaron la construcción de carreteras en el Putumayo, las cuales se concluyeron en 1933 a raíz del conflicto armado con el Perú para transportar los equipos bélicos, lo que obligó al gobierno a prestar más atención a los marginados territorios nacionales, que una vez pasado el auge cauchero tenían escasos vínculos con el centro del país.

Al monopolio de las mejores tierras en el interior del país desde comienzos del siglo XX, se le agrega un segundo factor de colonización: el conflicto que se destó entre Colombia y Perú (1932-1933) por la disputa de la soberanía de esta región fronteriza, ubicada en gran medida en territorio putumayense. Los sucesos de la guerra y la necesidad de sustentar la soberanía provocan una gran oleada colonizadora hacia estos territorios.

El gobierno colombiano dio inicio a un proceso de poblamiento que tenía como fin fortalecer la frontera a raíz del conflicto con el Perú, estimulando el auge de una amplia colonización para el asentamiento de nuevas familias en la región, así mediante planes y dar apoyo al proceso militar, se fundaron y crearon varios caserios como Puerto Leguízamo¹³; y aunque el municipio de Puerto Asís ya había sido fundado en 1912 se constituyó como lugar de avanzada de Colombia en la frontera, a donde llegaron cientos de soldados que estimularon la actividad económica, todo esto sumado al impulso que daban los jornaleros contratados para la construcción de la carretera Pasto-Mocoa-Puerto Asís, por donde llegaron nuevos migrantes¹⁴. Con esto el marginamiento del área amazónica del proceso histórico del país, sólo comenzó a modificarse a partir del decenio de 1930, con la llegada de colonos provenientes de Nariño, Cauca y Valle, quienes dieron inicio al proceso

¹³ Que en sus inicios se llamó Caucajá, pero a raíz de un incendio en 1941 que destruyó buena parte de su casco urbano se reconstruyó y se le dio el nombre actual, en honor a un Huilense héroe militar del conflicto, asesinado en la batalla del Gûepi.

¹⁴ Guerrero Albán. Op. cit., p.10.

migratorio que va hacia el sureste, siguiendo el curso de los ríos Putumayo, Guamuez y Acaé, donde se concentran las zonas de colonización¹⁵.

El conflicto con el Perú llevó a plantear la necesidad de una política colombiana de ocupación de la Amazonía asociada al control sobre las fronteras; sin embargo, en esa época no se plasmó una política estatal de colonización que se proyectara en una ocupación e incorporación productiva del territorio; así fue como la guerra con el Perú marcó el inicio de una política más definida del Estado hacia la Amazonía. Se hizo necesaria la rápida apertura de vías que permitieran el envío de tropas y su posterior aprovisionamiento, se abrieron así las carreteras Altamira-Florencia, Pasto-Mocoa y se mejoraron otras del interior del país. Por otra parte, fue necesario ensanchar los puestos militares fronterizos existentes y fundar nuevos a lo largo y ancho de los ríos Putumayo y Caquetá, como el ya mencionado Puerto Leguísimo, La Tagua y Araracuara. Es significativo que las negociaciones binacionales tendientes a la delimitación de fronteras ocuparan los primeros treinta años de este siglo.

Durante el período transcurrido entre el conflicto con el Perú y el auge de la inmigración de colonos del interior a la Amazonía, se dio un segundo ascenso de la explotación cauchera, a la par con la extracción y comercialización de productos como la fibra de chiquichiqui, las pieles y las maderas que atrajeron temporalmente algunos pobladores, habiendo ocurrido en sí, un número de sucesos al interior del país que proporcionaron directa o indirectamente, ciertas garantías de libertad al colono y campesino, ante esa situación vivida desde varios años atrás, el papel fundamental que jugaron una serie de normas que terminaron con las aparcerías cuyo propósito fue la de liberar mano de obra campesina que

¹⁵ Ibíd., p.12.

se requería en otras actividades, “todo esto implicó la salida de muchos campesinos de los predios que ocupaban en las haciendas. Muchos de estos campesinos migraron hacia la Orinoquia y Amazonia, desde ese entonces se inician colonizaciones apoyadas por el Estado”¹⁶. Hacia 1934 se inició el comercio de pieles de animales salvajes, comercio que se prolongó por cuarenta años en todos los caños de los ríos Putumayo y Caquetá con sus afluentes, incentivado por peruanos y brasileños. Por otra parte, al final de los años cuarenta se inició el tráfico de animales vivos en la región; lo que demuestra de cierta manera como los colonos tienen una visión de la Amazonía como fuente de recursos inagotables y abandonados, pues no existe ningún tipo de control o cuidado efectivo por parte del Estado. Esta visión sumada a la ausencia del sentido de pertenencia de los colonos por la región empezó a marcar el infausto rumbo que ha llevado el Departamento hasta nuestros días.

1.5 COLONIZACION Y VIOLENCIA EN PUTUMAYO

En esta tercera etapa de colonización aparece, como motivo de un nuevo influjo colonizador, la ola de violencia que se desató al interior del país por disputas entre los partidos Conservador y Liberal, conocidos también como partidos tradicionales. A esto debemos agregar los primeros enfrentamientos que se comienzan a dar entre el Estado y la guerrilla.

En la época de los años cuarenta, un conjunto de circunstancias que tomaron el nombre de “la violencia”¹⁷ modificó el ritmo del poblamiento de la región. Desde entonces se aceleró

¹⁶ Transformaciones de 1920 a 1950 el avance a las selvas humedas Region de la Amazonia en: www.virtual.unal.edu

¹⁷ Básicamente se le conoce como *violencia* al periodo en el que ambos partidos lucharon por el poder persiguiéndose mutuamente, primero los liberales entre 1930-1946 persiguieron a los conservadores (este

la inmigración espontánea, partiendo del piedemonte amazónico siguiendo las rutas fluviales y terrestres existentes. Esta inmigración se asentó en las inmediaciones de la cordillera, dibujando una ancha franja paralela a la misma, y estrechos cordones orientados según la dirección de los ríos principales. Durante esta época de la violencia, los colonos que llegaron al Putumayo iniciaron la explotación del cedro, madera que hoy en día sigue siendo la más importante desde el punto de vista comercial en el río Putumayo.¹⁸ Con la terminación de las vías Mocoa-Villa Garzón-Puerto Umbría-San Pedro-Puerto Asís se abrieron posibilidades de una mayor afluencia de colonizadores andinos, en especial del Huila, Tolima y Nariño, hacia el Caquetá en inmediaciones de los ríos Orteguaza y Caquetá en su curso medio, y riberas del río Putumayo, generando así frentes de colonización localizados a orillas de las carreteras ocupando lugares como el Valle de Sibundoy en la zona del alto Putumayo en su gran totalidad¹⁹

1.6 LA VIOLENCIA Y EL BIPARTIDISMO.

A mediados del siglo XX, entre los años cincuenta y sesenta se inicia una tercera etapa de colonización a causa de la violencia que se vive en el centro del país, resultado de la confrontación partidista por el poder entre liberales y conservadores, lo que provocó una migración masiva de la población andina hacia el piedemonte Amazónico. La muerte de Jorge Eliécer Gaitán causó brotes de violencia popular que involucraron a ambos partidos. En 1950, el partido conservador mantuvo la presidencia, con Laureano Gómez, como resultado del retiro del candidato liberal de las elecciones, en respuesta a la intensificación

periodo conocido como la *hegemonía liberal*), pero a raíz de la división de los liberales en 1946 los conservadores logran la elección con el candidato Mariano Ospina Pérez, dándose continuidad a la violencia pero esta vez los liberales eran los perseguidos intensificando la violencia.

¹⁸ Guerrero Albán, Op. cit., p.22.

¹⁹ *Ibíd.*, p.22.

de los actos violentos de los conservadores contra los liberales. Laureano Gómez reclutó a campesinos conservadores, conocidos como chulavitas, quienes se constituyeron en una fuerza armada, la policía del partido. Gamonales locales conservadores o patrones políticos se aliaron a los chulavitas para perseguir liberales. En algunos departamentos estos asesinos se conocieron como *pájaros* (comparables con los paramilitares por el terrorismo de Estado que ejercían) porque se trasladaban de un lugar a otro matando liberales. Los campesinos liberales se vieron obligados a abandonar sus propiedades y buscar otro lugar para vivir, muchas veces viéndose expulsados de nuevo por la continua persecución. En las áreas rurales se hacían masacres, lo cual diseminaba el terror; en respuesta, la resistencia civil se tornó en resistencia armada y los campesinos liberales también fueron armados por los gamonales liberales para combatir a los chulavitas.

Hacia 1951 Colombia contaba con alrededor de 11.545.372 habitantes, la mayoría rurales que constituían el 70% de la población total, y que fueron víctimas de la violencia obligando a algunos a huir a las ciudades, mientras otros buscaron las tierras bajas de la Amazonía. Esto es un hecho clave para la historia del país, pues a partir de esta etapa se produjo una drástica redistribución de la población en el territorio nacional y se incorporaron al mercado grandes territorios marginados hasta entonces ocupados por poblaciones indígenas de baja densidad demográfica. Este movimiento migratorio colonizador desbordó ampliamente el aparato institucional dando paso a interminables problemas rurales que se prolongan hasta el presente.

Teniendo muy en cuenta el gran número de migraciones que se dieron hacia estos lugares de Colombia, donde se produjo un gran aumento poblacional el cual se refleja en los datos del censo que se realizó en ese tiempo y los resultados fueron los siguientes. “Es clave

resaltar en este trabajo las tendencias del comportamiento demográfico de esta región a partir de los datos del DANE sobre los censo que se hacían en ese tiempo. En el año de 1938, el Putumayo presentó altas tasas de crecimiento anual: de 1938 a 1964 fueron de 4,9% y en el periodo de 1964 a 1985, del 5,38% aumentado en más de trece veces su población en medio siglo. Según el censo de 1993, el departamento del Putumayo registra una población de 204.309 habitantes, que representan en el 31,8% de la población total de la Amazonía, con una densidad de 8,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La población urbana fue de 70.718 habitantes (34,6%) y la rural, de 133.591 habitantes (65,4%)”²⁰

En las zonas urbanas del Departamento se presentó entre 1885 y 1993, un incremento poblacional porcentual de 75%, con Puerto Asís y Mocoa como los principales centros urbanos, concentrando el 43,6% de la población total de las cabeceras. Con base en estos datos estadísticos se ve claramente que la población siempre ha venido en ascenso, debido a las múltiples circunstancias que se han presentado en el Putumayo, y que en el transcurso de este trabajo se han ido explicando.

Distribución de la Población por Departamentos

Guainía	13.491 Hab 3%
Amazonas	37.764 Hab 6%
Guaviare	57.884 Hab 9%
Putumayo	204.309 Hab 32%
Caquetá	311.464 Hab 48%
Vaupés	18.235 Hab 3%

Tomado de: Historia Político-Administrativa de la Amazonía nivel local (1912-1993) P171 Atlas Cultural de la Amazonía Colombiana: La construcción del territorio en el siglo XX. Fuente: Censo de población 1993.DANE.

²⁰ Ariza G, Eduardo. (1998) *Atlas Cultural de la Amazonía (La construcción del Territorio en el Siglo XX)*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 173P

El aspecto más importante de esta etapa radica en que la migración contemporánea ha implicado la apropiación agrícola del territorio y en buena medida una colonización campesina. Se marca, así, una diferencia con todos estos precedentes, pues éste involucra una población permanente que ha modificado drásticamente parte del medio amazónico, marginando y expulsando a los pobladores nativos próximos a las áreas de colonización e incluso, en ciertas zonas, llevándolos a la extinción como etnias.

1.7 LA EXPLOTACIÓN DE PETROLEO Y LA COLONIZACIÓN EN PUTUMAYO COMO LA CUARTA ETAPA EN EL PROCESO COLONIZADOR DEL PUTUMAYO

A mediados de los años sesenta el desarrollo del Putumayo se encuentra asociado a la llamada “fiebre del petróleo”. La bonanza económica suscitada por la explotación de este hidrocarburo dio origen a una cuarta etapa de colonización que propició la formación y crecimiento de poblados como Orito y La Hormiga. La presencia de la *Texas Petroleum Company* abrió atractivas expectativas para nuevos pobladores que se volcaron al Putumayo haciendo uso unas vías de comunicación construidas recientemente. Estas vías permitieron el flujo masivo de personas que llegaron a la región en busca de empleo en la famosa compañía petrolera pero también con la intención de hacerse propietarios de tierras. Se estima que en 1.965 se abrieron 200 kilómetros de carreteras en la región facilitando el acceso de los colonos a nuevos territorios dando origen a muchas veredas. Sin embargo, esta migración se debió más a factores de atracción relacionadas con el prestigio de la compañía multinacional que a la posibilidad real de encontrar un trabajo generado por la

actividad extractiva; de esta manera se fortalecieron y crecieron los asentamientos de Puerto Asís y Valle del Guamuez²¹.

Al igual que eso es muy importante señalar que ese proceso de poblamiento motivado por la bonanza petrolera va estableciendo una economía de enclave, en un territorio que era totalmente ajeno e ignorante a todo lo que traían como multinacional petrolera, en tecnología, en la utilización de la mano de obra especializada y que en el territorio no la encontraban, también están los elevados salarios que les proporcionaban a sus empleados y obreros; todo esto encareció el costo de vida donde estaban asentados, caracterizado principalmente por una producción aislada y un control absoluto de la región, esto tuvo como consecuencia un estancamiento que frenó el progreso esperado e impidió desarrollar la zona circunvecina y regional²². Todas esas situaciones generó la multinacional petrolera

Al igual que en las anteriores etapas de colonización no se produjo una planeación en lo económico ni en lo social, por lo cual se generaron nuevos traumatismos y alteraciones en la región sufridos por un gran sector de la población que fue articulado inicialmente a la explotación petrolera, pero que posteriormente quedó flotante, a la espera de unas regalías que no llegaron o no le favorecieron, viéndose forzado a buscar otras alternativas. Se puede afirmar que, contrariamente a lo que se esperaba y al igual que las anteriores etapas de colonización, la bonanza petrolera no fortaleció la base económica de los habitantes, y al poco tiempo, cuando pasó el auge del petróleo, la gente quedó desocupada, las ganancias no se invirtieron productivamente y los antiguos trabajadores tuvieron que empezar un nuevo ciclo.

²¹ Alrededor de los campamentos provisionales que la Texas construía, se instalaban cantinas, prostíbulos, graneros y pequeñas viviendas de subcontratistas de obra. Después, cuando la empresa se marchaba, quedaba el campamento, que poco a poco se convertía en un centro urbano.

²² *Ibíd.*, p.24.

El proceso de explotación petrolera incorporó a la economía de la región grandes extensiones de selva hasta entonces virgen, tierras que también fueron utilizadas por los colonos para actividades agropecuarias y ganaderas. Pero dichas actividades no fueron respaldadas por una acción eficaz del Estado en materia de prestación de servicios públicos ni de mecanismos de protección a la seguridad y la vida de los ciudadanos; por el contrario las regalías recibidas por concepto del petróleo no sirvieron más que para cebar una abundante burocracia que se convirtió en el núcleo de corrupción en el cual se perdieron los dineros de las mismas²³.

Comprendiendo y comparando las etapas de colonización que históricamente se han dado en el departamento de Putumayo, podemos concluir que la percepción histórica que el Estado ha tenido de esta región desde un principio, ha sido la de un territorio baldío; por lo cual se fomentó su ocupación sin algún tipo de planificación, obteniendo unos resultados impensados, ya que esas incursiones improvisadas al territorio trajeron serias consecuencias para los colonos inmigrantes, pero principalmente para sus habitantes nativos, que desde el principio comenzaron a ser expulsados de las tierras que ancestralmente les correspondían, todo esto a causa de una política agraria mal diseñada que no supo medir las consecuencias que esto tendría para el equilibrio económico y social de esta parte del país.

En realidad en el departamento del Putumayo el Estado sólo se hizo presente cuando la colonización se encontraba avanzada, y lo hizo, como ya se mencionó antes, debido a la confrontación bélica de Colombia con Perú. Pero en lo referente a la prestación de servicios a la población, su acción se va presentando muy gradualmente y focalizada exclusivamente

²³ Guerrero, Albán Op. cit., p.16.

en los centros con mayor población y sus alrededores. Aún así la prestación de servicios básicos como educación y asistencia en salud es muy precaria. Y los programas de desarrollo liderados por el Estado siempre han beneficiado a los terratenientes que se consolidaron como propietarios de grandes extensiones de tierra y que frecuentemente actúan como agentes para la integración o expulsión de los colonos, pues la acción del Estado para esta región, no se da en forma directa sino filtrada por el poder local, en donde es redefinida²⁴. Así lo legal y lo legítimo suelen perder su armonía difícilmente recuperable en el marco de una institucionalidad débil y difusa. En consecuencia, para el caso del Putumayo, toda la problemática ligada a los procesos de colonización no se puede entender como resultado natural de una serie de eventos económicos, sino que también tiene sus raíces en el espectro político²⁵.

Dentro de este contexto de dificultades para la consolidación de una economía campesina y de los reiterados fracasos de una errática política de colonización estimulada por el Estado, es como puede comprenderse la incursión de la economía cocalera y la consecuente aparición de grupos armados y otras actividades derivadas de ese cultivo y comercio ilícito.

1.8 LOS CULTIVOS USO ILICITOS EN PUTUMAYO Y SU EXPANSIÓN

Los cultivos uso ilícitos han modificado el proceso de colonización, saltándose muchas etapas características de la colonización campesina, transformándola en un proceso más acelerado y diverso por la presencia de nuevos tipos de colonizadores que ya no son sólo campesinos, sino otra variedad de personas provenientes de los más diferentes sectores sociales, que ya no llegan con las mismas esperanzas y sueños agrícolas de los antiguos

²⁴ Molano Bravo, Op. cit., p.37.

²⁵ Gonzales Arias, Op. cit., p.7.

colonizadores y que, por el contrario, traen intereses y valores adversos a los que se han vivido hasta entonces allí; todo esto profundiza todavía más la crisis campesina, volviendo extremadamente compleja la búsqueda de soluciones apropiadas para todos los sectores implicados. En suma, la nueva dinámica colonizadora emerge como alternativa sociopolítica y económica para una comunidad que no encuentra canales adecuados de comunicación con el Estado ni formulas de inserción institucional.

El cultivo de uso ilícito de la planta de coca en el Putumayo comenzó a mediados de la década de los 70 del siglo XX, posiblemente en Puerto Asís a donde llegaron los primeros cultivadores caucanos, especialmente de Bolívar y Almaguer donde es tradicional el cultivo de hoja de coca y los indígenas la mambean, es decir, la mascan y la comen acompañada de cenizas de otras plantas en un rito ancestral muy imbricado en su cultura. Esa primera variedad caucana se sembró cerca de los ríos Caquetá, San Miguel, Valle del Guamuez y en la rivera del Rio Putumayo. A inicios de la década de los 80 la producción de hoja de coca se incrementó, debido en parte a que la producción de cultivos tradicionales en la región entró en crisis porque fue desplazada por la ganadería extensiva. Estos años fueron una verdadera catástrofe para el sector agropecuario, pues afloraron los problemas de infraestructura vial, mercadeo, asistencia técnica y crédito; como consecuencia de esto, la producción agrícola de Putumayo disminuyó desplazándose hacia otras regiones y los cultivadores de coca encontraron el terreno abonado y el aislamiento necesario para que su negocio comenzara a expandirse y consolidarse.

La consolidación y expansión del cultivo de hoja de coca se dio obviamente y sólo por ventajas comparativas sobre los cultivos lícitos tradicionales, como el pago al contado, alto margen de rentabilidad y sobre todo garantía del mercadeo, el no requerimiento de fletes de

transporte a cargo del cultivador, además de que produce entre 5 y 6 cosechas anuales en comparación con las dos o tres de cultivos lícitos como el maíz, el plátano o la yuca. Todo esto ayudó a que la población de colonos, que originalmente había llegado con intenciones de desarrollar la agricultura tradicional, y también las comunidades indígenas de la región fueran vinculadas al monocultivo de la coca, por fuerza de necesidad, provocando así una drástica alteración cultural en la región. En gran medida esta expansión se debió a la acción de los comerciantes y las nacientes organizaciones interesadas en la producción y explotación de la hoja de coca de forma industrial; quienes suplieron su necesidad de mano de obra para esta industria ilegal, acaparando a la población campesina que antes se empleaba en la producción agrícola y ganadera.

A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, como resultado de la represión gubernamental a los narcotraficantes y por la expansión de algunas plagas que dañaban las plantas, hubo una rápida disminución en el precio de la hoja de coca. Pero entre 1992 y 1993 se introdujo la variedad peruana “Tingo María” a diferencia de la caucana, “que produce 6 cosechas anuales y es mucho más resistente a las pestes que otras variedades, esta fue traída del Peru”²⁶, gracias a esto el cultivo no sólo se reactivó sino que aumentó considerablemente su producción, pues una región como el Putumayo le favorecía por ser selva tropical húmeda, y por su posición de frontera para ocultar los laboratorios de procesamiento de las hojas y poder exportarla transformada en pasta de coca o cocaína.

La incapacidad de la economía agropecuaria lícita, la falta de programas de apoyo por parte de los gobiernos regionales y locales para garantizar la permanencia del colono ha legitimado en los últimos veinte años el cultivo uso ilícito de hoja de coca, no sólo en

²⁶ Características de la hoja de coca en Colombia, tomado de: www.unodc.org/colombia

Putumayo, sino en toda la región amazónica. A diferencia de las pasadas actividades extractivas por las que los colonos viajaron a la región, el cultivo de la hoja de coca ha mejorado sustancialmente su calidad de vida, convirtiéndose así en una salida rápida a la condición marginal y de exclusión a la que han estado sometidos durante décadas en sus lugares de origen y en el propio departamento.

Hasta 1994 llegó a la región un considerable número de personas provenientes de los departamentos del Huila, Cauca, Valle y sobre todo de Nariño, así como de la zona cafetera colombiana y del Ecuador, pertenecientes todos al área andina, donde la temperatura, la vegetación, el suelo y la topografía difieren radicalmente de las condiciones climáticas de la Amazonía, lo cual representa grandes limitaciones para una explotación agrícola intensiva como la que practicaban en sus tierras de origen; ya que, poco después del desmonte, el suelo despojado de su follaje protector y lavado por las intensas lluvias amazónicas, produce unas cosechas muy pobres, ocasionando así la ampliación progresiva y acelerada de la frontera agrícola y el posterior desplazamiento hacia nuevos territorios ocupando incluso los de los nativos. Desde entonces la migración atraída por las oportunidades de la economía de la coca continúa dándole vigor y permanencia al proceso de ocupación de Putumayo, aunque de una manera menos intensa, utilizando nuevas vías en funcionamiento como la carretera Mocoa-Pitalito-Bogotá, que incluso desde su precario estado de construcción comenzó tener una circulación muy numerosa.

Procedencia de los
Colonos por departamento

Nariño	54.5%
Cauca	14.65
Putumayo	8.1%
Valle del cauca	5.7%
Tolima	4.9%
Caquetá	2.4%
Cundinamarca	2.4%
Meta	1.6%
Huila	0.8%
Otros	4.9%

Periodo de vinculación
de los colonos a la región

Periodo de vinculación	de	Porcentaje de colonos
1930-1946		0.80%
1947-1967		23.20%
1968-1977		19.20%
1978-1986		37.60%
1987-1993		19.20%

Fuente: Ariza, et. Al. 1998. Atlas Cultural de la Amazonía Colombiana: La construcción del territorio en el siglo XX. Ministerio de Cultura-Instituto Colombiano de Antropología, Corpes Orinoquía, Corpes Amazona, Bogotá. Pág 41-43

La colonización en el Putumayo y el impacto que ha tenido este proceso en general en la Amazonía es un fenómeno con un complejo dinamismo, pero inacabado, lo cual supone que Putumayo está todavía en la construcción de su historia e identidad recorriendo el desconocido camino de la colonización, que si bien no pueden preverse todavía resultados estables y conclusiones definitivas, si se pueden observar los grandes impactos que han cambiado la vida del colono, la del nativo y la de la misma naturaleza, distinguiendo el proceso de colonización Putumayense del de otros departamentos del país.

La colonización aunque en sí misma es una respuesta y una salida a un asunto de mayores dimensiones como es la cuestión agraria, lejos de ofrecer una verdadera solución, reproduce los mismos problemas y crea otros. Entre los numerosos problemas que ha dejado el fenómeno de la colonización en la región sobresale su impacto sobre el entorno natural y el medio ambiente en general. Aunque los daños a los ecosistemas se iniciaron desde la llegada de los primeros colonos en el siglo XIX, tan sólo durante la colonización coquera

ha cobrado importancia, pues es ahora cuando se hace más notoria la utilización y contaminación indiscriminada de los recursos naturales del frágil ecosistema amazónico. El grave deterioro ha motivado a los expertos a advertir que si no se actúa inmediatamente y con una política más eficiente que la de declarar reservas naturales a cualquier parte de la región pero sin ninguna vigilancia y control eficaz, los daños podrían llegar a ser irreversibles²⁷.

Las marchas cocaleras ocurridas en 1995 y 1996 reflejan la magnitud del problema ambiental, pues aunque la hoja de coca en sí no es dañina para el medio ambiente por ser un arbusto permanente, la proliferación de su uso como un cultivo comercial ilícito es lo que causa daño, ya que para extender su producción y lograr sus fines comerciales se genera una incontrolada tala de numerosas hectáreas de bosques primarios, quema del suelo o alteración del terreno; esto último, no sólo por el sembradío, sino porque la acción directa del sol sobre los cultivos al no contar con la protección del bosque, evapora la capa vegetal superficial que cubre el suelo, destruye también la micro fauna encargada de transformar la materia orgánica en elementos aprovechables, todo lo cual deja expuesto el terreno a la erosión causada por el agua de las lluvias que allí son frecuentes y abundantes. Esto se agrava con el uso excesivo de insumos químicos y agroquímicos, así como por el manejo y procesamiento de la hoja de coca en laboratorios, acciones que terminan incidiendo en una mayor degradación de los suelos y contaminación de los ríos, pues en el procesamiento de la hoja de coca se utiliza gasolina, cemento, soda cáustica, amoníaco, ácido sulfúrico, entre otros; y después del macerado, adición química, separación y secado los desechos son

²⁷ Se ha tenido suficiente conocimiento en todo el país de que los cultivos ilícitos están siendo sembrados en zonas de reservas para evitar la fumigación aérea, esto para nosotros evidencia una acción descuidada del gobierno, pues no establece mecanismos de vigilancia y control sobre zonas de gran importancia ambiental.

depositados en el suelo y los residuos líquidos tirados a los ríos, quebradas y cañadas cercanas, contaminando en una medida todavía no cuantificada los recursos hídricos del departamento. Como si todo esto fuera poco, el daño ambiental se refuerza con la aplicación de políticas de erradicación forzosa de los cultivos basada en la fumigación aérea.

Así, la frontera de colonización se ha ampliado paulatinamente no con el fin equivocado que en un principio tenía el Estado de incorporar a la economía nacional estas zonas, sino para despejar el camino al cultivo ilícito de hoja de coca, deteriorando los terrenos, convirtiéndolos en futuros desiertos, en suelos cansados y erosionados por el constante uso de herbicidas y la deforestación, con el aniquilamiento de los microorganismos productores de la materia orgánica de la tierra, necesarios para su mantenimiento y renovación²⁸.

Ante esa desoladora realidad, fruto de tan irregular proceso de colonización y de la proliferación de los cultivos ilícitos, desaparecieron del departamento los cultivos lícitos que se labraban en muchas regiones del departamento al igual que el negocio del ganado vacuno desde los años sesenta y setenta²⁹.

²⁸ Guerrero, Albán Op. cit., p.35.

²⁹ Guerrero, Albán, Op. Cit., p.76

Fuente: Secretaría de Planeación del Putumayo, en informe de la gobernación presentado a la presidencia de la república, Mocoa 2002.

En esta gráfica se muestra cómo ha ido aumentando la población de acuerdo a las diferentes etapas y procesos de colonización. Vemos que a partir de la “bonanza cocalera” y hasta el año 2002 es la etapa donde más han migrado personas al departamento, superando otras etapas cruciales como la época de la violencia que se dio al interior del país de 1951 a 1964, precedida unas décadas por la “bonanza cauchera”. Pero es el surgimiento de los cultivos ilícitos que va desde 1973 a 1985 y la “bonanza cocalera” de 1985 a 1995 la etapa de mayor poblamiento. En esos 10 años el departamento rompió sus índices de crecimiento poblacional llegando a duplicarse la cantidad de habitantes.

Un proceso social como este obviamente cambia la conducta de los colonizadores y de los habitantes ancestrales de la región, creando entre ellos una particular percepción del Estado como un ente alejado y ajeno, razón por la cual surge la necesidad y la costumbre de

utilizar cualquier recurso al alcance para sobrevivir ignorando la legalidad o ilegalidad de esas prácticas, pues se desconoce casi totalmente la autoridad del Estado, ya que este sólo ha aparecido esporádicamente y con medidas arbitrarias que han impedido la construcción de confianza y ,legitimidad.

Por otra parte es preciso señalar que, aunque el cultivo ilícito de hoja de coca ha mejorado en algo la calidad de vida de los campesinos, el dinero generado por esta actividad no se queda en la región. Esto se evidencia en la cantidad de servicios de giros que se registran en los municipios cocaleros, mediante los cuales se envían miles de millones de pesos. Esto no sólo permite revelar un desangre económico sino que también refleja la falta de sentido de pertenencia de la población llegada recientemente al Putumayo, y hace notar que sólo se encuentran ahí para aprovechar la rentabilidad del auge de la coca, pero carecen de un proyecto como comunidad o sociedad afincada en ese territorio. Todo esto va acompañado de un alto consumo de alcohol, prostitución, violencia cotidiana y asesinatos, que crean una imagen para el gobierno central, y para los habitantes del resto del país, de un territorio peligroso y hostil al cual es necesario enfrentar mediante el uso de la fuerza.

1.9 EL CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO EN PUTUMAYO

Colombia entra al siglo XXI marcada por la guerra y aferrada también a una incierta esperanza de paz en la cual pretende encontrar los signos de un futuro menos amenazador, vemos en sus habitantes numerosas expresiones sociales que buscan establecer un nuevo discurso de fraternidad y consolidar un lenguaje de reconciliación. Paralelo a esto, un gran número de familias e individuos expulsados violentamente de las zonas rurales recorre la

geografía nacional buscando seguridad y protección en ciudades y poblados, personas con unas problemáticas que en su mayoría, y en un tiempo muy corto se desdibujarán bajo el término de “desplazados”.

La violencia colombiana ha tenido como escenario principal las zonas rurales y ha hecho de la población campesina y colonizadora su principal, aunque no exclusiva, víctima. Desde inicios de los años 80, la magnitud y degradación de la confrontación armada han hecho del desplazamiento la única opción de seguridad para miles de habitantes de los territorios en conflicto. “No obstante, el “problema de los desplazados” no corresponde solamente a la confrontación entre fuerzas insurgentes, paramilitares y el Estado. También otras formas de ejercicio violento del poder expulsan poblaciones habitantes de las regiones insertas en mega proyectos de desarrollo, el control territorial de zonas estratégicas económica y/o militarmente, la defensa de intereses sobre la tierra o de consolidación de poderes regionales”³⁰.

Hay que tener en cuenta que desde la perspectiva de las víctimas los desplazamientos poblacionales forzados son episodios traumáticos que en el nivel individual implican pérdidas de distinta índole como vidas, bienes, modos de vida, redes de relaciones, referencias, etc; y que todo esto en el plano colectivo se traduce en fracturas de las estructuras demográficas, de producción económica y cultural, en los modos de vida y en el tejido social, en grados distintos pero a todos los niveles de lo local a lo nacional. De ahí se puede concluir que la existencia misma del desplazamiento forzado constituye un indicador de una profunda incapacidad del Estado colombiano para cumplir con sus funciones constitutivas que, entre otras cosas, se manifiesta en el conflicto armado con respecto al

³⁰ Segura E, Nora. (2001) *Colombia Guerra y Desplazamiento*. En: Análisis Político. Nº 43; p.83-85

monopolio legítimo de la armas, el control territorial, la administración de justicia, el monopolio tributario, la garantía de seguridad y protección de los ciudadanos³¹.

De esta manera, la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente en nuestro país como origen del desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las principales causas los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a las zonas campesinas, los operativos militares que lesionan a la población civil, las acciones de los grupos paramilitares y los operativos antinarcóticos. Añadiéndose el hecho de que el grave problema del desplazamiento también hace parte de la lógica de la guerra contrainsurgente; es en el caso de los habitantes de zonas campesinas, que supuestamente sirven de apoyo social a la guerrilla, quienes son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos por miembros de grupos paramilitares y de individuos simpatizantes de las fuerzas armadas estatales; siendo un mecanismo de re-poblamiento comúnmente utilizado en el conflicto armado.

La posición estratégica del departamento de Putumayo, como zona de frontera con Ecuador y Perú, y la cantidad de cultivos ilícitos que en ella se encuentran, ha convertido a la región en un territorio en disputa para las autodefensas o paramilitares y las FARC, lo cual ha hecho que los índices de violencia se incrementen de forma alarmante, al igual que el desplazamiento forzado que, como ya está dicho, es una de sus consecuencias. Allí los primeros registros estadísticos sobre desplazamiento se ubican en el año de 1998 desde ahí se continuaron presentando progresivamente.

AÑO	1TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4TRIMESTRE	TOTAL
1999	1000	1300	1230	815	4345

Fuente: Monitoreo de población desplazada departamento del Putumayo – Sisdhes CODHES

³¹ Segura Escobar, Op.Cit., p.86-87

En este cuadro se puede ver, el aumento de la población desplazada, que se comenzó a dar a finales de 1998 y todo el 99, ahí se muestra registrado las cifras que se dieron por trimestre, en todo 1999; los orígenes son varios.

Entre sus principales causas se reportan las siguientes: amenazas generalizadas, amenazas específicas, masacres, tomas de municipios, enfrentamientos armados entre paramilitares y guerrilla, así como entre las fuerzas armadas y la guerrilla, y las fumigaciones ordenadas por el gobierno nacional como parte de la política antinarcóticos. La presencia de los actores armados y la estrategia con que se realizan las fumigaciones ha ocasionado que sea prácticamente imposible cuantificar el fenómeno del desplazamiento.

Todos estos problemas que causan el fenómeno del desplazamiento en el Putumayo, coinciden con los de otras regiones a nivel nacional donde también se presenta esta dificultad. Independientemente de sus causas, los conflictos armados establecen restricciones que limitan la capacidad de acción de las autoridades, y podemos concluir desde ahí que los costos sociales que generan los conflictos son de enormes proporciones.

Se sabe que la situación actual que se presenta en el Putumayo, y en general en el país, en cuanto al problema del desplazamiento, constituye una clara violación de los derechos humanos, pues se ha venido vulnerando la integridad tanto física como emocional de todos los individuos que lo padecen.

CONCLUSIONES

El impacto social que ha generado el fenómeno de la colonización en el departamento del Putumayo es todavía hoy muy difícil de medir o cuantificar. Para las instituciones estatales, desde muchos años atrás, ha sido usual tomar a las comunidades como simple objeto de sus programas de inversión de forma improvisada, sin tener en cuenta su participación en la toma de decisiones y mucho menos atendiendo a las necesidades básicas, tampoco han mostrado interés en darle apoyo al desarrollo regional y local que en verdad se merecen los pobladores. La acción estatal en departamentos como el Putumayo se ha caracterizado por una burocracia ineficiente, que se perpetúan en el tiempo pero sin ofrecer los resultados necesarios para el bienestar y el desarrollo equilibrado de la región. Por otro lado se mantiene y aumenta una presencia represiva en estas zonas, la cual distancia al Estado de la comunidad, dando lugar a que se rompa la armonía entre lo legal, lo lícito y lo legítimo, permitiendo prácticas, generalmente corruptas, mediadas por el clientelismo y el gamonalismo regional. Este distanciamiento se ve reflejado en la aparición de formas de contrapoder y conductas por fuera de la ley, que a su vez son sostenidas por la explotación que desde mucho tiempo atrás se ha venido dando de los recursos naturales y su comercialización sin ningún control, como ha ocurrido con el caucho, la quina, las maderas, las pieles, el petróleo y, en especial, con la hoja de coca, todo lo cual ha significado un costo muy alto en la transformación natural, cultural y demográfica de esta rica región colombiana.

El proceso colonizador que se dio en el Putumayo ha destrozado toda la armonía estabilizadora y perdurable en las comunidades indígenas originarias del departamento. El Estado mismo con su improvisación en lo referente a las políticas que utilizó para ocupar

los territorios, mostró incapacidad en su gestión. Claras pruebas de esta afirmación se encuentran en el fracaso de la política de baldíos, en la falta de una política agraria acorde a las necesidades legítimas del departamento, pero sobre todo la insuficiente protección de los grupos y resguardos indígenas que existen en el territorio. Como consecuencia vemos que en pleno siglo XXI se sigue tratando a los indígenas de diversos grupos étnicos como salvajes atrasados, lo cual parece dar licencia para rechazarlos y atropellarlos, irrespetando sus creencias e idiosincrasia, su cultura, y hasta atentando contra su vida, sin que el Estado muestre la menor preocupación por salvaguardar y garantizar la supervivencia y el derecho a un territorio de los pueblos indígenas de esta y muchas regiones de Colombia.

La situación que vive el departamento del Putumayo en materia de violencia y de desplazamiento, ha sido originada por el Estado mismo, pues éste siempre le ha dado una importancia mínima a la problemática que en este territorio se ha vivido. Esto es palpable cuando se reconoce que con el pasar de los años, los gobiernos que han estado de turno tanto en el nivel central, como en el regional y local no han generado ninguna alternativa de solución, enterrando en el más absoluto atraso y abandono a esta región del país.

2. SITUACIÓN DEL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL (MUNICIPIO DE MOCOA)

2.1 LA ECONOMÍA DE LA COCA EN PUTUMAYO

Esa última gran bonanza colonizadora, la cocalera, apenas está siendo comprendida en toda su dimensión histórica. Efectivamente, si bien los procesos regionales han sido analizados hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, lo sucedido en los últimos

años es poco conocido; la región sólo se ha visibilizado a partir de la descripción estereotipada y algunas veces amañada de hechos coyunturales recientes que, por su efecto inmediatista, agotan cualquier alternativa de análisis global por parte de la opinión pública.

La agricultura ha vivido procesos de crisis en el departamento, particularmente en lo que corresponde al Medio y Bajo Putumayo. Las condiciones de los suelos y del medio ambiente, así como la superpoblación de las áreas fértiles sobre las vegas de los ríos, unidas a la ausencia de programas de asistencia técnica, planes de fomento e infraestructura para dinamizar el mercado agrícola, han impedido que la agricultura de productos lícitos se convierta en un renglón importante de la economía regional.

Virgilio Becerra sintetiza con mucha precisión este fenómeno cuando afirma que “El cultivo de la coca, de una u otra forma, resulta ser un mecanismo para resolver problemas de productividad de la tierra, ocupación laboral y comercialización de los productos, en momentos en que la depresión petrolera de hace algunos años y la continuidad de la colonización del Putumayo determinaron la crisis estructural, económica y social de la región”³². En otras palabras, esa crisis fue el resultado de la ausencia de una política de tierras y de fomento de la actividad agrícola entre los colonos, que si bien preocupó al Estado en el inicio de la producción petrolera, pronto se mostró limitada e insuficiente ante el avance de una colonización masificada donde los recién llegados entraban fácilmente a los circuitos de la producción. Una vez en crisis, esa ausencia de una política de tierras y promoción agrícola fue terreno fértil para la producción cocalera, que entró tanto a pequeñas propiedades de colonos pobres, provistos por medio del sistema del endeudamiento muy semejante al de la época cauchera por parte de comerciantes y

³² Becerra, Virgilio. *Putumayo Estratégico*. Periódico Universidad Nacional de Colombia, Enero 15 de 2001

"oportunistas", así como a grandes haciendas adquiridas por jefes regionales y nacionales del narcotráfico. No obstante, y a pesar del aparente bienestar que ofrece, el cultivo de la coca no ha sido un mecanismo de solución a la crisis; por el contrario, se ha valido de ella, se ha aprovechado de sus manifestaciones conflictivas y ha mantenido las formas inequitativas de distribución de la riqueza y las condiciones de pobreza, desempleo y conflicto social con muy altos niveles de violencia en la región.

La colonización y el cultivo de coca no se detienen. Adicionalmente, se ha generado un modelo de ocupación de trabajadores estacionales llamados raspachines, "Campesinos que dedican a quitar las hojas de coca de de las ramas" estos llegan a la región cada tres meses para asumir durante tres semanas la recolección de las hojas de coca. Estas personas no presentan vínculos directos con la estructuración de un modelo económico alternativo y constructivo para la región, y su presencia se puede comparar con las condiciones de la cauchería en particular, y en general con todas las industrias extractivas que se han asentado en el suroccidente de Colombia.

Los datos regionales muestran que más del 80% del área cultivada en coca en el Bajo Putumayo se inició con cultivos familiares de menos de dos hectáreas. En la actualidad, el 50% de la producción de hojas de coca está conformada por pequeñas propiedades inferiores a cinco hectáreas. El empleo que genera la economía de la coca se da con unas condiciones de total desprotección a los mismos; es decir que no existe una relación laboral formal ni mucho menos de seguridad social. El comercio local solamente abastece el proceso productivo en lo relacionado con electrodomésticos, alimentos y ropa. Es decir, la gran rentabilidad del negocio está muy lejos de los habitantes del Putumayo, pues en éstos tan sólo ha producido el espejismo del enriquecimiento rápido, pero en realidad lo que ha

fomentado es la reproducción de la pobreza, el incremento de la violencia y, en consecuencia, los índices de desplazamiento.

2.2 SITUACION ECONÓMICA Y SOCIAL QUE VIVE PUTUMAYO

Colombia ocupó a finales de 2004 el tercer lugar en el mundo en desplazamiento forzado interno (351.683 hogares que equivalen a 1'580.396 personas)³³; y el Putumayo se situó en el sexto lugar en expulsión y décimo quinto en recepción del total nacional.

El desplazamiento forzado en el Departamento de Putumayo, al igual que en el resto del país, es una consecuencia crítica de la confrontación armada; y la crisis humanitaria que afecta a miles de colombianos en situación de desplazamiento atenta contra los derechos humanos fundamentales de la población.

Según datos del DANE para el año 2004, en Putumayo vivían 369.357 habitantes³⁴; de ese total, 121.930 personas ocupaban áreas urbanas (33%) y 247.427 áreas rurales (67%), para una densidad de 15 habitantes por km². Del total poblacional, el 53% eran hombres y el 47% mujeres; el 48% eran menores de 18 años, el 48% estaban entre 18 y 60 años, y el 4% eran adultos mayores.

Así mismo el documento CONPES afirmó que “Del total de la población departamental, 25.688 son indígenas, lo que corresponde al 7%, representados en 12 etnias o pueblos diferentes, organizados en 189 comunidades: 65 resguardos legalmente constituidos, 109 en trámite y/o gestión, 15 cabildos urbanos; en su mayoría constituidos por pueblos inganos, Huitotos, Sionas, Cofanes, Kamentsá, Coreguajes, Quechuas, Nasa, Embera, Awá,

³³ Sentencia T- 025 de 2004. Desplazamiento Forzado. Defensoría del Pueblo y Acnur 2004

³⁴ Sistema de Información Socio-Demográfica –SISDE- del DANE

yanaconas y pastos”³⁵. Y en el “Plan de desarrollo para la población afro putumayense” se lee que “Otro grupo poblacional son los afro descendientes con aproximadamente 25.000 habitantes en el Departamento, asentados principalmente en los Municipios de Mocoa, Orito y Puerto Caicedo”³⁶.

Como se había explicado anteriormente la cobertura aproximada de servicios públicos en el Departamento como acueducto, alcantarillado y aseo es del 70% en áreas urbanas y del 40% en áreas rurales; más del 95% de las localidades urbanas no poseen agua potable apta para consumo humano, ni sistemas adecuados para la disposición final de los residuos sólidos, incrementando así las tasas de morbilidad por infecciones respiratorias y gastrointestinales.

El Putumayo se encuentra en una zona de clima ecuatorial lluvioso³⁷. La temperatura oscila entre los 27°C y los 18°C, pasando por los pisos térmicos cálido, templado, frío y páramo; y la humedad relativa es superior al 80%. “En Putumayo la vegetación de tierras bajas cálidas y húmedas está representada por el bosque primario de llanura amazónica (60%); cultivos, pastos y rastrojos (35%); y bosques andinos (5%). El aprovechamiento y movilización de maderas de alto valor comercial fue de 841.947 m³, decreciente entre 1987 y 2001; también se encuentra variedad de maderas para construcción, plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas” En el período 1993-1998, el aprovechamiento y movilización de peces de consumo fue de 1.250 toneladas, y de peces ornamentales fue de 3’185.454 unidades, hacia mercados nacionales, principalmente.

³⁵ Documento CONPES INDÍGENA de la Amazonía – Capítulo Putumayo. OZIP. 2004

³⁶ Plan de Desarrollo para la Población Afro putumayense “Hacia un Putumayo Pluriétnico y Multicultural 2001-2006

³⁷ Anuario Estadístico del Putumayo. 1998. CORPOAMAZONIA

La actividad minera está representada primordialmente por la explotación de 120 pozos petroleros, cuya producción ha disminuido por diversas circunstancias, pasando de 120.000 barriles/día en los años setenta a 13.500 barriles/día en los años noventa; en diciembre de 2000, fue de apenas 8.000 barriles/día³⁸. Se encuentran yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del denominado Macizo colombiano, especialmente en la cordillera Centro– Oriental.

Hasta hace algunos años, la economía subterránea generada por el cultivo ilícito, procesamiento y comercialización de la hoja de coca fue una de las principales fuentes de ingreso del Departamento; hoy en día, también cobran importantes reglones actividades como la ganadería de carne y leche; las maderas y la piscicultura; los frutales y flores amazónicas; los cultivos de pan coger; hidrocarburos y oro entre otros.

Respecto a las vías, encontramos que los caseríos y pequeños poblados están situados a orillas de los ríos que son utilizados como medios de comunicación, especialmente el Putumayo, el Caquetá, el San Miguel y el Guamuez. La principal carretera que existe une el puente internacional sobre el río San Miguel, en la frontera colombo-ecuatoriana, con Mocoa, la capital departamental; desde aquí se bifurca en dos ramales, uno hacia Pitalito en el departamento del Huila, y otro hacia Pasto en el departamento de Nariño, conectando el Departamento con el interior del país. Existen tres aeropuertos públicos localizados en Puerto Asís, Villagarzón y Puerto Leguizamo; y uno privado en Orito bajo la administración de Ecopetrol. “se puede mencionar que en los últimos 10 años,

³⁸ Informe de Cobertura Económica Regional. Banco de la República. 2000

el crecimiento del PIB Putumayo es del 2.42 % (3.6 % en Colombia), y la participación del PIB Departamento Nacional ha sido del 007 % (año 2000)”³⁹

2.3 EL DESPLAZAMIENTO EN PUTUMAYO

Los problemas relacionados con el origen e incremento del desplazamiento forzado en el país, se enmarcan en aspectos, que resultan primordiales para los propósitos de esta investigación en cuanto que la dinámica del conflicto armado y las fumigaciones, en el marco del plan Colombia han venido afectado directa o indirectamente a las comunidades de la región del departamento, fundamentalmente en términos de desplazamiento.

“Se sabe que las estrategias globales de la lucha antidrogas y antiterrorista, se encuentran enmarcadas en el paradigma de la seguridad mundial, contención antiterrorista, y los mecanismos de acción de los últimos gobiernos como también del nuevo gobierno dentro del esquema de seguridad democrática que de una manera u otra también parecieran responder no sólo a una coyuntura nacional sino a las necesidades de la agenda internacional que vienen a ser aterrizadas en el ámbito local bajo condiciones que de ninguna manera han resultado favorables para los directos implicados: la población civil”⁴⁰

A eso se le agrega también, “la concentración del poder estatal en algunas regiones y la continua e incesante confrontación armada, provocada por la presencia de grupos irregulares que progresivamente se expandieron en el territorio nacional”⁴¹.

³⁹ Indicadores Socio-Económicos. Gobernación del Putumayo. 2002

⁴⁰ BARAJAS, Ana Maria. Putumayo: Refugio y Desplazamiento Forzado en el Marco del Plan Colombia y el Conflicto Armado Interno. Equipo Área Fronteras Codhes. En: www.codhes.org.

⁴¹ Ibid

El desplazamiento forzado en el país ha sido reconocido recientemente en nuestro sistema jurídico colombiano, aun cuando desde la época de la violencia ya se hablaba del mismo. Por ese entonces ese fenómeno de problemática social, no era percibido como un problema y se identificaba como un fenómeno de reconversión económica.”⁴² De acuerdo con cifras de Acnur (en ponencia en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2006), “Colombia vive una de las más graves situaciones de desplazamiento interno en el mundo. Estadísticas globales recientes del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internacional (Idmc) permiten afirmar que el país presenta la mayor crisis de desplazamiento en el mundo después de Sudán, así como la principal crisis de América, con el 84 al 92% de las personas internamente desplazadas en la región.”⁴³

Es importante anotar que los datos que dan cuenta del problema del desplazamiento en Colombia han ido aumentando, y que las cifras presentadas por los entes gubernamentales son muy distintas a las que suministran las ONGs que se ocupan de registrar, analizar y atender el fenómeno. Sin embargo, a pesar de contraste de estas cifras, estas nos revelan la magnitud del problema.

Con base en una muestra de aproximadamente 2.500 declaraciones recibidas, la Defensoría del Pueblo reunió la siguiente información: cerca del 70% de los casos corresponden a personas provenientes del área rural y el 30% restante del área urbana; el 52% de los integrantes de los grupos familiares declarados son menores de 18 años, el 44% de ellos se encuentra entre 18 y 59 años y el 4% son personas mayores de 60 años. Los derechos alegados como vulnerados o amenazados eran son el derecho a la vida en el 54% de los

⁴² Tres Lustros de Jurisprudencia Constitucional. Marzo 1992 – Febrero 2007 tomo 1 pág. 230

⁴³ Ibid p 231

casos, a la libertad y seguridad personales en el 34% y a la integridad física y psicológica en el 12%.

De acuerdo con algunos estudio realizado en 2003 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2003), el 92% de la población desplazada presenta necesidades básicas insatisfechas y el 80% se encuentra en situación de indigencia. Así mismo, el 63,5% de la población desplazada tiene una vivienda inadecuada y el 49% no cuenta con servicios idóneos. La gran mayoría de la población en situación de desplazamiento recibe menos de un dólar por día, lo que significa que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y bordeando la indigencia (Conferencia Episcopal de Colombia y Codhes, 2005)⁴⁴.

Ante las situaciones que se han venido presentando, la jurisprudencia constitucional ha abordado varios temas respecto al desplazamiento, entre ellos los relativos a: (1) principios constitucionales; (2) obligaciones de las autoridades frente a la atención a las víctimas del desplazamiento forzado; (3) derechos derivados de la condición de víctimas del desplazamiento forzado, y (4) observaciones acerca del desarrollo jurisprudencial.⁴⁵

Esto señala de manera clara la inasistencia e incumplimiento por parte de las administraciones locales, regionales y nacional de proporcionar las condiciones necesarias para una vida digna a los desplazados, de cuyas exigencias por medio de tutelas para reclamar solución a sus necesidades insatisfechas, ante toda esa grave situación y mirando el total avandino por parte de las adeministraciones, surgió la sentencia T 025, donde el Alto Tribunal se refiere a los problemas de coordinación entre las distintas autoridades responsables de las obligaciones de atención a esa población vulnerable. En dicho pronunciamiento, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales

⁴⁴ Ibid p 232

⁴⁵ Ibid p 233

respecto de la situación de los desplazados, y ordenó comunicar dicha declaración a las autoridades públicas de los diferentes niveles, de forma que dentro de la órbita de su competencia adoptaran los correctivos necesarios para superar dicho estado contrario a la Constitución.⁴⁶

La Corte Constitucional ha hecho importantes aportes a la identificación y delimitación del alcance y contenido de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Es importante señalar que tales derechos se deben entender como obligaciones del Estado y que los entes gubernamentales tanto a nivel nacional como local deben garantizarlos y satisfacerlos. En esos pronunciamientos de la Corte principalmente se consagran los siguientes:

- El derecho a ser incluido en el RUPD (Registro Único de Población en situación de Desplazamiento), solo o con su núcleo familiar.
- El derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de tres meses, prorrogables por tres meses más y que tal ayuda comprenda, como mínimo, (a) alimentos esenciales y agua potable; (b) alojamiento y vivienda básicos; (c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.
- El derecho a que se le entregue el documento que lo acredita como inscrito en una entidad promotora de salud (EPS), con el fin de garantizar su acceso efectivo a esos servicios.
- El derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional.
- El derecho a que se identifiquen, con su plena participación, la circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen,

⁴⁶ Ibid p 237

cómo puede trabajar con miras a generar ingresos que le permitan vivir digna y autónomamente.

- El derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo.
- Los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en calidad de víctima de un delito.⁴⁷

Volviendo al tema de las cifras, el gobierno por su parte, en cumplimiento de sus obligaciones a través de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, lleva el conteo mediante el Sistema Único de Registro (SUR), donde debe inscribirse la población desplazada como requisito para recibir la atención estatal; de allí surge la cifra oficial para el periodo comprendido entre septiembre de 1995 y julio de 2003, un total de 1'148.696 de personas, esta es la cantidad de población desplazada que el gobierno reconoce.

Sin embargo, el gobierno da a conocer otros datos de personas que no se registran por diferentes razones; en esto hay una variación en las cifras que el gobierno maneja y que de por sí son bastante altas, su número se estima en aproximadamente en 753,224 personas en situación de desplazamiento por fuera de SUR; este dato corresponde al periodo transcurrido entre enero de 2000 y junio de 2003. Hay que tener muy en cuenta que las cifras que manejan las organizaciones de cooperación internacional son las mismas que maneja el gobierno, ya que se trata de datos oficiales que Acción Social suministra a dichas agencias.

En cuanto a las cifras que no provienen de los registros del gobierno; estas son proporcionadas por las ONG. Y dan otros resultados sobre el número de desplazados. Por su parte CODHES, estima una cifra de 2'412.834 de personas entre los años 2002 al 2009. Según esta organización, el número de desplazados durante el mandato del Álvaro Uribe Vélez aumentó en un 49 %, en

⁴⁷ Ibid p 240

proporción a los 25 años que se llevan desplazando personas de su lugar de origen. Su cifra asciende a 4'915.579 en un periodo de sólo siete años pero con un incremento muy alto en la cantidad de desplazados⁴⁸. Es notorio el contraste con las cifras, inferiores, que el gobierno siempre ha dado. Y esa elevada diferencia no deja de preocupar a muchas ONG encargadas de atender la situación humanitaria que vive Colombia.

Fuente: Página www.codhes.org

En la gráfica vemos cómo se dio un aumento de la población en desplazamiento, notamos que el número de desplazados en el periodo correspondiente al gobierno de Uribe Vélez entre los años de 2002 a 2009 aumentó considerablemente con un porcentaje de 49% para un total de 2'412.834 personas, lo cual contrasta con la cifra de desalojados que se dio durante los años 1985 a 2002, que ascendió a 2'502.745 pero en un periodo de tiempo más largo, 17 años. Estas cifras se encuentran sustentadas en la base de datos que tiene CODHES, en su página en Internet y han

⁴⁸ Boletín Informativo de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Numero 79, Bogotá, enero 27 de 2010 Codhes

sido obtenidas de fuentes independientes de los informes que suministra el gobierno nacional a las agencias de cooperacion internacional.

Estadística de desplazados año 1996-2010 según Acción Social

Fuente: Acción Social sobre la población en situación en desplazamiento

Mirando estas cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional encontramos que entre los años 1996 y 2010 la cifra de desplazados asciende a 3'486.305. Observamos en la gráfica que las cifras son inferiores a los datos que tiene CODHES, hay que aceptar que la ONG cuenta con datos recopilados con más años de anticipación, ya que sus fuentes registran reportes desde 1985. En esta comparación de la gráfica se observa que el

número de desplazados durante el periodo de 2002 a 2010 se mantuvo casi constante; esta cifra se promediaba entre 290.000 a 350.000 mil desplazados por año, coincidiendo con el análisis que hace la ONG CODHES, lo cual confirma que hubo más desplazamiento durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

El departamento de Putumayo no está ausente en las cifras que muestran tanto las ONGs como Acción Social. Allí en los últimos años ha habido un gran número de desplazados proporcional al del resto del país. Con respecto a las cifras encontramos un acumulado de 140.251 personas desplazadas entre los años 1997 y 2010, una cifra muy alta con relación al total de población que tiene el departamento en la actualidad. En los siguientes cuadros podemos ver la diferencia en el número de desplazados del departamento de Putumayo desde el año 2000 al 2007, teniendo como fuentes las cifras de Acción Social y la fundación para los derechos humanos CODHES, esta información se la analiza año por año. En las cifras que están en los cuadros se puede ver que en Putumayo el mayor índice de población desplazada es en el periodo que va desde 2000 a 2007, coincidiendo con los datos de otros departamentos que tienen el mismo problema de desplazamiento.

Desplazados según CODHES

DESPLAZADOS SEGÚN CODHES (PTYO)	
AÑO	DESPLAZADOS
2000	7356
2001	5096
2002	7809
2003	8386
2004	8503
2005	7487
2006	6043
2007	9341
TOTAL	60021

Desplazados según Acción Social

DESPLAZADOS SEGÚN ACCION SOCIAL (PTYO)	
AÑO	DESPLAZADOS
2000	4920
2001	7545
2002	12005
2003	10015
2004	5980
2005	8685
2006	7370
2007	9450
TOTAL	65970

2.4 GUERRILLA, NARCOTRAFICO Y DESPLAZAMIENTO EN PUTUMAYO

La economía ilícita de la coca unida a la débil presencia del Estado, se constituyeron en factores de gran oportunidad y de primer orden para la intervención y expansión de los actores armados ilegales, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes construyeron un poder paralelo en las áreas rurales bajo su dominio. También se asentaron en la región las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁴⁹, principalmente en zonas urbanas, repercutiendo en el incremento del conflicto armado. Estos actores entraron en disputa por el control territorial y su participación en el negocio del narcotráfico, como fuente de financiación, desencadenando una oleada de muertes y desplazamiento forzado que se convierte en una constante contra la población de Putumayo. Las masacres de El Tigre y La Dorada, ocurridas en el año 2000 realizadas por las AUC generaron los primeros desplazamientos forzados que oficialmente se registraron en este periodo y que en la historia reciente son un punto de partida para el análisis de la evolución del conflicto, como hechos concretos reconocidos de la agresión de que ha sido objeto la población civil.

En Putumayo se calcula que existen siete frentes de las FARC y grupos de AUC en las cabeceras municipales y centros poblados de seis municipios⁵⁰. Como respuesta más visible por parte del Estado existe un Departamento de Policía que incluye 16 estaciones en los 13 municipios del departamento; una Brigada del Ejército Nacional con 5 Batallones y una Brigada Móvil, y la Armada Nacional a través de la fuerza naval del sur con acciones en los ríos Caquetá y Putumayo.

⁴⁹ Diagnóstico de la situación de desplazamiento en el Departamento de Putumayo. Mesa de trabajo Asistencia Humanitaria. Mocoa. 2003

⁵⁰ *Ibíd.*

La relación que existe con el departamento de Caquetá, zona de fuerte intervención militar en el marco del Plan Patriota, “Se trata una renovada iniciativa contrainsurgente por medio de la cual se desplegará un contingente militar integrado por 14.000 ó 15.000 hombres en el sur del país, allí donde el grupo guerrillero FARC mantiene intacta su retaguardia, El Plan ha sido diseñado tras largas reuniones entre los responsables del Comando Sur de los Estados Unidos, que participará con al menos mil efectivos, y el Ejecutivo colombiano”⁵¹. Cuyos propósitos fue trae consecuencias humanitarias representadas en un flujo constante de desplazamientos y refugio en el país vecino del Ecuador.

Existen también otros factores que explican el valor estratégico de la región para los grupos al margen de la ley tales como la zona fronteriza con Ecuador y Perú y la comunicación hacia Brasil; además abundantes vías fluviales, que unidos a la débil presencia estatal facilitan la existencia de corredores estratégicos para este tipo de actores. A esto se suma la extracción de petróleo y el oleoducto en el Bajo Putumayo, zona de especial protección por el Estado y blanco constante de hostigamientos por parte de las FARC.

Cabe resaltar que como causa del conflicto armado que se vive en nuestro país, la gente afectada siempre ha buscado refugio en otros países, principalmente los vecinos: Ecuador, Panamá, Perú, y Venezuela. Datos suministrados por ACNUR estiman que a marzo de 2005 se le ha reconocido refugio a 9.682 personas y están pendientes 6.714 solicitudes, de las cuales el 13% corresponden a Putumayo, ubicando a este Departamento como el segundo mayor expulsor hacia la República de Ecuador.

⁵¹ America Latina en Movimiento Que es el “Plan Patriota” En: www.alainet.org

El histórico enfrentamiento entre los diversos actores armados y su continua confrontación, muestran flagrantes violaciones de los derechos fundamentales contra la población civil, ocasionando que ésta se vea obligada a asumir determinaciones hacia uno u otro bando según la ubicación territorial, desencadenando así una crisis humanitaria, la cual se ha venido dando en la gran mayoría de nuestro territorio nacional, y principalmente en el departamento del Putumayo.

Ante toda esa crisis humanitaria que el país ha venido viviendo por causa de la violencia, el Estado ha buscado en varias oportunidades, la manera de proteger la integridad y salvaguardar a las personas que lo están padeciendo; sobre todo a la población en situación de desplazamiento, a quienes se hace necesario brindar ayuda y asistencia, y tomar medidas para evitar que su número siga en aumento. Ante toda esta problemática, los gobiernos recientes han tomado algunas de iniciativas con el fin de proteger jurídicamente esta población y brindarles las garantías jurídicas para que su problema como desplazado y víctima de la violencia sea menos traumático.

Ante las duras situaciones vividas y las múltiples problemáticas que hasta el momento padecen los desplazados, los gobiernos han implementado una serie de normas con el fin de ofrecer más protección a los desplazados. En este sentido en 1997, se creó La Ley 387 de 1997, la cual dio a las personas en situación de desplazamiento las garantías para que hagan valer sus derechos, tanto a nivel particular como colectivo. A pesar de esa garantía jurídica que ampara y protege a los desplazados, el gobierno, tanto nacional como regional y local, no ha dado ni generado alternativas reales de solución a las necesidades que tiene esta población, agudizando más, con la desatención y la indiferencia, el problema que ellos padecen en materia de salud, educación, vivienda, alimentación protección a su integridad

tanto física como psicológica y todo lo necesario para que una persona en esas condiciones viva dignamente.

2.5 EL DESPLAZAMIENTO EN EL PUTUMAYO EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Sobre la dinámica del desplazamiento en el Putumayo entre 1997 y 2004, de acuerdo con las cifras del Sistema Único de Registro –SUR- de la Red de Solidaridad Social, se encuentran los siguientes datos importantes para este estudio:

“Se han expulsado 16.979 hogares constituidos por un total de 72.673 personas. Lo cual equivale al 4.6% del total nacional, ocupando el 6° puesto después de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar y Chocó”⁵². De estas personas, el 88% fue por desplazamiento individual y el 12% por masivo en 17 eventos ocurridos entre los años 2000 a 2003. De las personas expulsadas individualmente, el 40% se quedó en los diferentes municipios de Putumayo y el 60% restante se desplazó a otros departamentos.

Así mismo, se han recibido 7.861 hogares con un total de 36.645 personas, cifra equivalente al 2.3% del total nacional, ocupando el 15° puesto después de Antioquia, Bolívar, Sucre, Valle, Magdalena y Bogotá, entre otros ⁵³. De estas personas, el 82% fue por desplazamiento individual y el 18% por masivo. De las recibidas individualmente, el 85% salió de los diferentes municipios del mismo departamento de Putumayo, y el 15% restante vinieron de departamentos como Cauca, Caquetá y Nariño principalmente. Es importante resaltar que Putumayo ha expulsado dos veces el tamaño de la población desplazada que ha recibido, significando que ha expulsado el 20 % y que ha recibido el 10

⁵² Página Web. Sistema Único de Registro –SUR-. RSS Nacional. 2004

⁵³ Ibid

% de la población total del Departamento, calculada por el DANE en 369.357 habitantes en 2004.

Según reportes de los datos de Accion Social, acumulados hasta marzo de 2011 se encuentran registrados 36.232 hogares con un total de 147.967 personas por desplazamiento individual.

Acumulado 1997 a 31 de 07 de 2010 Putumayo

MUNICIPIO RECEPTOR	RECEPTORES		EXPULSORES	
	HOGARES	PERSONAS	HOGARES	PERSONAS
COLON	230	841	79	287
LEGUIZAMO	1038	5129	2067	9080
MOCOA	5322	21925	1404	5692
ORITO	1265	5530	4006	16296
PTO ASIS	4659	20937	7414	30476
PTO CAICEDO	590	2236	2503	10018
PTO GUZMAN	461	2000	4419	18541
SAN FRANCISC	135	577	60	249
SAM MIGUEL	442	1862	3475	13778
SANTIAGO	199	852	216	948
SIBUNDOY	770	3206	134	490
V / GUAMUEZ	1543	6608	6408	25678
VILLAGARZON	1139	4955	2069	8718
TOTAL	17793	76658	34254	140251

Fuente: Base de Datos Acción Social Putumayo.

Los primeros desplazamientos individuales registrados datan de los años 1997, 1998 y 1999 con 23 familias. Para el año 2000, el desplazamiento forzado se acentuó en razón del mayor accionar de los grupos armados ilegales debido al paro armado decretado por

las FARC en todo el Departamento durante los últimos cuatro meses de ese año, ocasionando que 350 hogares se desplazaran individualmente y 735 lo hicieran por desplazamientos masivos.

Para el 2001, se registraron individualmente 1.071 hogares y 389 por desplazamiento masivo. En el 2002 se incrementó en un 210% el desplazamiento de forma individual con respecto al año anterior, llegando a 2.254 hogares registrados; en ese mismo año se evidencia una disminución en desplazamientos masivos del 72% registrándose 106 hogares.

El 2003 con 1.576 hogares registrados presentó una disminución del 30% de desplazamientos individuales con respecto al año anterior; en cuanto a desplazamientos masivos se presentaron 510 hogares incrementándose en un 481% respecto del año anterior. En el año 2004 se registraron 1.135 hogares con una disminución del 28 % con respecto al año anterior; y a marzo de 2005 son 309 hogares por desplazamiento individual. Es importante resaltar que desde 2003 no se han registrado eventos masivos.

“Es muy importante resaltar, la relevancia que tubo la política de Seguridad democrática en el departamento, debido al gran aumento de pie de fuerza, tanto en el ejército como en la fuerza pública convatiendo a los grupos al margen de la ley y las políticas contra los cultivos de uso ilícitos, contrario a eso, en 8 años de gobierno de Uribe Velez, se dispararon las cifras de desplazados, en todo el territorio colombiano, debordando todas las proporciones en números, con relcion a los años anteriores, el porcentaje es del 49% en los dos periodos de gobierno”⁵⁴

⁵⁴ Ibid P 1

Hay que mirar un punto muy importante sobre la situación que se vive y se ha vivido en el territorio y es el de ver que los actos de violencia contra la población civil, en el marco del conflicto armado, se mantienen en la actualidad, causando limitaciones a la libre movilidad de las personas, amenazas generalizadas, asesinatos selectivos, secuestros, reclutamiento y desapariciones forzadas; masacres, hostigamientos, combates; cobro de extorsiones, hechos que surgen como elementos específicos causales de la agudización del desplazamiento en la región.

Las características particulares de desplazamiento en Putumayo se materializan en municipios expulsores y receptores de población. Cabe resaltar que de acuerdo a los datos del SUR, el 95% de la población civil afectada proviene de la zona rural y el 5% de los centros urbanos. De acuerdo a esto se identifica que los municipios más expulsores de personas en su orden son Valle del Guamuez (20%), Puerto Asís (19%), San Miguel (13%) y Orito (12%); los otros municipios de Putumayo, el 36%.

Es importante mirar la proporción de la población desplazada expulsada frente al total municipal, tomando como referencia la proyección del DANE al año 2004, así: San Miguel (36%), Valle del Guamuez (34%), Puerto Caicedo (29%) y Puerto Guzmán (20%), para los otros municipios la proporción es menor, requiriendo igualmente tratamientos diferenciados.

La proporción de la población desplazada frente al total municipal, tomando como referencia la proyección del DANE al año 2004, es así: Mocoa (34%), Puerto Asís (14%), Sibundoy (9%), Villagarzón (8%) y Colón (6%); para los otros municipios la proporción es menor, requiriendo igualmente tratamientos diferenciados.

Con base en los datos de expulsión y recepción, se deduce que el Municipio de Mocoa es poco expulsor con un total de 3.582 personas y muy receptor con 12.251 personas; Valle del Guamuez es muy expulsor con 13.081 personas y poco receptor con 1.071 personas; Puerto Asís mantiene una proporción más equilibrada entre expulsión con 12.431 personas y recepción con 9.239.

A marzo del 2005, en Putumayo un total de 8.915 hogares rindieron declaración ante el ministerio público, de los cuales 6.780, es decir el 75 %, fueron registrados en el SUR por la RSS y 2.197, el 25% no fueron incluidos.⁵⁵

En la actualidad no se dispone de datos concretos de hogares que no declaran su situación para ser sujetos de atención; tan sólo se tienen estimaciones del total de población en situación de desplazamiento que no se encuentra registrada en el SUR; lo que se ha denominado subregistro. Las causas de este son variadas, entre ellas: desconocimiento sobre el funcionamiento y procedimientos del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada –SNAIPD-, temor a ser estigmatizado, amenazas, incredulidad respecto a la prestación de los servicios, entre otros.

En cuanto a la tendencia al desplazamiento en la región, se identifican los principales factores y los municipios de zonas expulsoras caracterizados generalmente por las siguientes circunstancias:

⁵⁵ Sistema Único de Registro –SUR-. Red de Solidaridad Social Unidad Territorial Putumayo. Mayo de 2005

Presencia de grupos al margen de la ley. En este sentido, los municipios con mayor riesgo de expulsión son, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Leguízamo, Puerto Asís, Orito y San Miguel.

Zonas en disputa entre los actores armados. Estas zonas están relacionadas con su valor estratégico, sea por los recursos, como las zonas petrolíferas o por su situación geográfica y cercanía de caminos utilizados por los grupos al margen de la ley. En este sentido, han sido y son de alto riesgo de expulsión las comunidades rurales de los Municipios de Puerto Asís, Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito.

Zonas con alto índice de violencia. En esta categoría encontramos al Municipio de San Miguel, en particular de su cabecera, La Dorada. También están las zonas expulsoras y receptoras que son los Municipios de Leguizamo y Puerto Guzmán, zonas cercanas al Departamento de Caquetá como centro de operaciones militares del Plan Patriota.

En las zonas descritas como expulsoras, parte del desplazamiento se dirige a sus mismas cabeceras municipales, como sucede en el Municipio de Orito, lo que los convierte también en receptores. Mocoa y Puerto Asís se siguen manteniendo como municipios receptores de población desplazada.

Frente a las causas y consecuencias del desplazamiento, las acciones ejecutadas por parte del Estado han sido muy insuficientes y hasta hoy perduran las necesidades no atendidas a la población que día a día sigue huyendo de la violencia. Por eso, y ante esa situación crítica que vive el departamento, el conflicto armado, el desplazamiento forzado se siguen agudizando y sosteniendo mutuamente; como consecuencia la población civil afectada continúa asentándose en los centros urbanos como lo muestran algunas cifras.

Otras comunidades se ven abocadas a quedarse en sus territorios, viviendo una situación de emplazamiento como efecto del conflicto armado. En consecuencia, el problema humanitario que se vive debería convertirse en prioridad en las agendas políticas del orden local y regional. Emplazamiento

Como podemos ver, el fenómeno del desplazamiento forzado no es nuevo, pero sólo hasta hace algunos años se ha empezado a visibilizar, ocasionando alteraciones en muchos aspectos. A nivel regional, se ha generado una serie de problemas complejos que deben ser considerados en todos sus aspectos para brindar soluciones integrales.

Para todas las circunstancias que se han presentado con la población en situación de desplazamiento, el Estado ha establecido instrumentos que permiten crear un marco de protección para que estos grupos poblacionales no sean sujetos de discriminación, por el contrario, se tomen medidas que garanticen el goce efectivo de sus derechos, ya que la población desplazada se encuentra constituida por sectores poblacionales expuestos a una múltiple vulnerabilidad. “Validando las obligaciones del Estado, el principio rector N° 4 determina que no sólo los principios deben aplicarse sin distinción de raza, sexo, sino además ciertos desplazados, como los menores, especialmente los niños no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la asistencia requeridas por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”⁵⁶.

⁵⁶ Defensoría del Pueblo. Informe de seguimiento a la sentencia T 025 y Autos 218 y 266, En: www.defensoria.org.co

Entendiendo que el desplazamiento tiene impactos diferentes en las personas de acuerdo con su género, edad, se ha identificado que del total de personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia en el Putumayo y con base en los datos del SUR (32.318 personas a marzo de 2005), el 48% son hombres y el 52% son mujeres, de ellas el 52% son menores de 18 años, el 44% se encuentran entre los 18 y 60 años, el 3% son mayores de 60 años, y el 1% no sabe o no responde.

Esto exige del Estado y de otros organismos, adelantar todos los esfuerzos para resolver las necesidades más sentidas de las mujeres desplazadas en salud sexual y reproductiva, atención psicosocial; también prepararlas para que participen en la planificación, entrega y seguimiento de la ayuda humanitaria de emergencia y en las decisiones para su estabilización socioeconómica; estas mujeres son los pilares de cada hogar porque además de atender los hijos deben buscar oportunidades y trabajar para obtener el sustento diario necesario debido a que su pareja, cuando la tiene, no encuentra alternativas económicas rápidas acordes con su vocación u oficio anterior, fundamentalmente campesino, haciendo más pesado y complejo el papel de la mujer ahora que antes del desplazamiento.

Los niños y las niñas menores de cinco años (13.4%), por su alta vulnerabilidad, exigen del Estado acciones especiales y diferenciales, como atención en salud y alimentos básicos, que les permitan un crecimiento y desarrollo adecuados; los que están en edad escolar, entre 5 y 17 años (40.4%), requieren atención básica en salud, alimentos y educación, con el propósito de disminuir los impactos negativos y las secuelas dejadas por el desplazamiento forzado y su preparación para la inserción en las nuevas comunidades;

los adultos mayores de 60 años requieren atención básica en salud y alimentos, porque buena parte de ellos tienen poca movilidad y cuidan a los menores; los adultos entre 18 y 60 años necesitan atención en salud, educación para la vinculación laboral, ayudas para la generación de ingresos de forma individual, y para obtener una vivienda digna.

2.6 EL MUNICIPIO DE MOCOA

El municipio de Mocoa se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 1.030 kilómetros cuadrados y ocupa el 4 % del total del territorio del departamento. Al norte limita con los departamentos de Cauca y Nariño, por el oriente con el departamento del Cauca y con el municipio de Puerto Guzmán, por el sur con el municipio de Puerto Caicedo y por el occidente con los municipios de Villa Garzón y San Francisco. Su clima es cálido húmedo y la temperatura promedio es de 23°C.

La ciudad se ubica sobre el piedemonte de la cordillera oriental a unos 600 metros sobre el nivel del mar y su fisiografía comprende diferentes tipos de formaciones, desde laderas altas hasta planicies ligeramente onduladas. El territorio municipal se caracteriza por tener suelos de diferentes litologías sedimentarias, ígneas y metamórficas con diferentes edades de formación que presentan variaciones en la porosidad y permeabilidad al igual que en su textura y estructura. Son suelos ácidos, pesados, con niveles freáticos muy altos lo hace que sean de vocación forestal.

La riqueza hídrica es una característica de los municipios del piedemonte amazónico y Mocoa es uno de ellos. Allí nacen y corren gran cantidad de ríos y quebradas, caracterizándolo como un municipio productor de agua. La mayor parte del territorio de

Mocoa hace parte de la cuenca del río Caquetá y tiene alguna influencia sobre la cuenca del río Putumayo. Entre las micro-cuencas del río Mocoa se destacan dentro del casco urbano la quebrada Taruca, el río Sangoyaco y el río Mulato⁵⁷.

La estructura político administrativa la integran tres inspecciones de policía, que son: Mocoa, Puerto Limón y el Pepino. Además, se reconoce la jurisdicción indígena de Yunguillo.

“El municipio tiene una población total para el año 2.003 de 45.292 habitantes de los cuales 14.153 corresponden a la población rural y 25.639 son de población urbana, incluidos los 10.332 desplazados. Tiene como capital la ciudad de Mocoa y como centros poblados la Tebaida, El Pepino y Puerto Limón. Mocoa tiene 42 barrios en 620 has, y en todo el municipio 52 veredas”⁵⁸.

La economía se sustenta principalmente en el sector primario con las actividades agropecuarias, piscícolas, forestales, la minería de subsistencia las microempresas y en el sector de servicios a través de las entidades oficiales, educativas, oficios y el comercio en general.

“En el municipio de Mocoa el 90,7 % tienen conexión a energía eléctrica, el 69,3% de las viviendas poseen alcantarillados, 85,2 % tienen acueducto y 32,6 % están con línea telefónica.”⁵⁹

⁵⁷ Monografía del municipio de Mocoa, Contraloría General de la República 1995. Citado en el POT de Mocoa, 2000, p65-69

⁵⁸ Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007

⁵⁹ Censo General 2005 Mocoa Putumayo En: www.dane.gov.co

POBLACION DE MOCOA

Fuente: 4 jornada abierta- Tierra y desplazamiento en Colombia.Crisis Humanitaria por el control del territorio según. Proyección Dane 2005 municipios del departamento del Putumayo

Grupos Étnicos en Mocoa

La población indígena corresponde a 1.448 familias de comunidades de los pueblos Inga, Kamentsá Biyá, Yanaconas, Pastos, Awa y Naza con una población de 7.240 habitantes localizados principalmente en Yunguillo, Mocoa, Condagua y Puerto Limón. Son afectados por la reducción de sus territorios ancestrales, la aculturación progresiva, la pobreza por la carencia de recursos necesarios para su supervivencia y la precariedad del apoyo institucional.

POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO			
Cabildo	Etnia	Población	%
Yunguillo	Inga	574	15.37
Osocochoa	Inga	125	3.3
Condagua	Inga	270	7.2
Inga Mocoa	Inga	944	25.3
Puerto Limón	Inga	407	11
Inga Kamentza	Inga Kamenza	815	21.8
La Florida	Paez	120	3.2

San Joaquín	Inga	69	1.8
Kamentza Bija	Kamentza	410	11
Total	3	3734	100

Fuente: Oficina Departamental de Asuntos Indígenas. Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa, 2000, pág. 25.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MOCOA

En el Municipio de Mocoa existen 1.328,9 hectáreas dedicadas a la explotación agropecuaria que corresponde al 1% del área total (1.263 kilómetros cuadrados), actualmente existen 55 veredas legalmente constituidas de las cuales 7 se encuentran inactivas, el 60% de las veredas cuentan con sistema de captación de agua no potable.

“Existen 48.604,87 hectáreas para la conservación y protección forestal y de sistemas estratégicos, 3.723 hectáreas corresponden al territorio indígena legalmente constituido, 28 hectáreas para el desarrollo del proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS, 223.58 hectáreas para la actividad petrolera que incluyen la explotación y la conducción en el territorio, 5.993.5 hectáreas de tierra no titulables en el marco de la ley 160/94, el 90.72% de las tierras requieren de un componente forestal dentro del sistema productivo para garantizar su sostenibilidad, el Municipio tiene una densidad poblacional rural de 11.65 habitantes por km² en general, existe un déficit de vivienda rural, una alta contaminación de ríos y quebradas por aguas servidas y vertimiento de productos de la actividad familiar y agropecuaria”⁶⁰.

⁶⁰ Plan de Desarrollo Municipio de Mocoa 2004-2007

“En el municipio de Mocoa, su actividad economía, en su gran mayoría depende del comercio, teniendo un 46,7 %, en el desarrollo del municipio, en los ingresos que se generan por la prestación de servicios son de 39,6 % en la industria existe un porcentaje del 8,6 % siendo la actividad mas baja que se desarrolla en el municipio”⁶¹.

El municipio, ya que por ser la capital administrativa del Putumayo se ha concentrado gran cantidad de establecimientos comerciales como son de productos alimenticios; vestuario, cacharrerías, miscelaneas, floristerías y artesanías; artículos para el deporte en general, calzado; Concesionarios de Motos, en gran parte constituye un generador de trabajo y de ingresos para la población.

Debido a ser Capital del Departamento, gran parte de personas se dedican a laborar en las diferentes entidades Públicas existentes como son la Gobernación, Corpoamazonia, Alcaldía, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, INCORA, Secretaría de Educación, Bancos, Cooperativas, Fondos de Empleados, entre otras.

“En la capital del Putumayo, existen diversas y pequeñas asociaciones que están transformando los productos primarios, lo cual es una alternativa de generación de Empleo a través de la integración y conformación de grupos, mejorando la calidad de vida aplicando desarrollo sostenible. Los que actualmente están funcionando son aproximadamente 60 asociaciones o grupos de trabajo, como empresas Cooperativas Asociativas de Trabajo o Empresas Asociativas de Trabajo sin ánimo de Lucro, las cuales

⁶¹ Censo General 2005, Perfil Mocoa Putumayo En: www.dane.gov.co

están bien organizadas y desarrollan convenios o contratos de trabajo con las entidades del Sector Público y privado de la región”⁶².

“El sector educativo del municipio de Mocoa cuenta con 8 instituciones educativas en la parte urbana y 7 ubicada en la parte rural, en total de alumnos matriculados al 2011 es de 12,469 estudiantes, conformados de esta manera, 9875 urbanos con un 79 % y 2594 en la parte rural con un 21 %, de toda esta población escolar, 3639 están en situación de desplazamiento, pertenecientes a grupos indígenas están 1,703, la población afro la conforman 266, la demás población escolar la conforman los alumnos que no pertenecen ni a los afros ni a los desplazados, cuyo número es de 6,864 alumnos”⁶³.

2.8.2 MOCOA: MUNICIPIO RECEPTOR DE DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA.

“Desde el año de 1995, El Departamento del Putumayo se ha convertido uno de los departamentos de nuestro país, más azotados y afectados por el tema del conflicto armado, ante esas circunstancias y en consecuencia, se han registrado a partir de 1997 un total de 21.008 personas según Acción Social y ha expulsado cerca de 128.900 personas.

Mocoa su capital, es el municipio receptor del Departamento, con una densidad poblacional de 37.000 habitantes según censo 1995, en el periodo de 1997-2009 se han recibido 21.008 personas en condición de desplazamiento y ha expulsado 5.330 personas.”⁶⁴

⁶² San Miguel Agreda de Mocoa en: www.mocoa.8k.com

⁶³ INFORME. Secretaría de Educación Municipal Municipio de Mocoa.

⁶⁴ Informe correspondiente Auto 314 de 2009 de seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004 del Municipio de Mocoa

2.8.3 LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA

“Por lo general, es posible afirmar que el desplazamiento está relacionado con la violencia política y que ésta es la principal causa del desplazamiento. No obstante, el desplazamiento forzoso en Colombia es un fenómeno complejo, de múltiples dinámicas que están relacionadas con los conflictos sociales, políticos y económicos del país. Por esta razón, es importante profundizar en las modalidades del desplazamiento y en las causas de este prestando especial atención a las distintas modalidades y causalidades de este fenómeno, diferenciando así entre las causas subyacentes y los detonantes específicos”⁶⁵.

“En su gran mayoría, la población desplazada asentada en Mocoa es campesina y en su lugar de origen se dedicaba a las labores agropecuarias y al trabajo de la tierra. También se destaca la presencia de maestros de escuelas rurales, funcionarios y concejales de gobiernos municipales, líderes y promotores comunitarios y algunas personas que trabajaban en el comercio en los cascos urbanos de los municipios expulsores. Hay un porcentaje importante de población indígena que ha salido fundamentalmente de las zonas rurales más retiradas y de los resguardos existentes en los municipios, sin embargo, a pesar de haberse desplazado, aún continúan perteneciendo al cabildo indígena de origen”⁶⁶.

AUMENTO DEL NÚMERO DE DESPLAZADOS 2005 A 2009

AÑO	NUMERO DE DESPLAZADOS	MUNICIPIO
2005	1668	MOCOA
2006	1770	MOCOA

⁶⁵ Ibañez, A Maria. La población Desplazada en Colombia: Examen de condiciones Socioeconómicas y análisis de la política actual. P 33

⁶⁶ Sanchez E, Lina. (2004) Impacto Urbano del Desplazamiento en Mocoa Putumayo. P 49

2007	2121	MOCOA
2008	1986	MOCOA
2009	1110	MOCOA

Fuente: Acción Social. Número de personas incluidas en el RUPD municipio de Mocoa en los años 2005 a 2009

Números de desplazados que año por año desde el 2005 se han registrado y se encuentran ubicados en el municipio de Mocoa, aquí se puede verificar la población como aumenta año por año, a excepción del 2009, con estas cifras se puede ver que Mocoa es un municipio receptor por excelencia de desplazados.

Resulta importante para los propósitos de esta investigación describir y comprender en qué situación está los asentamientos que mayor cantidad de desplazados albergan. También identificar y reconocer en qué condiciones viven los habitantes de estos lugares. Para ello se tomaron en cuenta y se analizaron variables como las condiciones de infraestructura de los asentamientos, las fuentes de ingresos, los servicios públicos, el servicio educativo y de salud. Todo esto en los tres asentamientos seleccionados: 15 de mayo, Nueva Esperanza y Los Guaduales, por eso se hace necesario ver en qué condiciones viven, que servicios tiene, como es su calidad de vida de los habitantes de estos asentamientos, que alternativas de solución les ha dado la administración local y departamental a los desplazados de estos lugares, como viven los niños y jóvenes en los asentamiento y como es su vivencia de los mismos en estas instituciones educativas, por que se hace necesario el estudio de estos barrios.

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO

El Asentamiento 15 de Mayo está ubicado a 5 ½ kilómetros del casco urbano del Municipio de Mocoa y está conformando por 96 familias. Este asentamiento se inició con 14 familias, la gran mayoría provenientes del bajo Putumayo. La totalidad de sus habitantes están en esas condiciones por motivos de la violencia. Para esta investigación se sostuvo una entrevista con el presidente de la asociación de desplazados, quien dice que la población del caserío siempre ha sido discriminada, que siempre los tildan de raspachines, delincuentes, guerrilleros y ladrones.

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO

Un indicador evidente de su situación es el problema de la vivienda. En total son 96 familias, aproximadamente 500 personas que viven en condiciones pésimas. Sus casas han sido fabricadas básicamente con madera burda, la mayoría de los techos se han improvisado con material plástico. Allí las condiciones de habitabilidad no son las mejores; los materiales de mala calidad, el espacio reducido, la humedad, la falta de higiene y el

hacinamiento son causa de muchas enfermedades que afectan principalmente a los niños en su desarrollo físico y su desempeño académico en lo que concierne a los niños; no existe en este asentamiento un servicio de acueducto regular; hay uno improvisado que llega a las viviendas durante tres horas al día y en los veranos no funciona. El servicio de energía es muy deficiente, ya que no hay redes de energía técnicamente constituidas por la empresa.

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO

En cuanto al servicio de salud, los habitantes y el presidente del asentamiento manifiestan, que el municipio no les colabora en nada. Las brigadas de salud que se realizan no son muy frecuentes, y por eso que hay muchos niños con enfermedades en la piel y con serios problemas gastrointestinales y desnutrición. El señor presidente manifiesta que hace mucha falta un puesto de salud con atención permanente y que, mientras esto se logra, las entidades de salud y el hospital deberían hacer brigadas de atención y campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y otros sufrimientos.

En la entrevista con el representante y otras personas del asentamiento, ellos expresan que quieren que el gobierno o la alcaldía les colabore en tres cosas que son prioritarias para ellos: suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales y servicio de energía eléctrica.

1. Hay muchas deficiencias en el suministro de agua, debido al verano que en ocasiones se prolonga mucho, el agua es muy poca y hay días en que no llega al caserío. El acueducto improvisado se ha hecho con esfuerzo de la comunidad y la administración no se ha interesado en mejorarlo.

2. Se requiere la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales. En la gran mayoría de las casas existe un pozo séptico. En varias ocasiones han solicitado la construcción de un sistema de alcantarillado que sería la mejor solución al problema de las aguas negras, pues el desagüe y la falta de un adecuado manejo estas aguas ha venido ocasionando una gran cantidad de enfermedades que afectan principalmente a los menores de edad.

3. El suministro de un fluido de energía eléctrica eficiente. Ya que en la actualidad los habitantes del asentamiento acceden a la electricidad de forma ilegal, con el consiguiente riesgo de incendios por cortos circuitos y otros accidentes relacionados con instalaciones deficientes y en mal estado. Esta situación irregular también ha ocasionado daños a los pocos electrodomésticos con que contaban.

En la situación que viven los habitantes de este asentamiento se hace evidente la carencia de muchos derechos que por obligación el Estado tiene que garantizarles. En la observación directa como en el análisis de los testimonios y documentos gráficos

recolectados para esta investigación se corrobora que la falta de muchos servicios, termina por afectar gravemente a los desplazados, en especial a los que se encuentran en edad escolar.

ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS NUEVA ESPERANZA

El asentamiento Nueva Esperanza está situado a 5 kilómetros del Municipio de Mocoa en el sector rural, se fundó hace 8 años y es uno de los asentamientos más grandes del municipio. Allí se encuentran ubicadas 152 familias, conformadas aproximadamente por 760 personas. Es un caserío irregular que carece de todos los servicios públicos.

ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA

Allí se entrevistó al señor, fiscal de la Asociación de Desplazados Nueva Esperanza. El señor hizo un recuento de las carencias del asentamiento y señaló la falta de aportes o ayudas por parte de la Administración Municipal para suplir las muchas necesidades que tiene la comunidad. Como carecen de acueducto, las personas tienen que recoger el agua de una quebrada que se encuentra bastante alejada del caserío y además está contaminada con

aguas provenientes del matadero municipal; por ello, el agua que se ven obligados a beber y utilizar no es apta para el consumo humano, pero no tienen otra alternativa para suplir esta necesidad vital. Los materiales con que han construido sus casas no son los más adecuados, retazos de madera, techos de plástico y paredes de cartón. El líder desplazado comenta que hay mucho abandono por parte de la administración, que el alcalde les ha prometido muchas cosas, pero que no les ha cumplido. La gente del asentamiento clama por un sistema de alcantarillado pero debe conformarse con el uso de pozos sépticos. Durante los veranos fuertes aparecen muchos zancudos que seguramente están relacionados con la propagación de enfermedades como el dengue; de esta última se han detectado varios casos. Pero ni la alcaldía ni el hospital hacen campañas, brigadas de salud o fumigaciones para controlar o detener el avance de estos problemas. El fluido eléctrico en este asentamiento también es deficiente, y han sido inútiles las voces de exigencia de una normalización de este servicio. Tampoco les han proporcionado opciones laborales ni otras fuentes de sostenimiento o generación de ingresos para sus familias.

ASENTAMIENTO LOS GUADUALES

En el asentamiento Los Guaduales habitan 74 familias conformadas aproximadamente por 370 personas. La mayoría de las casas ha sido construida de manera improvisada, con materiales de reciclaje. En cuanto a servicios públicos la problemática es realmente grave; el suministro de energía eléctrica es muy deficiente; como no hay acueducto el agua no le llega a los hogares y a la gente del asentamiento le tocado tomar el líquido vital de una quebrada que se encuentra bastante alejada del caserío. Casi todas las casas tienen pozos sépticos, en su mayoría superficiales y con fallas técnicas en su diseño y construcción, esto ha originado la proliferación de enfermedades asociadas al mal manejo de aguas negras y

residuales. Al respecto hacen falta más brigadas de salud, pues se han hecho muy pocas. También hace falta brindar instrucción a la gente sobre el manejo de estas problemáticas, pero este tipo de capacitación se hace muy esporádicamente, por lo tanto los pobladores no saben cómo prevenir enfermedades ni combatir la cantidad de zancudos que hay en el lugar. De otro lado, existe mucha delincuencia, la policía no hace presencia constante en el lugar, hay muchos robos en las casas que dejan solas.

Para conocer la situación del asentamiento se logró entrevistar al señor vicepresidente de la Asociación de Desplazados Los Guaduales y vive en el asentamiento hace 10 años. Él recuerda que en ese tiempo empezaron 56 familias, y que desde ese entonces la colaboración de las administraciones locales y territoriales ha sido muy poca, el señor informa que la alcaldía no ha querido invertir en acueducto ni alcantarillado porque el asentamiento va a ser reubicado, el lote donde van a construir el nuevo barrio ya existe y por eso no se justifica hacer inversiones serias en la ubicación actual.

ASENTAMIENTO LOS GUADUALES

La gente del asentamiento dice que por consultas y averiguaciones, tienen conocimiento de lo que a ellos les corresponde con respecto a las ayudas, saben que hay plata y materiales, pero los encargados de las entidades no se los suministran.

ASENTAMIENTO LOS GUADUALES

El señor representante del asentamiento comenta que han presentado varias propuestas a la alcaldía y a la gobernación para iniciar proyectos productivos y generar ingresos para las familias, pero la respuesta siempre ha sido negativa, añade que quien les ha colaborado un poco es Acción Social, del resto se encuentran en un total abandono

2.8.4 DERECHOS VULNERADOS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Ante gtrave situación que a diario padecen los desplazados, agudizando cada vez más, la crisis humnitaria, cuya ayuda que se debe preveer de forma inmediata aun no se ha proporcionado a la gran mayoría de desplazados, que debido a las multiples situaciones de violencia y crisis plotica que se vive en Colombia no ha sido posible, generarles alternativas de solución.

Se debe tener muy en cuenta que las personas que están en situación de desplazamiento, legalmente gozan de múltiples derechos que tanto a nivel nacional como internacional se les han otorgado; pero en todo este tiempo que llevan padeciéndose este grave problema en nuestro país, han sido muchos los derechos que resultan constantemente vulnerados sin que se cumplan las garantías mínimas de sus derechos fundamentales ni mucho menos las prerrogativas que deberían tener como víctimas de este grave problema.

En lo que le corresponde dentro de toda esta problemática, el Estado, desde que se creó el marco jurídico para darle mayor protección a los desplazados, no ha dado cumplimiento a éste, a pesar de su carácter de obligatoriedad, ni ha podido brindar y garantizar el goce efectivo de dichos derechos pactados en los respectivos decretos, programas y proyectos, aprobados a la luz de la Constitución Nacional. Por el contrario, el desplazado ha sido sujeto de muchas discriminaciones y atropellos en cuanto su integridad tanto a nivel individual como colectivo.

“La Justicia, dignidad y solidaridad integran el nuevo formato de valores inserto en el diseño institucional de la Carta de 1991. La autoridad de la ley pasa, no solo por el cumplimiento de los requisitos formales en su aprobación y sanción, sino sobre todo por su capacidad intrínseca para realizar los derechos que la Constitución consagra. En este atributo teleológico radica la sustancia de la transformación, en suma, la asignación de fines socialmente deseables y su idoneidad para realizarlos son los presupuestos que deben presidir la tarea del legislador”⁶⁷.

⁶⁷ Tres Lustros de Jurisprudencia Constitucional. Primer Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo Marzo 1992- febrero 2007. P 17

La acción del Estado debe dirigirse a garantizarles a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de este que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerles a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales (cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU 747/98)⁶⁸.

Uno de los derechos fundamentales que ha sido violado, y que se sigue vulnerando es el derecho a tener una vida digna, la cual constituye el pilar fundamental para toda persona, independientemente de su origen, color, sexo, religión o ideología política. Hay que ver que las condiciones de vida digna a que tienen derecho los desplazados deben empezar por la asistencia humanitaria básica y la protección que las autoridades tanto a nivel nacional regional o local están obligadas a suministrarle a cada ciudadano, desplazado o no, para que su vida y dignidad sean respetadas.

Mocoa, la capital de Putumayo es cabecera del municipio donde se recibe la mayor cantidad de personas desplazadas en el departamento. Se trata de un sector de la población cuyos derechos se han venido violando, a pesar de que por leyes nacionales como por disposiciones internacionales tienen que ser atendidos prioritariamente por los gobiernos regionales y locales, todo esto en el marco de la Constitución Nacional, más exactamente en el Capítulo primero del Título II⁶⁹.

⁶⁸ Ibid., p.17

⁶⁹ Constitución Política de Colombia.

Entre ese gran número de derechos quebrantados principalmente se encuentran: el derecho a una vida digna, el derecho a una personalidad jurídica y a la libre asociación, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a la salud, que implica, entre otras cosas, recibir una atención médica adecuada y oportuna; también el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho a una vivienda digna y adecuada; y por último, el derecho a la educación.

Se debe tener muy en cuenta que la población desplazada se encuentra asentada en la periferia del municipio de Mocoa, donde las administraciones, tanto regionales como locales, han generado alternativas de solución de manera deficiente con relación a las auténticas necesidades que presentan los desplazados. Los asentamientos que improvisadamente se han instalado en el perímetro del municipio, carecen en su totalidad de los servicios que la administración municipal tiene la obligación de proporcionarle a la población que se encuentra bajo su responsabilidad y prioritariamente a los desplazados. Otra carencia importantísima es la de sistemas de seguridad para estos asentamientos donde la gran mayoría de los habitantes aseguran que fueron desplazados por acciones violentas, amenazados de muerte y que les tocó salir de sus hogares con lo que tuvieran a mano, tratando de salvaguardar principalmente su integridad física y la de sus familiares; ante esa situación de falta de mecanismos de seguridad las personas que están en estos sitios se sienten intranquilas y temerosas de volver a vivir malas experiencias como las que tuvieron en los lugares donde residían anteriormente, pues al igual que allí, en estos lugares carecen de la vigilancia de la fuerza pública, y la policía presta un mal servicio. Adicionalmente, los desplazados, en su gran mayoría, son personas que han salido del campo, personas que carecen de un documento de identidad y todo lo que se requiere para ser reconocido; en el caso de Mocoa las administraciones de turno, no han tenido planes de contingencia para

proporcionar a estas personas su identificación como ciudadanos y con esto tener acceso a los beneficios que el estado podría proporcionarle al menos de manera asistencialista. Por otra parte el acceso a la justicia en muchas ocasiones les ha sido negado; se han detectado muchas falencias en cuanto a la prestación de este servicio, tanto a las personas del común como a aquellas que están situación de desplazamiento; tienen los mismos derechos; al respecto se sabe que en múltiples ocasiones se les ha impedido el acceso a la verificación de expedientes de familiares detenidos arbitrariamente, o se les han negado las tutelas sin ningún argumento válido, con el consiguiente perjuicio individual y social.

Con respecto al tema de la salud el concepto de Parra y Bohórquez es categórico: “La salud sigue siendo un Derecho Humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”⁷⁰. De ahí se concluye que la salud no es sólo atender a las personas que están padeciendo o padecieron una enfermedad; sino que el derecho a la salud entraña, además, otras garantías y derechos que dan a la persona la facultad de controlar el bienestar de su mente y su cuerpo, con inclusión de libertad sexual, y el derecho a no padecer necesidades. En cuanto a esto, la situación que vive la población desplazada en el municipio de Mocoa es el de una flagrante violación de este importante derecho, por la desventaja de que hay sólo un hospital de segundo nivel, cuyo servicio, como lo expresan las personas en situación en desplazamiento, es muy deficiente. Para la prestación de estos servicios ellos están amparados por una asistencia especial que se les brinda presentando el carnet de régimen subsidiado, pero son muchas las falencias que

⁷⁰ Parra Aldana y Bohorquez V, Op.Cit., p. 44-45

como usuarios enfrentan: la asignación de citas es muy restringida y el suministro de medicamentos, incompleto. Adicionalmente, frente a las malas condiciones en que vive esta población, las brigadas de salud realizadas por la administración, tanto regional como local, son muy escasas, y no hay tampoco campañas de prevención en lo correspondiente a salud pública. El sistema de recolección de basuras es deficiente. Existen casas que no tiene unidad sanitaria y por eso sus necesidades las hacen en una letrina, situación que favorece la propagación de enfermedades, que, como es sabido, perjudican principalmente a las personas de menor edad y a los ancianos.

DERECHO A LA EDUCACION

Sin desconocer la importancia de la mayoría de factores implicados en la compleja crisis humanitaria que se ha descrito hasta aquí, este estudio quiere centrarse en lo que corresponde a la vulneración del derecho a la educación en el municipio de Mocoa para la gente que está en situación de desplazamiento. En primera instancia, parece necesario profundizar en la definición de ese derecho tal como lo han hecho Bohórquez y Parra en su estudio citado anteriormente: “La educación como derecho humano debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de dignidad, y fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona. Toda persona debe gozar de este derecho a la educación en los términos que ha sido enunciado en los más múltiples instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en

la eliminación de toda forma de discriminación racial, de la discriminación contra la mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño”⁷¹.

En principio es necesario señalar también, con relación a la violación de este derecho a las personas en situación de desplazamiento, que las administraciones municipales han presenciado este problema, pero no han generado las acciones que se requieren para solucionarlo, aun con el conocimiento de que Mocoa es el municipio con mayor recepción de esta población.

CONCLUSIONES

Se ha visto que el problema de desplazamiento en Colombia, y en especial en el Municipio de Mocoa, como receptor principal de población de desplazado, cuya situación ha venido agudizando cada vez más, a raíz de intensificación y perpetuación del conflicto armado, la ola de violencia y la política del gobierno sobre la erradicación de los cultivos de uso ilícito y la aspersión indiscriminada de glifosato; con el resultante perjuicio para la población civil. A esto le agregamos el abandono del gobierno nacional y la falta de compromiso de los gobiernos regionales, en las cuales no han generado alternativas concretas que logren detener la crisis humanitaria derivada de esta grave situación. Este abandono o negligencia significa que el Estado tiene una seria responsabilidad en la violación de varios derechos que son esenciales para que sus ciudadanos puedan tener la vida digna que como seres humanos merecen.

⁷¹ Parra Aldana Y Bohorquez V, Op.Cit., p. 48

3. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN A PERSONAS ENTRE 5 Y 17 AÑOS, EN SITUACION EN DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA

En este capítulo se presenta el ordenamiento jurídico que exige a todos los Estados que hacen parte de las Naciones Unidas, prestar un servicio y proteger un derecho que por mandato universal están obligados a proporcionar a sus ciudadanos. Dicho ordenamiento jurídico sirve como referente necesario para el estudio de la grave situación que se vive en Colombia, con el problema del conflicto interno armado y el incremento del desplazamiento forzado de grandes sectores de población para quienes la crisis humanitaria, a complicado su normal forma de vida por la grave situación de personas que lo padecen y el abandono del Estado es cada vez mayor, y ante lo cual el mismo ha venido evadiendo una responsabilidad que tanto por precepto universal como constitucional le corresponde asumir; sobre todo, en lo referente a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad, vivienda digna y ayuda psicosocial.

Podemos observar que los gobiernos que han estado dirigiendo este país, han creado una serie de normas que amparan y ofrecen mucha protección a los desplazados, como es el caso de la Ley 387 de 1997 o la sentencia T 025 y muchos autos de seguimiento de esta ley como el 116 del 2008 sobre los indicadores del goce efectivo de los derechos de la población desplazada, también está el auto 251 de 2008 sobre la protección fundamental de los niñas y niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado y también está el auto 008 de 2009 sobre la persistencia de cosas inconstitucionales, pero que contrastan con la realidad que viven en la actualidad de muchos municipios receptores de desplazados donde

se evidencian “condiciones de extrema pobreza, con múltiples necesidades básicas insatisfechas”⁷²

Poniendo en conocimiento, toda esta grave situación que enfrentan los desplazados, el Estado colombiano ha reiterado su desatención haciendo caso omiso a los principios rectores, expuestos en la Comisión de Derechos Humanos en el 54 periodo de sesiones de tema 9 del programa provisional realizada el 11 de febrero de 1998, en cuyo documento, da estrictas instrucciones a los Estados miembros para atender a los desplazados

En Putumayo, en particular el municipio de Mocoa, que, como lo hemos expuesto antes, es el municipio de mayor recepción de desplazados de los trece que conforman el departamento, la investigación y análisis de las acciones de la administración local, ponen en evidencia una serie de violaciones del derecho a la educación y todo lo que de él se deriva para los desplazados en edad escolar.

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MOCOA

Para este proceso investigativo se seleccionaron 5 instituciones educativas caracterizadas por tener la mayor cantidad de población desplazada en edad escolar. Ellas son: Institución Educativa Pío XII, Institución Educativa Fidel de Montclar, Institución Educativa Fray Plácido, Institución Educativa Ciudad Mocoa y Escuela Rural Mixta Alto Afán, esta última ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio de Mocoa. Para lo pertinente a este estudio se han analizado los presupuestos de los tres años que se tomaron como periodo a investigar, y se verifica qué cantidad de recursos se destinó a educación para la población desplazada en edad escolar y en qué se han beneficiado; también se toman las instituciones

⁷² Artículo tomado de la Corporación Universitaria Rafael Reyes, sobre Realidad de las Necesidades Básicas Insatisfechas

y se verifica, en cada una, cómo ha sido el desarrollo con los estudiantes desplazados así como la ayuda y colaboración de la administración municipal y las instituciones comprometidas con los desplazados; así mismo, se comprueba la articulación de la comunidad adulta con los estudiantes en ese proceso, se verifica, además, en qué situación están los desplazados y cómo han sido mitigadas sus necesidades; por último se hace el análisis de la política pública en educación y la falta de ejecución en el municipio de Mocoa.

3.1 LA EDUCACION EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobre el tema de la educación en el marco de los derechos humanos podemos iniciar poniendo de presente este concepto emitido por la ONU: “En el marco de la declaración de los Derechos humanos, adaptada y proclamada en la asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución 217 de A (III), de 10 de diciembre de 1948, y considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, en donde se considera que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; donde se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, en esto se han comprometido en que los Estados miembros asegurarán, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”⁷³.

⁷³ Declaración de los Derechos Humanos, Diciembre 10 de 1948

A partir de lo anterior queda definida la obligación que tienen los Estados miembros de la ONU de garantizar todos los derechos humanos a sus ciudadanos. Entre ellos, y de acuerdo a los propósitos de esta investigación, el derecho a la educación. Derecho que la misma ONU explica claramente cuando consigna en uno de sus documentos fundamentales: “artículo 26 donde se compromete a todo Estado miembro a proporcionarle una educación gratuita en lo concerniente a la instrucción elemental. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales el cual favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”⁷⁴.

“Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación. El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.”⁷⁵

Lo pactado entre la Organización de las Naciones Unidas y los Estados firmantes se protocoliza en una serie de convenciones, donde afianzan y solidifican los compromisos de los Estados para con sus habitantes. Entre estas convenciones encontramos la que se refiere a la lucha contra las discriminaciones, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la

⁷⁴ Declaración de los Derechos Humanos. Art, 26

⁷⁵ El Derecho Humano a la Educacion. En: www.pdhre.org

conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, la cual entró en vigencia el 22 de mayo de 1962, en muchos de sus apartes destaca el derecho a la educación y propone instituir la cooperación entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal de los Derechos Humanos y una igualdad de posibilidades de la educación.

Ante esa obligatoriedad de los Estados, “la UNESCO se ha comprometido a hacer que sea una realidad el derecho fundamental de toda persona a recibir educación, sin discriminación o exclusión alguna. La educación es esencial para el desarrollo humano, social y económico y también es fundamental para lograr una paz duradera y un desarrollo sostenible”⁷⁶. Adicional a este referente en cuanto a los compromisos suscritos por los miembros de la ONU, en América se han firmado y protocolizado muchos otros acuerdos, pero en realidad los Estados no han cumplido con sus obligaciones, generándose una situación de violación de los derechos allí consagrados y pactados.

Es fundamental entra a ver, como se ha dado la protección de los derechos y como se han protocolizado los mismos, mediante pactos y convenios en muchos países, el cual es de responsabilidad de los Estados miembros, respetarlos, cumplirlos y hacerlos cumplir; ante eso y siguiendo con los derechos que se proclamaron el 10 de diciembre de 1948, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En América se ratifican, los mismos derechos, aumentando su responsabilidad a los países miembro. “La convención América sobre Derechos Humanos, pacto San José de Costa Rica, realizada del 7 al 22 de noviembre de 1969, reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del

⁷⁶ La Unesco y la Educación “Toda persona tiene derecho a la educación “ (artículo 26 de declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) p.1

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.”⁷⁷

Haciendo parte fundamental de esa convención, y cuyo propósito es de cristalizar los Derechos Economicos Sociales y Culturales, expuesto en el capitulo III articulo 26, en este aparte los “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”⁷⁸.

Lo expuesto en ese año se lo vuelve a fortalecer el 17 de noviembre de 1988 donde se dio el protocolo de San Salvador, un protocolo adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se ratificaron en la convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como “Pacto San José de Costa Rica”, allí se reafirma para América un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

⁷⁷ Convencion Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San Jose de Costa Rica). Suscrita en la Conferencia Especializada Intermaericana sobre Derechos Humanos San Jose de Costa Rica Noviembre 1969.

⁷⁸ Ibid., p.8.

Es importante resaltar la conectividad que tiene los derechos económicos, sociales y culturales, con los derechos civiles y políticos, ya que estos se consideran y se constituyen indisolubles, cuya razón principal es el reconocimiento y la protección de dignidad de la persona humana, exigiendo una protección permanente, sin que pueda justificarse la violación de unos derechos en aras de realizar otros.

Con el reconocimiento de los derechos en los diferentes instrumentos jurídicos tanto del orden nacional como internacional, resulta de gran importancia, que estos sean ratificados en América, en función del respeto integral de las personas, el régimen democrático de cada país y el derecho de sus pueblos al desarrollo, teniendo de presente todo lo expuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

En el documento se insiste en la obligación que tienen los estados de respetar los acuerdos suscritos y se describe con mucha precisión en qué consiste el derecho a la educación; con el propósito de establecer su verdadera dimensión podemos explicar lo expuesto en artículo 13 y sus 5 numerales: el primero de ellos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El numeral 2 establece que todos los Estados participantes en el Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, así mismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del

mantenimiento de la paz. En el numeral 3 se especifica de una forma muy clara que los Estados que hacen parte de este protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de la educación se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente b) la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, d) se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria, e) se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. En el numeral 4 se consagran prácticas que han de llevarse a cabo conforme a la legislación interna de cada uno de los estados: los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecúe a los principios enunciados precedentemente. Y en el numeral 5 se advierte que nada de lo dispuesto en el Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados⁷⁹.

⁷⁹ Protocolo de San Salvador, Op.cit.,

Es preciso ver la preeminencia que se debe tener en el tema de educación, basado en lo que puntualizan los documentos internacionales; y Colombia ha suscrito estos tratados cimentados, en el desarrollo de ellos.

En materia de DESC, la protección se deriva especialmente de los artículos 44, 67 y 68. En primer lugar, el artículo 44 dispone que la educación es un derecho fundamental de los niños y las niñas. Sobre el particular la Corte Constitucional ha manifestado que “la consagración expresa, en el artículo 44 de la Constitución, de la educación como un derecho fundamental de los niños, no deja duda alguna sobre su naturaleza ni sobre la posibilidad de exigir su respeto y protección mediante el ejercicio de la acción de tutela”⁸⁰

En segundo lugar, los incisos primero y tercero del Art. 67 disponen que la educación es un derecho de todas las personas y que su realización es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha sostenido que “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, pero corresponde de manera exclusiva al Estado, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Igualmente, le compete garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sector educativo”⁸¹

Colombia siendo un país miembro de la organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, institución ante las cuales siempre ha protocolizado y reafirmado su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y

⁸⁰ Corte Constitucional. Sentencia T-402-92

⁸¹ Corte Constitucional. Sentencia T-078-96

la no violación de los mismos, también los ha ratificado en su Constitución Política. Al respecto la Carta magna de nuestro país afirma que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”⁸².

Si bien es cierto que, como señala Lerna, que “En la Constitución Política no está contemplada la educación en un capítulo específico como un derecho fundamental”⁸³, esta aparece en los capítulos de los derechos sociales, económicos y culturales, donde es considerada un derecho fundamental de los niños y niñas: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”⁸⁴.

⁸² Constitución Política. Artículo 93

⁸³ Lerna C, Carlos Alberto, El Derecho a la Educación en Colombia (Noviembre 4 de 2007) p 13

⁸⁴ Constitución Política, Artículo 44

Más adelante, en el artículo 67 se lee: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”⁸⁵.

“Toda esta obligatoriedad, gratuidad y garantías de la Educación Básica Primaria en los establecimientos Educativos Estatales, se la ratifica en la sentencia C-376/10”⁸⁶.

Así se corrobora que la educación es un derecho de la persona reconocido universalmente, y la Constitución Política de Colombia otorga a la educación de los niños la calidad de derecho fundamental.

⁸⁵ Constitución Política, Artículo 67

⁸⁶ Sentencia C-376/10

Aceptando como plenamente establecido que el Estado colombiano tiene la obligación de dar cumplimiento al derecho a la educación, se entiende que para conseguirlo debe realizar la planeación y coordinación de un sistema educativo con la estructura y estrategias necesarias para responder a las necesidades de todos los habitantes del país. Siendo él el primero en asumir una responsabilidad que la Constitución considera compartida entre el Estado, la familia, y la sociedad. Tal sistema educativo debe permitir la consolidación de políticas de cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia. Entendiéndose que la educación, además de constituir un derecho de la persona, es un servicio público que tiene una función social y que desde esa perspectiva exige del Estado la obligación inherente a los derechos fundamentales.

En cuanto a este deber del Estado, Pedro Antonio Pinilla en su tratado sobre la educación como derecho humano ha concluido que “El núcleo esencial mínimo, no negociable, del derecho a la educación está constituido por cuatro elementos con características universales, indivisibles, interdependientes y en correspondencia con cuatro obligaciones para el cumplimiento de las cuales el Estado tiene el compromiso de desarrollar actividades regulares y continuas para satisfacer las necesidades públicas de educación, estas son: derecho a la disponibilidad, derecho de acceso al sistema, derecho a la permanencia y derecho a la calidad. Con estas están unas obligaciones a cumplir por parte del Estado que son las obligaciones de asequibilidad, la obligación de accesibilidad, obligación de adaptabilidad y la obligación de aceptabilidad”⁸⁷.

⁸⁷ Pinilla Pacheco. Pedro Antonio (2006) *Derecho a la educación. La educación en la perspectiva de los Derechos Humanos*. Bogotá. P 48

En consecuencia, el Estado colombiano debe cumplir en forma articulada las siguientes obligaciones de origen constitucional para garantizar el derecho a la educación:

- Regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación.
- Velar por la calidad de la educación, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
- Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio educativo y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
- Participar, con las entidades territoriales, en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales.

“Preocupa a la Procuraduría General de la Nación que los logros alcanzados sean de avance lento e insuficiente en cuanto a las demandas del país; su análisis muestra que las obligaciones del Estado, y en particular de los gobiernos, sobre el derecho a la educación se incumplen en forma protuberante; la primera obligación es la de ofrecer educación completa y de calidad para toda la población en edad escolar, meta que está muy lejos de su cumplimiento. En estas condiciones, la abundante normatividad no deja de ser una quimera con la cual se cumplen compromisos internacionales y se despiertan esperanzas de la población cuya satisfacción es de suma precariedad”⁸⁸.

⁸⁸ Derecho a la Educación. La Educación en la Perspectiva de los Derechos Humanos. Procuraduría General de la Nación. p 23

Complementariamente, el artículo 68 de la Constitución Política establece otras obligaciones de respeto y garantía por parte del Estado, como son: la facultad de los particulares para fundar establecimientos educativos, el derecho de la comunidad educativa de participar en la dirección de las instituciones de educación, el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, el derecho de las personas a no recibir en forma obligada educación religiosa en los establecimientos del Estado, la garantía de que la educación esté a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica y la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Estos mandatos constitucionales corresponden con las cuatro características interrelacionadas y fundamentales que deben tener las escuelas, de acuerdo con lo propuesto por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación⁸⁹. Complementando estos preceptos se anexa una serie de requisitos fundamentales para proporcionar un buen servicio; requisitos que constituyen la garantía de una buena asistencia educativa, estos requisitos fundamentales son:

Obligaciones de Asequibilidad

“Son aquellas que tienden a satisfacer la demanda educativa por dos vías: la oferta pública y la protección de la oferta privada. De un lado, imponen al Estado la obligación de establecer o financiar instituciones educativas o usar una combinación de estos y otros medios para asegurar que la educación sea asequible. Del otro, ordenan al Estado abstenerse de prohibir a los particulares la fundación de instituciones educativas. Según la Relatora Especial, la primera obligación del Estado es asegurar que existan escuelas primarias a disposición de todos los niños y las niñas, lo cual requiere una inversión

⁸⁹ Ibíd. p 53

considerable. Si bien el Estado no es el único inversor, las normas internacionales de derechos humanos lo obligan a ser el inversor de última instancia a fin de asegurarse de que todos los niños y las niñas de edad escolar dispongan de escuelas primarias. Y en el informe provisional agrega: la obligación del Estado de asegurar la disponibilidad de instrucción académica constituye un pilar del derecho individual a la educación, y el hecho de que un Estado no sostenga la instrucción disponible constituye una manifiesta violación del derecho a la educación.

Obligaciones de Accesibilidad

Son obligaciones que tienden a proteger el derecho individual de acceso en condiciones de igualdad (en igualdad de oportunidades sin discriminación alguna). En palabras de la Relatora Especial, la segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que se prohíbe la discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se aplica a los derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación no debe ser objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata y plenamente.

La accesibilidad depende del nivel de educación al que se aspire acceder y del titular del derecho. Mientras que la educación post-obligatoria (enseñanza secundaria y superior) puede implicar el pago de matrícula y otros costos, los tratados internacionales obligan al Estado a asegurar el acceso **gratuito** a la educación primaria para todos los niños y las

niñas en la **edad de educación obligatoria**. A nivel interno, la Corte Constitucional ha entendido que esta protección se extiende a **todo** menor de 18 años hasta noveno grado.

Obligaciones de Adaptabilidad

Son obligaciones que tienden a garantizar la permanencia y continuidad del educando en el proceso educativo. Para ello, el proceso educativo se funda en el respeto a la diferencia, el multiculturalismo, la democracia y los derechos fundamentales. Por esta razón, el Estado tiene la obligación de brindar en sus centros educativos la educación que mejor se **adapte** a los niños y las niñas, y de velar por que ello ocurra en las instituciones de enseñanza privadas. Esta nueva perspectiva ha reemplazado la costumbre anterior, de obligar a los niños y niñas a adaptarse a cualquier establecimiento educativo.

La adaptabilidad hace referencia al contenido del proceso de aprendizaje, asignando importancia primordial a los mejores intereses del menor (como ordena la Convención sobre los Derechos del Niño), y a los conocimientos, técnicas y valores que ha de requerir durante su vida. Para la Relatora Especial, la adaptabilidad implica también una revisión de los programas y libros de texto existentes o crear otros nuevos para eliminar los estereotipos que afectan a las minorías étnicas y raciales, a los inmigrantes, y a las mujeres. Sobre el caso de las niñas, la Relatora sostiene: durante los últimos decenios se han producido cambios profundos en el contenido de la educación: se ha pasado de educar a las niñas para que sean buenas amas de casa a liberarlas de los estereotipos de género y a permitirles que se desarrollen libremente.

Como explica la Relatora Especial, la adaptabilidad ha sido la mejor conceptualizada por los numerosos casos de los tribunales nacionales sobre el derecho a la educación de niños y niñas en situación de discapacidad. En virtud de las obligaciones de adaptabilidad, las entidades educativas, que antes podían rechazar a un niño que no logró adaptarse, deben garantizar la permanencia del menor de edad en la institución adaptándose a sus necesidades. La adaptabilidad también se ha enfocado en menores de edad que por determinadas razones no pueden permanecer en el sistema educativo, como los niños infractores y los menores trabajadores. Como en muy contadas ocasiones estos niños pueden asistir a instituciones educativas, el Estado debe garantizar que les sea ofrecida la educación en el lugar donde ellos se encuentren.

Obligaciones de Aceptabilidad

La faceta más importante de la aceptabilidad de la educación, en opinión de la Relatora Especial, ha sido la “calidad” de la educación. Esto ha impulsado a los Estados a asegurar, no solo disponibilidad y accesibilidad de la educación, sino además su adecuada calidad. De ello se deduce que el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas mínimas para los establecimientos educativos y de mejorar las exigencias profesionales para el ejercicio de la docencia. La Relatora Especial concluye: el Estado está obligado a asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para los niños con todo, el alcance de la aceptabilidad se ha ido ampliando gracias al desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos. En el conjunto de obligaciones de aceptabilidad se han incorporado temas como la etnoeducación, con particular énfasis en la lengua de instrucción para los miembros de pueblos indígenas y minorías étnicas. Esto

debido a que el idioma a menudo hace que la educación sea inaceptable si no es la lengua nativa de los niños y las niñas. La prohibición de castigos corporales y la prestación del servicio público educativo en condiciones dignas también han sido tenidas en cuenta como criterios de aceptabilidad”.⁹⁰

El siguiente cuadro, tomado de un documento de la Relatora Especial y adaptado a las condiciones colombianas, sintetiza los temas clave que se abordan en cada una de estas obligaciones

CUADRO DE LAS OBLIGACIONES EN EDUCACION SOBRE LAS 4 – A		
ASEQUIBILIDAD	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	Apertura o cierre de colegios. Libertad para fundar establecimientos educativos Fondo para establecimiento educativos públicos Fondos para establecimiento. educativos privados
	Cuerpo docente	Criterios para su incorporación Salud para enseñanza Derechos laborales Libertad Sindical Responsabilidad Profesional Libertad de enseñanza
ACCESIBILIDAD	Educacion pública para niños	Cubrimiento total. Gratuidad. Seguridad asistencial. Reconocimiento de una etapa educativa

⁹⁰ El Derecho a la Educación. En la constitución. La Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales, P 48

	Educación para adultos	Prohibición de actos discriminatorios. Acceso preferencial de sujetos especial proteccion. Criterios para admisión Reconocimiento de diplomas extranjeros.
ADAPTABILIDAD	Necesidades especiales de educación	Niños en situación de discapacidad. Niños trabajadores. Niños en situación de desplazamiento forzado. Niños privados de la libertad.
ACEPTABILIDAD	Regulación y supervisión	Normas minimas. Respeto de la diversidad. Idioma de instrucción. Orientacion y contenido. Diciplina en la escuela. Derecho de los estudiantes.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que la educación elemental y fundamental debe ser gratuita, declaración ratificada por el Pacto Internacional de los Derechos económicos y Sociales “PIDESC”, pacto que además establece para los Estados Partes la obligación de generalizar y hacer accesible a todos, la enseñanza secundaria, así como la superior sobre la base de la capacidad de cada uno⁹¹.

Teniendo en cuenta, todo lo que el Estado colombiano se ha comprometido en materia de educación los resultados que se han obtenido hasta el momento no han sido los más esperados. “ Dada la clara existencia de esta obligación, el artículo 14 del PIDESC impone a los Estados que al momento de hacerse parte de este Pacto que aún no hubieran podido instituir en su territorio la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, la obligación de ?elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos?. A pesar de que este

⁹¹ Ibíd. p 53

Pacto fue ratificado por Colombia en 1968 y empezó a regir desde 1976, hasta el momento el Estado Colombiano no ha adoptado dicho plan. Es decir que el estado Colombiano lleva 30 años incumpliendo este deber”⁹².

3.2 DERECHO A LA EDUCACION PARA LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA

Como se lo ha expuesto anteriormente, en Colombia se reconoce la calidad de desplazado a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas por el conflicto armado que se ha vivido y se vive en nuestro país, generando maltratos masivos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Los desplazados constituyen una parte de la sociedad sometida a una crisis humanitaria que los desarraiga de su lugar de residencia, los deja en una situación vital muy difícil, en un estado de indefensión que afecta su dignidad, los obliga a trasladarse a un espacio extraño e insólito sin la posibilidad de tener derecho a elegir sus nuevas condiciones de vida, los somete a situaciones de pobreza extrema y de indigencia para sobrevivir con su familia, les obliga a cambiar sus hábitos culturales y los des -institucionaliza en cuanto a las formas de vida y de organización a que estaban habituados. En cuanto desplazamiento interno forzado, como violación al derecho internacional humanitario, es una situación en la cual se materializa la vulneración simultánea tanto de derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.

⁹² Derecho a la educación en Colombia En: www.dejusticia.org

En su gran mayoría los desplazados terminan en condiciones infrahumanas, hacinados en zonas subnormales de las ciudades intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es tradicional y su arribo influye decididamente en el empeoramiento de las condiciones generales de vida de los sectores sociales allí asentados.

En este contexto, con respecto al derecho a la educación, Pedro Antonio Pinilla nos recuerda que “Naciones Unidas consagra, entre los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, el Principio 23 de acuerdo con el cual, para dar efecto al derecho a la educación, las autoridades deben asegurar que los niños desplazados reciban una educación gratuita y obligatoria a nivel primario, que respete la identidad cultural, su idioma y su religión”⁹³. Como un complemento a lo anterior, se deben tomar en cuenta los principios formulados por la UNESCO para todos los sistemas educativos y la escuela que acoga desplazados debe enfatizar para toda su comunidad uno de sus pilares: aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. De acuerdo con esto, corresponde a la escuela enseñar y practicar la no violencia para combatir los prejuicios que llevan al enfrentamiento. Además están las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación que enfatizan mucho en el acatamiento que le corresponde al Estado sobre la reparación integral de los derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de impedir el deterioro subsiguiente de la situación de los desplazados, con lo cual se deben mejorar en todo sentido sus condiciones, por medio de acciones que se deben realizar en términos más integrales de interdependencia y complementariedad, desde un enfoque de derechos y no desde una óptica asistencialista.

⁹³ Ibíd. p180

El ejercicio integral del derecho a la educación parte del reconocimiento del desplazado como sujeto de los derechos humanos; lo cual conlleva a que en su estadía en los establecimientos escolares en su zona de ubicación o de retorno se le eduque en un ambiente de respeto que debe primar en las relaciones de los docentes, los directivos y los compañeros entre sí y con el desplazado, a que también se le forme para el respeto de los derechos de los demás y se le involucre en prácticas de derechos humanos en el entorno de la escuela. Aquí podemos entender como complementaria la idea del Ministerio de Educación cuando considera que “bajo ninguna circunstancia la escuela puede renunciar a proporcionar los mejores esfuerzos y espacios reales para la formación de seres autónomos, de sujetos de derechos y deberes, capaces de ir moldeando el mundo de la vida para satisfacer sus necesidades vitales”⁹⁴.

Como respuesta eficaz a la compleja situación que han vivido y están viviendo los desplazados, se les debería hacer objeto de discriminación positiva y brindarles un tratamiento privilegiado en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la situación aquí mencionada se debe enfatizar mucho en lo expuesto anteriormente en cuanto que el desplazamiento forzado afecta la salud y el bienestar de las familias, y adquiere mayor gravedad cuando involucra niños, niñas y jóvenes que desde una condición de alta vulnerabilidad viven situaciones de violencia que lesionan su integridad moral y física así como el disfrute de sus derechos. Por otra parte, los lugares de asentamiento donde residen, por lo general son muy pobres y no están preparados para recibirlos y ofrecerles unas condiciones de vida dignas, muchas veces empeorándose con su presencia

⁹⁴ Ibíd. p 180

la situación de las comunidades receptoras por la carencia de servicios básicos entre otras limitaciones que les aquejan. Lo anterior involucra también la provisión de alimentos, problemática que se refleja en las altas cifras de desnutrición, que afectan significativamente el crecimiento, el comportamiento tanto físico como emocional y por ende, el normal desempeño académico en niñas, niños y jóvenes. Como resultado de este grave problema, se encuentran muchos desplazados en edad escolar con deficiencias académicas, y con amplios retrasos en la escolaridad, lo que se denomina situación de extra- edad, así como jóvenes con un grado de alteración emocional bastante alto y una continua fragmentación de los vínculos familiares y sociales, afectando regularmente a toda una comunidad con secuelas como la violencia, la vagancia y la falta de un proyecto de vida personal.

Con respecto al derecho a la educación en el caso de los desplazados, Pinilla afirma: “En cuanto al derecho a la educación se hace imperativo cubrir a esta población con el núcleo esencial mínimo no negociable de este derecho constituido por el derecho de acceso al sistema o reincorporación al mismo en el lugar de desplazamiento y de retorno posterior, el derecho a la permanencia hasta concluir, por lo menos, la educación básica obligatoria, el derecho a la disponibilidad de instituciones escolares, de programas, de docentes y de condiciones físicas y financieras adecuadas, y el derecho a la calidad y pertinencia del servicio educativo”⁹⁵.

Sobre este tema, la Corte Constitucional ha aclarado lo siguiente: “(...) acorde con la sentencia SU-624/99 el Estado debe hacer realidad el mandato de que la educación será

⁹⁵ Ibíd. p 181

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y, como mínimo comprenderá un año de preescolar y nueve de educación básica. Armoniza lo anterior con el citado Pacto⁵¹, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 13, numeral 2, literal a) dice que ‘la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente’⁹⁶.

En lo que compete a la protección de las personas desplazadas por la violencia; y en lo referente a la ley 387 del 97 y el decreto 2562 de 2001 mediante los cuales se estableció la coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territoriales para garantizar la prestación del servicio educativo para que ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en la etapa de atención humanitaria como en el retorno o reubicación; tendrán que tenerse en cuenta los siguientes criterios y requisitos, para brindarles el mejor de los servicios:

1. Los establecimientos educativos deben efectuar la matrícula a los educandos sin exigir los documentos que se requieran a quien no esté en capacidad de presentarlos.
2. La Red de Solidaridad Social y las Secretarías de Educación deben impulsar la creación de cooperativas que presten el servicio educativo a la población desplazada, promover la integración de líderes comunitarios y la organización comunitaria para contribuir a la prestación del servicio educativo.
3. Las instalaciones provisionales donde se desarrollen los programas educativos de emergencia deben garantizar la seguridad y salubridad de los desplazados.

⁹⁶ Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la luz del Derecho a la educación. P 24

4. Las Secretarías de Educación deben desarrollar programas de formación y capacitación para los docentes que atiendan población desplazada.

5. Una vez superada la atención humanitaria de emergencia y determinado el sitio de retorno o reubicación, las Secretarías de Educación deben atender con prioridad a la población en edad escolar garantizando el cupo en los establecimientos educativos de su jurisdicción”⁹⁷.

Como complemento a estas obligaciones el Ministerio de Educación ha sacado una serie de documentos orientados a prestar un mejor servicio a las personas en situación de desplazamiento; así en 2003 publicó un documento de política de atención a la población escolar desplazada, donde se dan lineamientos que se deben acatar de manera obligatoria: ⁹⁸

1. Prestar la asistencia técnica, para fortalecer la capacidad de planeación, ejecución y seguimiento de los entes territoriales, poniendo énfasis especial en la capacidad para identificar y ejecutar soluciones, para racionalizar la utilización de recursos disponibles, para maximizar su efectividad e impacto y para diseñar y aplicar indicadores de seguimiento y evaluación.

2. Ampliación de cobertura, a través de la construcción de soluciones como kioscos y reparación de aulas en establecimientos educativos que cuenten con espacios adecuados; esta acción se ha de complementar con la dotación escolar y la formación de docentes en los lugares de llegada de la población desplazada.

⁹⁷ Decreto 2562 de Noviembre 27 de 2001. Se reglamenta la Ley 387/97 en cuanto a la prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones

⁹⁸ Ibid

3. Hacer una revisión, ajuste y aplicación de modelos pedagógicos y curriculares, como Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, Telesecundaria, Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y Postprimaria Rural. Además, adopción de programas intersectoriales en salud y educación con el fin de prevenir y atender el embarazo precoz en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual como VIH, y de propuestas de formación como Escuela y Desplazamiento, Resolución Pacífica de Conflictos y Habilidades para Vivir.

4. Fortalecer la capacidad de los entes territoriales para la atención educativa a la población escolar desplazada, mediante la capacitación de docentes en el manejo y aplicación de modalidades educativas y pedagogías no convencionales.

5. Identificación, selección, sistematización y divulgación de experiencias exitosas, que se adelantan en el país para el mejoramiento de la calidad de la educación en beneficio de las poblaciones vulnerables desplazadas.

6. Fomento a la conformación de redes pedagógicas para atender a las poblaciones desplazadas incluyendo países vecinos; las redes han de servir para generar escenarios de la disciplina y la interdisciplinariedad pedagógica, y para construir procesos de interacción y confrontación grupal que den respuesta oportuna a las situaciones problemáticas y novedosas que se presentan en la cotidianidad de la escuela.

7. Conformación de alianzas con el sector privado y cooperación internacional.

A todas las obligaciones que tiene el Estado para con la población desplazada en edad escolar expuestas hasta ahora se deben añadir las siguientes:

- Una atención básica y media a todos los desplazados en edad escolar.

- La ayuda psicológica requerida por los niños.
- Adoptar programas intersectoriales en salud y educación
- Mejorar la calidad de educación mediante desarrollo de planes y programas de capacitación de docentes.
- Promover acciones especiales de protección para maestros desplazados.
- Fortalecer la capacidad de planeación, ejecución y seguimiento de las acciones educativas en los entes territoriales y diseñar y aplicar indicadores de seguimiento y evaluación.
- Fortalecer el servicio educativo en zonas de retorno y reubicación de la población desplazada.

Como se ve, se trata de acciones enmarcadas en el derecho a la educación a las que se debe dar cabal cumplimiento por parte del Estado en respuesta a sus obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, y así la persona pueda ver satisfechas sus necesidades en relación con los derechos de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad, que constituyen los elementos del núcleo esencial mínimo no negociable del derecho a la educación.

Frente al panorama tan grave del desplazamiento en el país, con el consiguiente deterioro del derecho a la educación, vemos que las alternativas de solución que se plantearon en un principio no se han ejecutado de una manera concreta y eficaz. La atención a la educación para los desplazados como un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado presenta unos índices negativos debido a la falta de coordinación en las políticas, que ha

venido dejando a la población desplazada con un gran déficit en todas sus necesidades, lo que representa un agravamiento de las desdichas que sufre esta población.

Toda esta situación de inoperancia e ineficiente ejecución de las políticas de atención a los desplazados ha sido sufrida en el municipio de Mocoa, donde el incumplimiento del derecho a la educación a esta población ha sido cada vez mayor.

3.3 DERECHO A LA EDUCACION PARA LOS DESPLAZADOS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA

En razón a que es obligación del Estado colombiano es proporcionar un servicio educativo conveniente y de excelente calidad a través de los gobiernos regionales y locales, como lo especifican los tratados y convenios internacionales, ratificados además en el ordenamiento jurídico nacional, con el estudio que se hace se puede verificar cómo se ha venido dando cumplimiento a esto. Ante eso, se inicia analizando cómo se ha ido respondiendo a esta obligatoriedad desde los entes administrativos, para lo cual se ha obtenido información oficial solicitándola formalmente a las mismas administraciones a nivel departamental y municipal.

Con base en la observación directa y en los materiales recopilados para la presente investigación, se pudieron percibir una gran cantidad de equivocaciones cuya información suministrada por la administración municipal no es veras, tal carencia puede tomarse como un indicativo de la percepción oficial y, por ende, de la atención que se presta y la manera como se atiende a esta población, en la documentación e informe proporcionado por la Secretaría de Educación Municipal en materia de educación relacionada con población desplazada, se comienza a hablar de cobertura, teniendo en cuenta uno de los temas

principales que es la ampliación de cupos y de brindarle todas las garantías para la educación a más niños, esto se muestra en unas cifras que son globales, reflejan un total de 2.253 estudiantes entre población desplazada y población no desplazada. Este número de estudiantes está discriminado en un total de 9.511 estudiantes en la parte urbana y 2.742 en la parte rural, toda esta población se encuentra ocupando 9 instituciones educativas, 6 en el área urbana y 3 en el área rural, para un total de 57 sedes educativas en todo el municipio de Mocoa. Para el número de estudiantes que tiene el municipio, se cuenta con una planta de personal docente de 479 profesores.

También en estos informes se puede ver que los programas adelantados por la Secretaría de Educación Municipal no han significado mejoría en la cobertura, ya que desde 2007 hasta 2010 el incremento ha sido mínimo, con un total de 487 estudiantes, cifra en la cual no se diferencia si son o no desplazados.

“En cuanto a la población desplazada, la Secretaría de Educación Municipal tiene registrado un total de 2.949 estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, de los cuales 1.511 son mujeres y 1.438 son hombres”⁹⁹. Es preciso observar que esta entidad del gobierno local no expresa una atención especial a los estudiantes desplazados, como debería ser, por tratarse de una población vulnerable que legalmente está favorecida por una discriminación positiva, que les otorga un tratamiento especial, unos privilegios de reparación que los diferencian de los demás estudiantes.

También se informa que “La administración hace un énfasis de una calidad educativa, dando unas pautas para unos planes sobre proyectos transversales relacionados con la educación sexual y temas de derechos humanos, esto se ha realizado en las 9 instituciones

⁹⁹ *Ibíd.*, p. 5

educativas que tiene el municipio, anexo a estos proyectos se han realizado unas capacitaciones a 200 docentes¹⁰⁰, con el propósito de explotar las potencialidades de los estudiantes y alcanzar los niveles básicos de competencia; también se han hecho foros educativos para evaluar la pertinencia de la educación, se han realizado y se han dotado de mobiliario a varias sedes educativas, como también de equipos de audiovisuales y su implementación completa de salas de informática; a eso le sigue la dotación de instrumentos de laboratorio e implementos deportivos y de educación física. Es necesario subrayar que en el informe suministrado por la administración municipal siempre se hace referencia a la población estudiantil en general, sin especificar hechos o cifras de los estudiantes desplazados.

También se observa que las relaciones que se vienen manejando al interior de las instituciones educativas en épocas recientes son iguales a las de años atrás. Los docentes afirman que nunca han recibido una preparación especial para atender a estudiantes y padres de familia desplazados, y desconocen por completo algún documento que haga referencia a un trato privilegiado o diferencial que se le deba dar a los estudiantes desplazados y a los no desplazados. Se desconoce así el concepto de la discriminación positiva, por el cual tiene que existir un tratamiento diferente, debido a la grave situación que han sufrido o están padeciendo.

En contraste con lo anterior, encontramos claramente enunciado y explicado el sistema que deben aplicar tanto los entes territoriales como los locales en materia de la educación; se

¹⁰⁰ Ibíd., p. 6

trata del sistema de las cuatro A, una herramienta básica en cuanto a implementación y evaluación.

Como se puede verificar en los datos, informes y testimonios que dan sustento a esta investigación, y teniendo como referente la fórmula sugerida por la relatora especial de Naciones Unidas en materia de educación, en el municipio de Mocoa bajo la responsabilidad de la Secretaria Municipal de Educación y en el departamento del Putumayo a cargo de la Secretaria Departamental de Educación no se toman en cuenta estos cuatro pilares fundamentales, y los funcionarios y personal docente, en su gran mayoría, desconocen lo relacionado con este sistema de evaluación y valoración educativa. Un indicador de este desconocimiento es que la administración del municipio de Mocoa no posee en su ejercicio de gobierno ni guarda en sus archivos ningún documento, memoria o informe relacionando con los pilares fundamentales enunciados en las 4 A, desconociéndose así el núcleo esencial del derecho a la educación en Colombia y más aun en lo referente a personas en situación de desplazamiento.

Ante la falta de documentación, este punto se ha tenido que desarrollar con información obtenida de las actas y presentaciones que la Secretaria de Educación Departamental realizaba cuando se convocaban las mesas temáticas departamentales sobre educación. En estos eventos se citaba a otras instituciones del orden local, regional y nacional (SNAIPD) y las ONG que trabajaban con el tema del desplazamiento.

En acta fechada el 9 de marzo de 2007, así como en las siguientes actas semestrales hasta 2009, el común denominador es el mismo, “Trata el tema del incumplimiento y la falta de atención a las obligaciones que tienen los gobiernos local y regional y todas las

instituciones que hacen parte del (SNAIPD) en materia de educación. Muchas peticiones se le hacían a la Secretaría de Educación Departamental en presencia del equipo del PIU y las demás instituciones que integran el SNAIPD, las exigencias estaban relacionadas con el acceso a la educación, pues la cobertura era insuficiente, se denunciaba que la gratuidad del servicio era dudosa ya que había instituciones educativas que estaban cobrando los derechos académicos y complementarios a la población en situación de desplazamiento, asunto que se ha venido dando por más conocimiento que tengan los rectores de que a los desplazados no se les deben exigir estos pagos.

También se evidencia que se ha hecho una discriminación constante a los estudiantes en situación en desplazamiento, se sabe que estas personas por las condiciones en que se encuentran no generan entrada de recursos a las instituciones educativas; y a eso se le agrega la falta útiles escolares básicos y uniformes diferenciando aun más al estudiante desplazado del resto de la comunidad escolar.

No existe ninguna evidencia de la implementación de acciones destinadas a garantizar la permanencia de esta población en las instituciones; por el contrario, falta cubrir las necesidades de alimento, uniformes, transporte, útiles escolares. En lo concerniente a la infraestructura, construcción y mantenimiento de salones, restaurantes escolares, unidades sanitarias, bibliotecas, dotación de textos, material didáctico y equipos de audiovisuales, la situación sigue siendo precaria; además de estas carencias, la población escolar en situación de desplazamiento comparte instituciones donde es común el hacinamiento y otras deficiencias grandes en la prestación del servicio educativo.

En cuanto a la calidad del servicio educativo en sí, se pueden constatar grandes insuficiencias en la preparación y actualización de los docentes, en especial en aquellos temas y habilidades que se requieren para atender eficazmente a la PSD, por consiguiente hace falta un modelo pedagógico adecuado que facilite la enseñanza y el aprendizaje a esta población que requiere una atención especial y de calidad que propicie y apoye su restablecimiento social, emocional y cultural. Tampoco se conocen mecanismos y estrategias que den protección y salvaguarden la vida a estudiantes y docentes en zonas de riesgo.

En la las actas existen manifestaciones por parte de algunos rectores, sobre el acceso de los estudiantes a sus instituciones y a todos los servicios que ellos requieren y allí se les pueden brindar, pero a continuación expresan dificultades tales como el hecho de que las ayudas para transporte y útiles escolares no llegan a su debido tiempo, de manera que algunos estudiantes terminan retirándose. Ante esas situaciones, algunos funcionarios de la procuraduría apuntan que no basta con proporcionarle al estudiante un cupo, sino que es indispensable garantizarle la permanencia y participación en todos los ámbitos que el estudiante en situación en desplazamiento requiera.

Ante esto los administradores de las instituciones educativas replican que no hay compromiso ni responsabilidad por parte de la administración local ni regional en proporcionar todo lo que requiere la PSD en edad escolar. También manifiestan que los recursos propios de los municipios son muy pocos, lo cual dificulta el apoyo a la PSD en lo que tiene que ver con kits escolares y uniformes. A continuación aclaran que los recursos de regalías sólo son para infraestructura y los de Sistema General de Participaciones no se pueden utilizar para compra de estos elementos.

Con base en la poca información que se puede extractar y analizar en estos documentos, se hace evidente que las dependencias encargadas de velar por la educación a nivel municipal y departamental han venido haciendo una gestión mínima para suplir las necesidades académicas a la población en situación en desplazamiento. Con los datos reunidos es posible hacer un análisis comparativo de la labor realizada a este respecto tanto por la Secretaria de Educación Departamental como por la Municipal en Mocoa.

En el cuadro siguiente se muestra lo que la administración ha venido realizando, tomando como referente las 4 A y los indicadores que se debe tener en cuenta en materia de educación. Se hace evidente que ni la administración regional y ni la local ha previsto ni evaluado lo que ha venido ocurriendo en la educación en estos últimos años, de ahí los resultados.

	Asequibilidad	Accesibilidad	Aceptabilidad	Adecuacion
Identificación de problemas del sistema educativo para la población desplazada	<p>En el municipio de Mocoa, en cuanto la vinculación y la apertura de colegios por parte de organizaciones privadas ha sido muy mínima, la alternativa de vincularse a la educación privada no existe ya que la oferta no la hay. En cuanto a garantías laborales al personal docente no existen, solo tiene derecho a sindicalizarse los docentes que son nombrados, hay mucho docente que enseña a los desplazados por unas condiciones mínimas de sueldo ya que están por contrato y eso los desampara de toda garantía laboral.</p> <p>En cuanto a lo que han estado enseñando, los docentes y las sedes educativas están supeditadas a los lineamientos que estipule la SED. (Secretaria de Educación Departamental)</p>	<p>Por parte del Estado, la población desplazada en edad escolar se le ha proporcionado y garantizado el acceso a la educación, de forma gratuita pero con los agravantes de las exigencias de los rectores que administran las sedes educativas, ya que les piden los uniformes y toda la implementación sobre elementos escolares y ayudas educativas, todas estas exigencias han obstaculizado el desempeño de los estudiantes que se encuentran en situación en desplazamiento.</p>	<p>Con lo referente a los derechos de los estudiantes desplazados, la obligatoriedad de las instituciones ha tenido mucha irresponsabilidad con los estudiantes y toda la comunidad educativa, en la parte de calidad, el docente desconoce la normatividad, el trato y el proceso que debe tener el estudiante desplazado, en las sedes en su gran mayoría desconocen la normatividad en derechos humanos, tampoco aplican su enseñanza ni los objetivos, con relación a los contenidos y métodos pedagógicos no son acordes ni flexibles de acuerdo a la problemática en que viven los estudiantes en situación en desplazamiento.</p>	<p>En cuanto a esta situación, las instituciones no han proveído la gran deserción que se ha venido dando con esta población, siempre se ha mostrado una gran dificultad de adaptación de estudiantes desplazados en extra edad, las Secretarias de educación tanto departamental como municipal no han hecho planes de contingencia para superar este problema con esta población, han existido gran cantidad de deserción de niños en edad escolar por el trabajo que ellos tiene o les toca que hacer por todas la necesidades que tiene las familias</p>

Soluciones Posibles de la politica publica	Se sabe que la ley 387 y todo lo que desprende en cuanto a la protección de los desplazados es muy amplio, y para empezar a darle solución a la problemática seria en la mayor asignación de recursos, de ahí parte una iniciativa clave para suplir muchos problemas de los desplazados	La inversión y la construcción de sedes y colegios, colmaría machismo las necesidades de la PSD en edad escolar la construcción de IE agropecuarios mitigaría mucho la deserción de los estudiantes desplazados	Más preparación a docentes para que atiendan a los desplazados, inversión en bibliotecas y aulas de informática, ayuda sicosocial a los estudiantes que padecen este problema	Más fuentes de ingresos para los desplazados, esto ayudaría que los menores dejara de trabajar y se dedicaran a estudiar con esto mermaría las deserciones,
---	--	---	---	---

En este cuadro se puede apreciar como los indicadores en educación relativos a las 4 A no se ven reflejados ni como proyecto ni como realización. De lo cual se puede concluir que no se ha dado ninguna ejecución a este sistema por desconocerse su implementación. Todo esto se pudo corroborar con la investigación que se llevó a cabo en las dependencias de las secretarías de educación departamental y municipal.

Complementario a esto, es importante tener en cuenta unos estudios que ha estado realizando la Secretaria de Educación Departamental en materia de calidad educativa, basándose en la calidad de docentes con que cuenta. Allí se muestra un balance de la preparación que tienen los docentes en el departamento a nivel de posgrado. Con ese estudio se puede hacer una aproximación al tipo de educación que están recibiendo los estudiantes del Putumayo especificado por área según la especialización de sus docentes. Con este análisis de la preparación de la planta docente de la Secretaría de Educación, se lograron identificar las tendencias pedagógicas, el nivel de relación con la formación inicial, las decisiones de los maestros y maestras en cuanto a su perfeccionamiento profesional.

Este análisis tiene como horizonte de sentido, establecer un diálogo constructivo con las Universidades formadoras de maestros en el departamento y la Escuela Normal Superior de Sibundoy, incidiendo en la oferta de cursos de ascenso y actualización y líneas de posgrado que se ajusten a las necesidades educativas desde el enfoque intercultural, que estimulen el mejoramiento en los resultados de las pruebas internas y externas, y aseguren la calidad, como atributo imprescindible en el acceso al derecho humano a la Educación.

Los docentes del departamento han cursado trece (13) programas de maestría en las distintas áreas y cincuenta y tres (53) especializaciones. En total cuatrocientos ochenta y dos (482) docentes están en el nivel de especialización y sólo veintinueve han obtenido título de Magíster.

En la siguiente gráfica se puede apreciar las áreas que los docentes han priorizado en su formación posgradual

Fuente: Secretaría de Educación Departamental, Oficina de Calidad.

Teniendo en cuenta este estudio, podemos señalar la gran falencia que hay en el departamento en cuanto a la preparación de los docentes en relación con la atención especial a PSD. Observando las especializaciones realizadas por los docentes, se echa de menos una formación a nivel de posgrado en el área psicosocial, en el tema de familia, en recuperación del tejido social, etc. Vale la pena aclarar que la elección de una especialización o una maestría no depende exclusivamente de la voluntad de cada educador, sino que inciden otros factores determinantes como los

programas ofrecidos por las universidades, la disponibilidad de tiempo, la distancia e incluso los recursos económicos.

3.4 ANALISIS DE PRESUPUESTO AÑO POR AÑO 2007, 2008,2009

A partir de la información que suministra la administración Municipal se hace un estudio en lo referente al presupuesto entre los años 2007 y 2009, haciendo el análisis de las cifras año a año. Es importante verificar y entrar analizar este tema del rubro y en que cantidad se destinaba a los programas y proyectos que tenían que ver con la PSD, en la administración municipal, y ver como a suplido la nesecida de la población desplazada o por el contrario su abandono es cada vez mayor

PRESUPUESTO 2007

CONCEPTO	AÑO 2007		
	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO
PRESUPUESTO GENERAL MOCOA	20.249.516.683		
S.G.P			
<u>EDUCACION</u>			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y Desplazada	76.996.397	75.888.818	1.107.579
REGALIAS			
<u>EDUCACION</u>			
Apoyo a Familias Vulnerables y Desplazadas			
Subsidio de transporte para población vulnerable y desplazada			
Compra de Alimentos para población vulnerable y desplazada			
RECURSOS PROPIOS			
<u>EDUCACION</u>			
Fondo de Atención a Grupos Vulnerables y Familias Desplazadas			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y	6.807.085	6.270.122	536.963

Desplazada			
TOTAL PRESUPUESTO EDUCACION P.VULNERABLE Y DESPLAZADA	83.803.482	82.158.940	1.644.542
PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL	0.41%		

Fuente: Secretaría de Hacienda. Municipio de Mocoa. Año 2007

En este cuadro tenemos el presupuesto de 2007, en él se observa qué rubro se destinó y qué cantidad se utilizó para atender a la población en situación de desplazamiento, en especial a la población que se encuentra en edad escolar. Como se puede analizar, el trabajo y el aporte que ha venido haciendo la administración municipal con la población desplazada ha sido mínimo, se sabe que por la exigencia de la norma y lo que ampara a la población desplazada, en especial a la que esta en edad escolar, se la debe hacer en suplir las necesidades, tanto de infra estructura, alimentarias, de vivienda, de apoyo psicosocial etc. Pero lo que se entrevé con estos presupuestos es todo lo contrario.

Para educación y ayuda a población desplazada el dinero destinado de los recursos del Sistema General de Participación, SGP, fue de \$76.996.397, de los cuales se ejecutaron \$75.888.818 quedando un sobrante de \$1.107.579. En cuanto a dineros provenientes de las regalías, no se realizó inversión alguna. Por último se hizo una inversión de \$6.807.085 de los cuales se ejecutaron \$6.270.122 para dejar un sobrante de \$536.963. Así, en total se invirtió un monto de \$82.158.940 de un presupuesto de \$20.249.516.683. Dicha inversión se hizo en la parte de educación, con el proyecto de alimentación a personas vulnerables y desplazadas. Así, la inversión en apoyo directo en educación para los desplazados equivale a un 0.041%.

PRESUPUESTO 2008

CONCEPTO	AÑO
	2008

	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO
PRESUPUESTO GENERAL MOCOA	19.904.863.792		
S.G.P			
EDUCACION			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y Desplazada	51.644.542	51.644.542	0
REGALIAS			
EDUCACION			
Apoyo a Familias Vulnerables y Desplazadas			
Subsidio de transporte para población vulnerable y desplazada			
Compra de Alimentos para población vulnerable y desplazada			
RECURSOS PROPIOS			
EDUCACION			
Fondo de Atención a Grupos Vulnerables y Familias Desplazadas			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y Desplazada	107.365.205	104.704.458	2.660.747
TOTAL PRESUPUESTO EDUCACION P.VULNERABLE Y DESPLAZADA	159.009.747	156.351.008	2.660.747
PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL	0,80%		

Fuente: Secretaría de Hacienda. Municipio de Mocoa. Año 2008

En el presupuesto de 2008 se destinó para la atención a población en situación de desplazamiento la suma de \$ 51.644.542, de dineros provenientes del Sistema General de Participación, SGP, de los cuales la inversión fue completa. Este año no se hizo inversión alguna de dineros de regalías para dicha población y la suma de dineros provenientes de recursos propios invertidos para este mismo programa ascendió a \$ 107.365.205, llegándose a ejecutar un total de \$ 104.704.458 dejando un sobrante de \$ 2.660.747. Así, la inversión total en 2008 destinada a programas de Alimentación a Población Vulnerable y Desplazada fue de \$ 156.351.008 alcanzándose un 0,80% de un presupuesto de \$19.904.863.792. Este porcentaje se destinó al sector de educación a niños desplazados.

PRESUPUESTO 2009

CONCEPTO	AÑO		
	2009		
	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO
PRESUPUESTO GENERAL MOCOA	25.281.237.757		
S.G.P			
EDUCACION			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y Desplazada	16.000.000	16.000.000	0
REGALIAS	25.000.000	25.000.000	0
EDUCACION			
Apoyo a Familias Vulnerables y Desplazadas			
Subsidio de transporte para población vulnerable y desplazada	20.000.000	20.000.000	0
Compra de Alimentos para población vulnerable y desplazada	10.000.000	0	10.000.000
RECURSOS PROPIOS			
EDUCACION			
Fondo de Atención a Grupos Vulnerables y Familias Desplazadas			
Proyecto Alimentación Población Vulnerable y Desplazada	107.365.205	104.704.458	2.660.747
TOTAL PRESUPUESTO EDUCACION P.VULNERABLE Y DESPLAZADA	25.459.602.962	165.706.467	12.660.747
PORCENTAJE FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL	0,28%		

Fuente: Secretaría de Hacienda. Municipio de Mocoa. Año 2009

En el presupuesto del año 2009 inicialmente se destinaron \$ 16.000.000 millones para proyectos relacionados con Alimentación a Población Vulnerable y Desplazada; según el dato de ejecución todo este dinero, proveniente del SGP se invirtió en el proyecto. Con relación a dineros de regalías, se destinó, para subsidio de transporte de la población vulnerable y desplazada un monto de \$ 20.000.000, el cual se ejecutó en su totalidad. También se presupuestaron \$ 10.000.000 para la Compra de Alimentos para población vulnerable y desplazada, pero no se ejecutaron. En este mismo año, se destinaron a inversión a Proyectos de Alimentación a Población Vulnerable y Desplazada la suma de \$ 107.365.205 provenientes de recursos propios, de la cual se ejecutaron

\$ 104.704.458, quedando un remanente de \$2.660.747. En total de todo el presupuesto destinado para el año 2009 sólo se invirtieron \$ 165.706.467, un 0,28%, contrastando con el monto total que ascendió \$ 25.281.237.757.

Haciendo el análisis de los recursos destinados a atender la problemática de los desplazados en materia de educación, se observa que los rubros fueron mínimos, teniendo en cuenta que el presupuesto global del año sobrepasó los 25 mil millones de pesos. Esto puede interpretarse como una prueba de la falta de atención gubernamental a los desplazados en especial en lo relativo a la educación, ya que las cifras muestra cómo el esfuerzo por parte de la administración es insuficiente para brindarles más oportunidades y mejorar su calidad de vida. Son muchas las necesidades que tiene la población desplazada y los programas y proyectos trazados para la ayuda a estas personas en diversas áreas vitales no se han realizado; por eso se deduce que resultará complicado dar cumplimiento a los propósitos de mejoramiento de su situación con tan baja asignación de recursos. La destinación de un rubro tan escaso para los programas de atención a los desplazados por parte del gobierno local, se debe a que la administración tiene otras prioridades, y un volumen amplio de recursos se dirigen a otros proyectos distintos, desviándose muchas veces hacia el aumento de la burocracia sin considerar las proporciones del gasto público y la inversión social y desfalcando los proyectos que no sólo por ley sino por sentido común, deberían priorizarse.

Como se evidencia en los tres presupuestos analizados año por año y la inversión que se realizó en el área educativa. Pero dichas inversiones fueron consideradas con criterios generales, tratando de responder a necesidades educativas del municipio tales como infraestructura, capacitación a docentes, dotación de menajes a las distintas sedes de las instituciones educativas, auxilios de transporte a los estudiantes, mejoramiento y dotación de salas de cómputo y todo lo relacionado

con equipos de informática, así como apoyo y mantenimiento de restaurantes escolares. Pero, por más que se busque, y aunque se quiera dar a entender que ya está incorporado, por ninguna parte aparece en estos presupuestos una destinación de recursos para la atención a la población escolar desplazada como tal, se hizo la investigación en las dependencias de la secretaria de educación, que si se habían formulado o diseñado un proyecto para canalizar algún recurso o obtener una ayuda ante el gobierno nacional, que favorezca a la población desplazada en edad escolar, la respuesta fue negativa. Es claro tener muy en cuenta que las administraciones de esos dos periodos, (2007-2008) no realizaron la inversión respectiva para suplir las necesidades de la población desplazada en edad escolar, ellos se estuvieron supeditados al presupuesto y los dineros que les enviaban del gobierno central, lo que les correspondía por el sistema general de participación SPG. Ante eso, es muy importante ver, que el aumento de los desplazados en el municipio de Mocoa, era proporcionalmente mayor a la destinación del recurso que se le hacían a rubro de los desplazados. Hay que hacer una gran anotación sobre los recursos y las ayudas para los desplazados, tanto de que son muy mínimas, la preocupación de los gobernantes locales, en este caso del municipio de Mocoa por hacer gestión y elaborar proyectos para beneficios de la población en situación en desplazamiento es nula. Es significativo ver que lo destinado a suplir las necesidades de la PSD es mínima. Se sabe por todo lo que hay en materia de desplazamiento y el aumento que ha tenido en los últimos 4 años, el presupuesto para mitigar la problemática de la PSD en edad escolar ha disminuido significativamente, esto se lo pudo corroborar con las continuas visitas e investigaciones y trabajos que se realizaron con las 5 instituciones educativas que se destino para este trabajo, teniendo en cuenta infraestructura, dotaciones escolares, aulas de informática, bibliotecas, restaurantes escolares, auxilio de transporte para los desplazados, personal idóneo y capacitado para la atención a la población desplazada en edad escolar, ayuda profesional en la parte psicosocial, atención profesional y seguimiento a las familias que han

sufrido el problema del desplazamiento, todo estos componentes le son negados a la población en situación en desplazamiento en edad escolar.

Es importante ver, que lo que destina presupuestalmente la administración municipal entre los años 2007-2009 en educación para los desplazados, no se relacionan en nada con el sistema de las 4 A, debido a su desconocimiento del procedimiento que tiene el personal en la dependencia de la secretaria de educación.

3.5 INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DESPLAZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La investigación que se realizó para indagar por lo que la Administración Municipal ha hecho o dejado de hacer en materia de inversión, pero sobre todo en la implementación de políticas públicas, para beneficiar y mitigar la problemática de la población escolar que se encuentra en situación de desplazamiento en el municipio de Mocoa. Es importante mostrar en esta investigación, que la inversión que se hace por cada estudiante en el Departamento del Putumayo, en lo que se llama tipología de asignación por alumno es \$ 1.712.857 cuyo valor es administrado por la secretaria de educación departamental; diferente a la inversión que hace la administración municipal con la obligatoriedad de la norma que ampara y protege a la población desplazada.

Ante eso se centró en una muestra conformada por las cinco instituciones que a nivel municipal se consideran receptoras de mayor cantidad de población desplazada en edad escolar. Dichas instituciones son: I.E. Pío XII, I.E. Fidel de Montclar, I.E. Ciudad Mocoa, I.E. Fray Plácido y Escuela Rural Alto Afán, el propósito de esta investigación, ha sido mostrar la forma de cómo se implementa la obligatoriedad de la ley 387 de 1997 y la sentencia T 025

3.5.1 INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII.

La creación de la “Institución Educativa Pío XII, constituye un capítulo importante de la historia de Mocoa y Putumayo, ligada a su desarrollo, por su aporte a la formación de juventudes, quienes hoy como profesionales y personas de bien se desempeñan en las diferentes áreas del saber y de producción de la región y del país.

IE PIO XII

Mediante Ley No. 42 de Noviembre de 1.960, el Instituto Pio XII, pasó a denominarse Colegio Pio XII. En 1.976 se empezó a brindar educación mixta en todos los grados. El 7 de Abril de 1.987 el Ministerio de Educación Nacional aprueba los estudios del ciclo básico de la Media Vocacional y los cursos décimo y once de bachillerato mixto con las jornadas mañana y tarde¹⁰¹.

¹⁰¹ WWW.IEPIOXII.COM

IE PIO XII

Según Decreto 0605 del 16 de Diciembre de 2002 se cambia el término Colegio por Institución Educativa Pío XII con la integración de las sedes el Progreso, el Jardín y el Centro de Educación Especial bajo una sola rectoría.

Mirando la historia de una de las Instituciones con más trayectoria en el Departamento del Putumayo y de más antigüedad en el municipio de Mocoa, cuya apertura se hizo con 26 estudiantes y que en la actualidad cuenta con un total de 2659 estudiantes, repartidos en sedes educativas como el Centro de Educación Especial que tiene 37 estudiantes y Ciudad Jardín que cuenta con 369 estudiantes y junto a la sede principal completa un número de 2244 estudiantes, entre los cuales la cifra de estudiantes que se encuentran en situación de desplazamiento asciende a 535 ¹⁰². Estos datos se confirman con las cifras que entrega la Secretaría de Educación Departamental, SED, siendo esta Secretaría la que suministra información al SIMAT

¹⁰² Institución Educativa Pio IIX (Dependencia de Registro de Matrícula)

El estudio realizado en las instituciones para cumplir los propósitos de esta investigación permite observar las acciones realizadas por la Administración Municipal para dar cumplimiento a los 10 puntos en lo que respecta a la atención a la población escolar en situación de desplazamiento:

La Administración Municipal en cabeza de su Secretaría de Educación, ha respaldado y apoyado en todo sentido el ingreso de las niñas y niños en edad escolar que están en situación en desplazamiento; esto lo ha coordinado con la institución de manera que se diligencien sus matrículas sin ponerles obstáculos de ninguna clase, ni exigir documentos como registros civiles o certificados de estudio a los niños que no pueden presentarlos, entendiéndose esta excepción como una obligación institucional. En la investigación también se comprobó que existe coordinación entre el rector de la institución, la Administración Municipal y los diferentes órganos gubernamentales como Acción Social, Secretaría de Educación Departamental e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Como una respuesta a todo el problema humanitario soportado por la población en situación de desplazamiento, y en especial la población en edad escolar, resulta indispensable la atención psicosocial y la orientación por parte de un profesional que procure restaurar el daño psicológico sufrido por estas personas. En este sentido una voz autorizada nos ayuda a comprender la importancia de la terapia psicosocial en estos casos: “consiste en el conjunto de medidas de rehabilitación y apoyo individual, familiar o comunitario, orientadas a hacer frente a las consecuencias del trauma de las violaciones de derechos humanos, y a promover el bienestar emocional y social, estimulando el desarrollo de las capacidades de las víctimas. Se habla de atención psicosocial, más que psicológica, para enfatizar en que el daño individual no puede desvincularse de una perspectiva social, por el carácter político de las violaciones, la importancia

del contexto y las respuestas institucionales”¹⁰³. Sin embargo, una atención de este tipo no ha sido ofrecida ni prestada de manera adecuada por parte de la Secretaría de Educación Municipal. En los tres años que tomamos como referencia para esta investigación la SED no ha respondido a su obligación de brindar esa atención integral a la población ,no se ha hecho un trabajo de seguimiento a las problemáticas individuales, tampoco se han propuesto ni fomentado campañas o programas con grupos interdisciplinarios para contrarrestar el daño psicosocial. En cuanto al apoyo que la SED pudo haber dado particularmente a la Institución Pio XII para adelantar programas de ayuda psicológica a los desplazados, la administración de la institución educativa manifiesta que no ha existido ningún proyecto o programa para mitigar este delicado problema. Para brindar algún tipo de apoyo en este sentido, las directivas de la institución se han valido siempre de la orientadora profesional que tienen de planta para prestar esta ayuda profesional a toda la población escolar. En general la comunidad educativa percibe y manifiesta que es muy complicado atender adecuadamente este grave problema. En consecuencia, el trato especial o la discriminación positiva que se le debe dar a la población desplazada en edad escolar les resulta muy difícil de incorporar a las prácticas cotidianas de la comunidad educativa sin una significativa inducción y el apoyo profesional debido. Profesores, estudiantes, padres de familia y el rector, conscientes de la necesidad, han reclamado este servicio para el colegio pero la colaboración de la Secretaría de Educación en ayuda psicosocial es prácticamente nula.

Con respecto al asunto de la salud, la Administración Municipal ha realizado programas relacionados con la prevención de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infecto-contagiosas y campañas de prevención de embarazos a temprana edad. Pero ninguna de esas acciones se ha dirigido específicamente a las personas en situación de desplazamiento. Ante los

¹⁰³ Beristain, Carlos Martin. Diálogos Sobre La Reparación, Experiencias en el Sistema Interamericano de derechos humanos Tomo II / Instituto Interamericano de Derechos Humanos; San José de Costa Rica C. R IIDH. 2008 p 289

problemas de salubridad vividos por los desplazados, en especial la población en edad escolar, la Secretaría siempre ha programado campañas de salud esporádicas, lo cual implica la falta de continuidad de esos eventos. Atendiendo tal vez a un criterio de salud preventiva se realizan en las escuelas y colegios campañas de información y capacitación instruyendo a los niños y adolescentes, haciéndoles ver las consecuencias que trae el contraer estas enfermedades. Para ello los funcionarios de la Secretaría de Salud coordinan con los directivos de la institución los tiempos, espacios y población a trabajar, con ello, aunque no de manera dirigida específicamente, ayudan a concientizar y educar también a los habitantes de asentamientos de desplazados. Pero también se debe señalar que las campañas que se han programado y realizado, no han tenido un seguimiento adecuado, lo que permite afirmar que estos programas no se han realizado como ejecución de una verdadera política pública, articulada entre las instituciones correspondientes como la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cuanto a las campañas hechas en la institución educativa sobre salud en general y prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, se percibe que no han sido constantes y por lo tanto han carecido de la necesaria continuidad que les podría garantizar una incidencia importante en la comunidad escolar. En la investigación realizada se constató que la comunidad educativa siempre ha pedido esta clase de actividades debido a situaciones que han surgido con algunos estudiantes en cuanto a embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretarías de Educación y de Salud, ha venido incumpliendo esta obligación que legalmente le compete.

Por otra parte, se entiende que el mejoramiento de la calidad educativa incluye la formación y permanente actualización de los docentes. Al respecto, la Secretaría de Educación Municipal regularmente ha programado capacitaciones, foros y cursos dirigidos a la gran mayoría de

profesores que trabajan en el municipio de Mocoa. Estas capacitaciones por lo general se han centrado en mejorar el desempeño docente en cuanto a desarrollo de competencias en los estudiantes, en el fortalecimiento institucional y en la actualización de metodologías flexibles que el sistema educativo requiere. , Pero la SED no ha programado ni realizado cursos o jornadas de capacitación sobre la manera en que las instituciones educativas han de asumir su papel en la atención a la problemática de la población escolar desplazada. Así, los docentes que atienden estos estudiantes no están capacitados para darles el tratamiento especial que requieren, y acuden simplemente a su intuición y buena voluntad, cualidades que, aunque valiosas, no son suficientes en una situación tan delicada como la que se ha expuesto aquí. Tal vez por ello los profesores manifiestan que el trato que se le da al estudiante desplazado es el mismo que se le da al alumno promedio de la institución. Ellos, hasta donde fue posible indagar, hacen caso omiso a la situación que vive y ha vivido el estudiante desplazado y su familia. Cuando en el docente hay conciencia de esa situación, expresa que está a la espera de que se programen y se dicten las capacitaciones de cómo atender a estos estudiantes. Y manifiestan también que en muchas ocasiones ha sido difícil para ellos entablar relación con niños y niñas en situación en desplazamiento; reconocen que la problemática del estudiante desplazado es muy difícil de sobrellevar y lamentan no estar mejor preparados para brindarles un apoyo más significativo y eficaz.

Otro fenómeno asociado a esta problemática que se reveló durante la indagación es el referido a la protección de los docentes y personal que labora en zonas de conflicto o sitios peligrosos, donde corre peligro su integridad física, ya sea por amenazas o porque se ha atentado contra su vida. Al respecto, la Secretaría de Educación Departamental, y no la Municipal, ha elaborado un plan de contingencia con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del

Pueblo, con el fin de darle protección a los docentes a quienes les haya tocado salir de su lugar de trabajo por amenazas. En estos casos la Secretaría Departamental ha asumido de forma responsable la situación. En la investigación se constató que los docentes en primera medida son trasladados del lugar donde fueron amenazados a un lugar más seguro. En este sentido la Secretaría busca la mejor forma de reubicarlos y procurar que su desempeño laboral se haga de forma normal. Este respaldo a docentes amenazados, la SED lo ha venido realizando con mucha responsabilidad.

En lo concerniente a las nuevas modalidades pedagógicas y programas curriculares, la Secretaría de Educación Departamental ha estado haciendo varios foros con el propósito de implementar y fortalecer las nuevas formas de enseñanza. Entre esas metodologías sobresalen el sistema de escuela nueva y la metodología CAFAM. Dichas capacitaciones y cursos para los docentes son programados por la Administración una sola vez durante el año escolar. Pero no se ha realizado ningún curso o jornada de actualización en lo referente a la implementación de metodologías flexibles para aplicarlas a la población escolar desplazada. Así, el método de educación que se trabaja con los estudiantes desplazados, es el mismo que se implementa con los estudiantes no desplazados. , Por eso es posible afirmar que las garantías de enseñanza para la población escolar desplazada utilizando métodos diferentes a los tradicionales dentro de la institución educativa no se ha diseñado ni aplicado. Lo óptimo sería el empleo de unas metodologías flexibles, como la aceleración del aprendizaje para aquellos niños y jóvenes en extraedad que por diversas razones asociadas a su condición de desplazados no han podido concluir oportunamente sus estudios de básica primaria y que, por su edad, son muy mayores para estar en el aula regular y todavía muy jóvenes para ser atendidos como población adulta. También está la Escuela Nueva, un modelo educativo dirigido al fortalecimiento de la cobertura con calidad en educación básica primaria

que integra los saberes previos de los alumnos a las experiencias nuevas de aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo más importante, “aprendiendo a aprender por sí mismos.”¹⁰⁴ Pero estas propuestas; que se deberían emplear ya que responderían eficazmente a las necesidades de las personas en situación en desplazamiento en edad escolar; no se han implementado todavía.

La administración local, en cabeza de la Secretaría de Educación Municipal, ha fomentado la construcción y acondicionamiento de obras de infraestructura para beneficio de la población educativa del municipio de Mocoa. Esto se muestra en los informes y se corrobora con la visita a los establecimientos educativos. Para este adelanto ha sido definitivo el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental, entidad que ha acompañado a las instituciones en el propósito de construir, acondicionar o remodelar establecimientos educativos. Esta labor la hace por el sistema de Ley 21, norma que da asignaciones de recursos y se encarga de la construcción de establecimientos escolares. En lo que a esto se refiere, no existe por parte de las Administraciones ninguna alusión o referencia que especifique si estas construcciones escolares se destinarán a población escolar desplazada. Estos trabajos siempre se hacen pensando en beneficiar a la comunidad escolar en general, sin la distinción de si son estudiantes desplazados o no.

El Ministerio de Educación Nacional, MEN, a través de varias supervisiones y auditorias, ha realizado labores de evaluación y control para determinar cómo se han venido realizando los procesos educativos en el Departamento de Putumayo. La Secretaría de Educación Departamental también cuenta con un grupo de supervisores que se encargan de vigilar y evaluar la calidad educativa en el territorio que tiene a cargo. Según lo investigado, esta labor de evaluación y vigilancia se ha venido realizando de forma general, refiriéndose a toda la comunidad educativa y sin la especificación especial para los desplazados. En la SED existe un

¹⁰⁴ Fuente: www.colombiaaprende.edu.co

funcionario que lleva datos estadísticos sobre la población escolar en situación de desplazamiento, de esa base de datos se suministra información a otras instituciones que la requieren para realizar su labor su como lo es Acción Social en el programa Familias en Acción y también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas entidades se concentran en programas como el de restaurantes escolares y ayuda alimentaria para los desplazados. Entre toda la información que se ha logrado recopilar, se han obtenido numerosos indicadores para saber en qué situación está la población desplazada y así poder diseñar políticas públicas destinadas a mitigar un poco sus necesidades. Estas instituciones se integran en el Plan Integral Único (PIU) el cual debe encargarse del diseño de toda la política pública para la población desplazada, pero sus resultados hasta el momento no se conocen.

Esta investigación también revela que las secretarías de Educación Departamental y Municipal no han gestionado ni apoyado la creación de cooperativas que podrían permitir la integración de la comunidad en situación de desplazamiento para responder de manera propositiva ante la vulneración de su derecho a la educación; a pesar de que el fomento de dichas prácticas cooperativas se encuentra estipulado en el ordenamiento jurídico. La creación de cooperativas compromete directa e indirectamente a la comunidad y genera más confianza en el proceso de reinserción social de los desplazados; cuando se ha hecho, ha ayudado a la administración de los restaurantes escolares, en la construcción y dirección de granjas y huertas comunitarias, con el propósito de generar algunos ingresos y autoabastecerse en materia alimentaria. En lo que se indagó, las instituciones competentes han apoyado y organizado asociaciones de desplazados, pero sin tener en cuenta la incierta situación de la educación para esta población. Se han creado agrupaciones de desplazados para otros fines como soluciones de vivienda y tiendas comunitarias

que generen ingresos a las familias, pero las condiciones por las que está pasando la educación en el municipio de Mocoa no ha sido puesta en consideración.

La investigación que se hizo para indagar si las instituciones han respaldado el retorno y la reubicación de las personas desplazadas y su reintegración al servicio educativo que se presta o se ha prestado en algunas zonas, dio como resultado que en esta labor se han involucrado varias instituciones, tales como la Secretaría de Educación Departamental. Esta entidad mitiga dicha problemática contribuyendo en la construcción y reparación de edificaciones escolares, que se están levantando en lugares intermedios, cercanos a los lugares donde ha existido desplazamiento; esto con el propósito de que se facilite su retorno aprovechando la cercanía con sus lugares de origen, y también evitar que esta misma población migre a las cabeceras municipales lo cual haría más complicado su retorno. En este trabajo están involucradas otras instituciones aparte de la Secretaría de Educación Departamental; entre ellas encontramos la Agencia Presidencial de Acción Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y por parte de organismos internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La labor de estas organizaciones ha sido de cooperación y de cofinanciamiento de proyectos de construcción tanto para la población desplazada como para la población afectada por el conflicto armado en general. Pero parte de la Secretaría de Educación del Municipio de Mocoa no se encuentra ningún plan de contingencia para participar o intervenir en estos proyectos de apoyo a los desplazados.

3.5.2 INSTITUCION EDUCATIVA FIDEL DE MONTCLAR

IE FIDEL DE MONTCLAR

IE FIDEL DE MONTCLAR

Para finales del año de 1995 surgió la necesidad apremiante de ampliar la cobertura para la educación básica secundaria ya que la comunidad lo exigía por el aumento de estudiantes. El 1 de mayo de 1996, siendo Alcalde el Arquitecto Jimmy Díaz Burbano, a petición de la comunidad, se

comisionó al Especialista Elías Ricardo Navarro Huelgas, Coordinador académico del Colegio Ciudad Mocoa, para gestionar la creación de una nueva institución educativa. En esta época La Escuela Mixta la Reserva contaba con un pequeño espacio para la Dirección, cinco aulas y cinco docentes seccionales, destacándose los Licenciados, Julio César Morales, Teresa De Jesús, Angélica Calvache, Ernestina Vallejo y la normalista Matilde Caipe Angulo.

El 28 de junio de 1996 fue presentada por el especialista Elías Ricardo Navarro Huelgas,, la propuesta de creación y ampliación de cobertura, denominada “Colegio Básico Fidel de Montclar” ante la Secretaría de Educación Departamental y Alcaldía Municipal de Mocoa. La propuesta la elaboró y sustentó de conformidad con la Ley General de Educación, Ley 60 de agosto 12 de 1993 y Decreto Reglamentario 1860 de 3 de agosto de 1994.

Los argumentos del especialista Navarro, se basaban en la necesidad de prestar atención y ampliar la cobertura escolar en beneficio de la población rural no atendida y vulnerable, afectada por el desarrollo del Municipio de Mocoa hacia el sector norte por la vía Mocoa-Pitalito ya que allí se estaban desarrollando proyectos urbanísticos que aumentaron la densidad de población y consecuentemente las necesidades de cobertura educativa.

La Escuela Mixta La Reserva, presentaba unas perspectivas especiales de desarrollo y ampliación de cobertura por su ubicación estratégica y la disponibilidad de espacios abiertos. Además las instituciones prestadoras del servicio de bachillerato, como el Colegio Nacional Pío XII, el Colegio Santa María Goretti, el Colegio Ciudad Mocoa y San Agustín, no poseían el espacio necesario para ampliar su infraestructura, lo que las deja sujetas al recorte sistemático de cupos, afectando a la población infantil en su derecho fundamental a la educación.

En este sector de La Reserva convergen, las veredas del Alto Afán, las Toldas, Pueblo Viejo, Ticuanayoy, Buenos Aires, El Paisaje, Montclar, Yanamuco y Bota Caucana, así como los proyectos urbanísticos de nuevos barrios que se sumarían a los ya existentes, todo lo cual generó una gran demanda del servicio educativo, que se incrementaría aún más al sumarse el déficit de cupos para sexto grado, la distancia y la falta de transporte en el municipio

El proyecto de ampliar la cobertura a Colegio Básico, teniendo como base la infraestructura de la Escuela La Reserva, planteaba una solución sana, previsiva y justa a los anhelos de educación que se presentan en el Municipio y la Comunidad de ésta zona. También en la propuesta se destacó que en el Municipio de Mocoa se hacía necesaria la creación de una Institución de Educación Media Técnica, lo cual permitiría a los estudiantes recibir la preparación básica para el desempeño laboral en un campo específico, como también la preparación para acceder a la Educación Superior.

El 26 de Agosto de 1996, el Especialista Elías Ricardo Navarro Huelgas, fue reubicado definitivamente por necesidad del servicio y comisionado con encargo de funciones de la rectoría de la Nueva Institución Educativa, mediante el Decreto Nro. 122 de la Alcaldía Municipal de Mocoa, y posteriormente nombrado como rector en propiedad mediante concurso realizado por la Secretaría de Educación Departamental, y acto administrativo municipal, decreto N°. 0210 del 26 de diciembre de 1997.

Para el año de 1997 el rector gestionó una partida de Diecisiete millones (\$17.000.000.) de pesos para la construcción de cuatro nuevas aulas; estos recursos, provenientes del Departamento de Putumayo, constituyeron el inicio del desarrollo de la infraestructura definitiva del establecimiento educativo. Poco tiempo después, el rector diseñó y dio a conocer el escudo y la

bandera de la institución, lo mismo que los uniformes de los estudiantes, los cuales fueron aprobados y adoptados por la comunidad. Desde entonces el establecimiento educativo ha tenido un ascenso vertiginoso, destacándose por sus actividades culturales, deportivas, recreativas y de promoción a la comunidad, lo que le ha valido un gran aprecio por su calidad académica, disciplina y recurso humano.

La institución cuenta actualmente con una planta de personal de 18 docentes, quienes dan clase a 445 alumnos. En el tiempo correspondiente a esta investigación en la institución se registró un número de 179 estudiantes desplazados, siendo esta la segunda institución del municipio en atender población desplazada en edad escolar.

A continuación se analiza cómo se ha dado cumplimiento por parte de la administración del municipio de Mocoa, en cabeza del su Secretaría de Educación a la población desplazada que se encuentra matriculada en esta institución.

En la investigación se comprobó que las directivas de la institución educativa Fidel de Monclar permiten el acceso a los estudiantes en situación de desplazamiento sin poner ningún obstáculo ni exigir documentación que no estén en posibilidad de presentar. Esta labor se cumple siguiendo el ordenamiento y las recomendaciones que hace el Estado para brindar trato privilegiado y protección a esta población, y que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades.

Con relación a este punto se pudo confirmar que en las instituciones elegidas para hacer este trabajo la norma se cumple plenamente. Es decir que el estudiante desplazado se puede matricular presentando únicamente un documento que lo reconozca como persona en situación de desplazamiento, documento que generalmente está en poder de su padre de familia o acudiente.

Como se ha comprobado en el análisis de las otras instituciones, aquí también la atención en la parte de ayudas psicológicas ha sido negativa; esto significa un incumplimiento en el ordenamiento jurídico que obliga a dar orientación psicosocial a la comunidad desplazada en edad escolar. Se reconoce que esta orientación debería ser enfocada a la gran cantidad de problemas que tiene esta población, como miedos, traumas, baja autoestima e inseguridad. Y también implicaría seguimiento y ayuda a los integrantes del hogar, así como articulación entre la psicóloga, los padres de familia y las directivas de la institución para una mayor comprensión y apoyo a los estudiantes, La Institución Fidel de Montclar cuenta con una orientadora profesional, ella atiende a una población de 445 estudiantes; pero en el desempeño de su labor profesional no hace distinción alguna entre el estudiante desplazado y el que no lo es. Sobre el incumplimiento que significa esa falta de discriminación positiva para con los desplazados las directivas de la institución hacen referencia de la poca colaboración de la Secretaría de Educación Municipal, en cuanto a la obligación legal que en este caso le compete.

En el tema de la salud, las campañas que las administraciones han hecho de forma general, no especifican directamente a personas desplazadas, no han tenido un seguimiento adecuado en cuanto al beneficio a esta población y en realidad no se han realizado como una verdadera política pública articulada entre las instituciones correspondientes como Secretaría de Salud y Bienestar Familiar. En cuanto a las campañas hechas en la institución educativa, los programas de salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, han sido inconstantes; en la investigación realizada se constató que la comunidad educativa siempre ha pedido esta clase de eventos debido a las situaciones que han surgido con los estudiantes sobre embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual, pero la Administración

Municipal, en cabeza de la Secretaría de Educación, ha venido incumpliendo con esta obligación que por orden jurídico tiene que realizar.

En lo referente a capacitación y actualización docente, es preciso afirmar que de esas políticas y programas siempre se han encargado los entes territoriales y locales, en este caso las Secretarías de Educación Departamental y Municipal. Pero en la actualidad, cuando ha aumentado la problemática que presentan los desplazados, se percibe y manifiesta por parte de los docentes una disminución en los cursos, jornadas de actualización y actividades de capacitación. Además, las directivas sólo programan capacitaciones sobre asuntos y temáticas generales de la pedagogía y la didáctica, pero el tema de la atención a desplazados es un asunto que poco se menciona; por ello les resulta complicado incorporarlo al quehacer cotidiano de la institución sin poseer aunque sea mínima capacitación u orientación por parte de expertos.

Sobre la protección a docentes amenazados, como ya se ha aclarado en apartados anteriores de esta investigación, existe toda una estrategia coordinada entre la Secretaría de Educación Departamental, la Procuraduría Delegada y la Defensoría del Pueblo. También hay una participación del sindicato de los profesores. Toda la información al respecto ha sido corroborada por los directivos de las instituciones y se puede confirmar por parte de los funcionarios de la SED.

Sobre el diseño e implementación de metodologías especiales de estudio y aprendizaje, esta investigación encontró que las directivas de las instituciones afirman que el ente encargado de proponerlas e impulsarlas es la Secretaría de Educación Departamental, por su misma naturaleza gubernamental, es esta entidad la facultada para hacer poner en práctica las diferentes metodologías. Pero, cuando hay renovación en ese campo, todo se concibe para ser aplicado en

forma general, sin hacer distinción de si el estudiante es desplazado o no. Por su experiencia en situaciones que se han presentado, los profesores manifiestan que las soluciones generales tratan de resolver los problemas en la enseñanza y el aprendizaje de toda la población pero que en muchos casos los estudiantes desplazados continúan resagados académicamente por los múltiples problemas que tienen.

La adecuación y construcción de establecimientos escolares siempre ha sido responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental y al respecto, las directivas de la institución Fidel de Montclar manifiestan que en los últimos tres años no han recibido ningún apoyo por parte de la Administración Municipal. El rector comenta que en la actualidad se están construyendo unos salones y ampliando la planta física, pero todo es con aportes de la OIM, ya que la institución aumentó la cobertura con un programa de bachillerato para adultos.

La administración Municipal no lleva ningún programa, ni existe cooperación en desarrollo y seguimiento de las acciones educativas, la gran mayoría de estas labores las realiza la Secretaría de Educación Departamental en coordinación con el MEN.

El apoyo a la creación de cooperativas por parte de administración municipal no ha existido; esta es una de las falencias que han tenido las Administraciones y que la comunidad desplazada reclama. En este aspecto hay coincidencia en la mayoría de instituciones.

Ante esa problemática las directivas de la institución manifiestan que siempre ha sido responsable la SED con la ayuda de ONGs nacionales como internacionales, así como agencias de cooperación internacional como OIM, ACNUR,

3.5.3 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD MOCOA

El Colegio Ciudad Mocoa, fue creado en 1.992 bajo la administración del doctor Segundo Salvador Lasso Gómez, Gobernador del Departamento del Putumayo. La Resolución N° 0059 del 22 de julio de 1.992 ordenó la iniciación de labores de los grados 6° y 7° y dio piso jurídico a la institución para garantizar la educación a los jóvenes y señoritas del Municipio de Mocoa en educación básica. La ordenanza N° 164 del 7 de agosto de 1.996, creó el colegio ya que hasta entonces sólo tenía licencia de funcionamiento. La resolución N° 000163 del 10 de septiembre de 1.996, emanada de la Secretaría de Educación integra la Escuela Mixta “La Esmeralda” al Colegio Ciudad Mocoa para funcionar como institución única desde el preescolar hasta el grado once. Posteriormente con la resolución N° 0376 del 2 de julio de 1.999, emanada de la Secretaría de Educación Departamental se reconoce el servicio educativo público desde el grado preescolar hasta el grado once, es decir se da la aprobación de estudios.

IE CIUDAD MOCOA

A esta institución educativa acuden jóvenes y señoritas de todas las veredas y barrios de Mocoa, y, prácticamente de todos los Municipios del Departamento. Los padres de familia son personas humildes, con empleos independientes y negocios caseros. El nivel educativo de ellos es medio-bajo, el 96% de la población ha terminado su primaria, el 35% su bachillerato y sólo el 10% han realizado estudios superiores. Es muy poco el interés por el estudio tanto de los padres como de los hijos, pero paulatinamente se ha ido cambiando esta manera de pensar y ya los egresados buscan terminar sus estudios superiores.

IE CIUDAD MOCOA

En la Institución Educativa Ciudad Mocoa laboran 42 docentes, mediadores de 1200 estudiantes, de los cuales 500 están en situación de desplazamiento, de ellos, 247 son mujeres y 253 son hombres. 407 de estos estudiantes procede del Departamento de Putumayo y los demás son originarios de Cauca, Nariño y Huila. Estos estudiantes habitan con sus familias en algunos asentamientos de desplazados como los Guaduales, el barrio San Fernando; este es un barrio que

se construyó para desplazados; también en el barrio San Miguel, en La Esmeralda y en unas veredas que están en la periferia del municipio.

Como se muestra en las gráficas, la Institución cuenta con una planta física en excelentes condiciones por ser relativamente nueva, su infraestructura es moderna comparada con otras instituciones como la IE Pio XII y su labor educativa es fundamental, para el Municipio y el Departamento. Pero el motivo principal para elegir a la IE Ciudad Mocoa como parte de este estudio fue la gran presencia de estudiantes en condición de desplazamiento. La investigación realizada allí nos permitió verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que tiene la administración local en la atención a la población desplazada en edad escolar.

Se ha verificado que la Administración Municipal en coordinación con la Institución Educativa, proporciona el servicio educativo sin ningún costo de matrícula o pensión. Y al igual que en las otras instituciones estudiadas no se exige documento alguno a la población desplazada que acuda a matricularse, salvo el documento que le certifique dicha condición. En la labor de identificación y certificación del desplazado participan entidades como Acción Social, Bienestar Familiar, Secretaría de Educación Departamental y apoyan algunas agencias de cooperación internacional como OIM y ACNUR. Todas ellas se han comprometido a brindarle y garantizarle el servicio educativo a la población desplazada que lo requiera.

En la investigación que se realizó en la IE Ciudad Mocoa, con relación al apoyo psicológico que se le debe dar a esta población, las directivas de la institución manifestaron que ante el grave del problema psicosocial que enfrentan los desplazados, la administración local ha sido muy indiferente y, por lo mismo su acción al respecto ha sido mínima. Los docentes y el rector manifestaron que es muy difícil prestar esta ayuda profesional con un solo psicólogo, y que muy

seguramente este problema resulte cada vez más grave si no se cuenta con el interés y la voluntad política de la Administración Municipal para atenderlo.

Las directivas de la institución comentan que la administración local no ha realizado campañas sobre salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas y embarazos a temprana edad, a pesar de que esta recomendación siempre la han hecho los profesores del plantel. Por su parte, el rector manifiesta que este problema es grave en un plantel donde cerca de la mitad de los estudiantes están en condición de desplazamiento y una buena parte de los demás en situación de vulnerabilidad. Pero el interés en generarle alternativas de solución a esta problemática, por parte de la administración municipal ha sido negativo, y hasta el momento no se ha visto ninguna campaña al respecto. De esto se puede concluir que en medio de esta población escolar se encuentra una población de desplazados que no ha recibido orientación ni capacitación en temas de salud pública y todo lo concerniente de educación sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos a temprana edad.

Relacionado con la preparación y capacitación de los docentes, aquí siempre se ha respondido a lo que programa la SED. Se trata de actividades de formación que se programan una vez en el año. El rector y los docentes de la institución manifiestan que les ha hecho mucha falta una buena capacitación o actualización sobre cómo atender y orientar a los estudiantes desplazados y víctimas de la violencia. Añaden que la Administración local ha fallado en su obligación de brindarles capacitación a pesar de que ellos lo han solicitado en repetidas ocasiones.

En lo concerniente a la protección de los docentes que han sido amenazados en lugares donde hay conflicto, la Secretaría de Educación Departamental, siempre ha buscado las soluciones

necesarias en coordinación con otras entidades, y han buscado darle protección al docente trasladándolo a un lugar donde su vida e integridad personal no estén en peligro.

En una entrevista realizada para esta investigación, las directivas de la Institución Educativa Ciudad Mocoa declararon su inconformidad por la falta de implementación de metodologías flexibles para el beneficio de la población escolar desplazada. Los profesores manifiestan su impotencia ante este descuido y miran con gran preocupación el atraso que los niños y niñas han tenido durante los periodos académicos.

En cuanto a la reparación, acondicionamiento y construcción de establecimientos escolares, se cuenta con lo que ha venido realizando la SED en proyectos y acciones pactadas en cofinanciación con otras instituciones como la OIM, USAID y otra ONG. La Secretaría realiza construcciones escolares por el sistema de ley 21. Por su parte, las directivas de la institución manifiestan que la administración municipal no se ha interesado en lo más mínimo para ofrecer solución de locación a la institución y a la población desplazada en edad escolar.

En lo referente a procesos de evaluación y seguimiento, las directivas dicen que la administración Municipal no se ha interesado en diseñar y aplicar los indicadores pertinentes para realizar dichos análisis y controles, y toda labor al respecto, la ha venido realizando la SED en coordinación con el MEN y algunas firmas consultoras.

Los docentes y el rector manifiestan el poco interés que ha mostrado la administración municipal en organizar y dar soporte a la conformación de cooperativas y dar más apoyo a la comunidad, sobre todo refiriéndose a la gran cantidad de población en situación de desplazamiento. Se reitera que respecto este tema la Administración local ha manifestado muy poco apoyo.

En cuanto al fortalecimiento del servicio educativo en sitios de retorno para personas en situación en desplazamiento, la entidad encargada de esta labor es la SED; en la investigación que se realizó manifiestan los docentes y directivos de la institución que hasta el momento nadie ha realizado este trabajo, ya que el número de estudiantes desplazados sigue aumentando en la Institución Educativa Ciudad Mocoa, continúan llegando estudiantes desplazados de los municipios del medio y bajo Putumayo. Sin eficaces programas de retorno ni instituciones educativas que los retengan en sus lugares de origen o en sus alrededores, estos estudiantes hacen cada vez más compleja la labor educativa.

3.5.4 ESCUELA RURAL MIXTA ALTO AFÁN

Esta escuela se encuentra ubicada a 5 kilómetros del casco urbano del Municipio de Mocoa, fue fundada en el mes de septiembre en el año de 1966 y en la actualidad cuenta con 393 estudiantes, de los cuales el 95 % están en situación de desplazamiento, es de señalar que esta población aumentó en los últimos 9 años. Esta sede cuenta con un personal 25 docentes, repartidos en la escuela de Nueva Esperanza y en la sede Quince de Mayo. A la sede principal asisten niños de los asentamientos Nueva esperanza, El porvenir y 15 de mayo.

CENTRO RURAL ALTO AFÁN

La escuela el Alto Afán, como también se ha comprobado en las otras instituciones donde se ha hecho este estudio,, ha estado proporcionando y garantizándole la educación a todos los estudiantes que lo han solicitado, pero en especial a la población escolar desplazada. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de alumnos desplazados en la institución es alto, debido en gran parte a los asentamientos que se han ubicado cerca a las sedes que la conforman, que son los que más población desplazada albergan hasta el momento. Con relación a las ayudas psicológicas que se deben prestar a esta población, las directivas de la escuela manifestaron un gran inconformismo, debido a la falta de atención. Los docentes declaran la gran dificultad que tienen para prestarles una adecuada atención a los niños ya que la problemática que ellos traen les complica su aprendizaje. Los docentes también manifiestan que la administración local no se ha interesado en lo más mínimo por tratar de subsanar este problema que cada vez es mayor. Además en el Centro Educativo Alto Afán se conjugan muchos problemas para la enseñanza; uno de los principales es la falta de una buena planta física, ya que faltan salones en condiciones óptimas para recibir clase y que estén dotados con el mobiliario necesario.

El rector declaró para esta investigación que la Secretaría de Educación Municipal no ha buscado soluciones a los múltiples problemas que se han venido dando en la institución. A su vez, los profesores comentan sobre muchas situaciones difíciles que suceden en relación con los desplazados y que se les salen de las manos al no tener los recursos para poder ayudarlos. Entre muchos factores de la compleja problemática los docentes mencionan los conflictos internos que ellos viven, y la presencia de estudiantes embarazadas. Por todo esto las directivas de la institución ven con gran preocupación cómo los gobiernos locales no ponen la atención en este asunto. Hasta el momento, según testimonio de los profesores y de algunos padres de familia entrevistados, la Alcaldía no ha promovido campañas de prevención de enfermedades ni educación sobre sexualidad.

En el tema de capacitación a los docentes, ellos mismos manifiestan que el ente encargado de hacerlas es la SED, y añaden que en unas pocas ocasiones las ha realizado la Administración Municipal. Dicen los profesores que frecuentemente solicitan actividades de formación y actualización, que en ocasiones se han valido del respaldo del sindicato, pero no han obtenido resultados positivos. Manifiestan también que se sienten desactualizados. Y en lo referente a atender estudiantes en situación de desplazamiento informan que les resulta un poco complicado, sin tener la preparación por parte de personas idóneas en la materia, y que les resulta más preocupante en los últimos tiempos desde que ascendió el número de estudiantes en esa condición.

La percepción en cuanto a la protección de docentes amenazados es similar en las cuatro instituciones que más población desplazada tienen en edad escolar en el municipio de Mocoa. Se afirma que la Secretaría de Educación Departamental ha estado encargándose bien de este problema. En particular las directivas de esta institución reconocen que la SED ha respondido

muy bien a los docentes, y saben que para ello se ha contado con el respaldo de otras instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el sindicato de los profesores.

En esta institución, como en otras, hasta el momento la SED no ha implementado metodologías alternativas para ser trabajadas con la población desplazada en edad escolar. Los docentes de la escuela el Alto Afán reclaman mucho estas prácticas por la obvia razón de que el 95 % de sus estudiantes son desplazados; y allí se hacen muy evidentes las dificultades para el aprendizaje. Los docentes esperan que se les capacite para implementar metodologías nuevas que les permitan dar una respuesta más eficaz a los retos pedagógicos y didácticos que a diario enfrentan.

En lo que se pudo investigar y verificar, las instalaciones del Centro Educativo Alto Afán no tienen una buena infraestructura. Las directivas del Centro claman por la ampliación de su escuela, y en varias ocasiones han presentado proyectos de construcción de más salones a diferentes entidades, en especial a la administración municipal, pero no han tenido resultado alguno. El rector resalta lo preocupante de esta situación ya que en la actualidad hay mucho hacinamiento.

En referencia a los procesos de seguimiento los profesores de esta institución dicen que estos procesos de verificación y control de las acciones educativas en los entes territoriales y la aplicación de indicadores de seguimiento y evaluación los llevan a cabo, los registran y realizan las entidades competentes legalmente, en este caso el MEN en coordinación con la SED.

En el centro educativo Alto Afán, a pesar de tratarse de una institución donde la gran mayoría de estudiantes son desplazados, la infraestructura es pésima. Se evidencia que no hay preocupación de las administraciones Municipal y Departamental por mejorarla, en consecuencia, la obligación

de apoyar a la comunidad e integrarla para mejorar el servicio educativo no se ha cumplido y se trata de un servicio público muy requerido.

3.5.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLÁCIDO

La Institución Educativa Fray Plácido lleva su nombre en honor a Monseñor Plácido Camilo Crous, primer Vicario Apostólico de Sibundoy. La historia dice que los habitantes de los barrios 17 de julio y Kennedy de Mocoa, en su afán por erradicar los prostíbulos que allí existían, gestionaron y lograron la fundación de la Escuela Urbana Mixta Fray Plácido Camilo Crous creada mediante la resolución No. 029 de mayo 16 de 1.972 expedida por la Dirección de Educación Nacional contratada por el Vicariato Apostólico de Sibundoy. Se iniciaron actividades escolares el 1° de octubre del mismo año con 60 alumnos, repartidos en los grados Primero y Segundo, a cargo de los profesores Roberto Liñeiro y Alberto Quintana, también director.

En septiembre de 1.988 se nombró como Director al Licenciado Nelson Mosquera, a quién la comunidad educativa encargó la misión de la ampliación de la cobertura de la escuela a la Educación Básica y Media. De esta manera, en enero del año 2.000 mediante la resolución 0452 promulgada por la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo se cambió la razón social de la Escuela Urbana mixta por Centro Educativo Fray Plácido y se autorizó la ampliación de la cobertura hasta el grado 6° de Básica Secundaria.

El 13 de enero de 2.003 el Departamento de Putumayo mediante el decreto 0050 creó la Institución Educativa Fray Plácido conformada por la fusión del Centro Educativo Fray Plácido, la Escuela Urbana Mixta los Sauces y la Escuela Urbana Mixta José Homero Mutumbajoy, además amplió la cobertura educativa hasta el grado 9° de Educación Básica Secundaria. Se

iniciaron labores con 1.176 Estudiantes, 48 Docentes, 3 Directivos Docentes y 7 Administrativos. Posteriormente, mediante el decreto 0141 de marzo de 2.005 se autorizó la ampliación de la cobertura hasta la Educación Media Técnica con Modalidad Empresarial y, finalmente, mediante la resolución No. 0611 de mayo 2 de 2.006 se aprobaron los estudios correspondientes a los niveles de Educación Pre- Escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media con Modalidad Técnica Empresarial. A partir del año 2.004 se inició el proceso de ampliación de la planta física en la Sede Los Sauces Allí se han ejecutado hasta ahora 3 proyectos importantes: con el auspicio de la Embajada del Japón se construyeron 3 aulas y un restaurante, con la USAID de los EEUU se construyó un bloque de 8 aulas y finalmente, con el Ministerio de Educación Nacional se construyó un bloque que cuenta con 4 aulas y dos laboratorios.

SEDE LOS SAUCES DE (IE FRAY PLACIDO)

Para el fortalecimiento de la Modalidad Técnico Empresarial, la Institución ha constituido dos convenios de Articulación con el SENA Regional Putumayo y el Instituto Tecnológico del Putumayo, ITP. La articulación es un proceso pedagógico y de gestión que permite adelantar acciones para facilitar la movilidad y el tránsito de los alumnos de la I E. Fray Plácido desde el

grado 10° a ofertas educativas de Educación Superior. El convenio con el SENA permite a los estudiantes de grado 10° cursar un programa Técnico Profesional. El convenio educativo Por Una Amazonía en Paz pactado con el I.T.P ofrece a los estudiantes cursar los programas Técnico Profesional en Gestión de Proyectos en Biocomercio o Técnico Profesional en Gestión de Proyectos Agroindustriales y Ecológicos.

En la actualidad la Institución cuenta con un gran número de estudiantes: 1596 alumnos en total, repartidos en las tres sedes educativas: sede Los Sauces, sede José Homero y la sede principal. De ese total de estudiantes ubicados en esta institución, 590 se encuentran en situación de desplazamiento. La planta del personal docente es de 63 profesores¹⁰⁵.

SEDE LOS SAUCES DE LA (IE FRAY PLACIDO)

En entrevista realizada al rector como parte de esta investigación, él manifiesta que por obligación legal debe atenderse a los estudiantes que soliciten cupo, y más si se trata de personas desplazadas. Al respecto, manifiesta no tener problema, ya que los barrios y caseríos

¹⁰⁵ WWW.IEFRAYPLACIDO.EDU.CO

circunvecinos en su gran mayoría son habitados por desplazados, razón por la cual la institución ha favorecido a mucha gente que llega del bajo Putumayo huyendo de la violencia.

En el tema de las ayudas psicológicas que se le deben proporcionar a la población desplazada que se encuentra en edad escolar, el rector manifiesta que cuenta con una profesional en psicología, ella presta su ayuda a todos los estudiantes por igual, sin hacer distinción entre los que son desplazados y los que no lo son.

Las campañas y programas que las instituciones deben adoptar en materia de salud y educación no han sido posibles aquí. El rector manifiesta que es mínima la colaboración que se tiene de parte de la Administración Municipal y Departamental, y tanto los estudiantes como el personal docente requieren este servicio pues se considera una necesidad para el bienestar personal y comunitario.

En cuanto a la protección de maestros que se encuentran amenazados, aquí la respuesta es casi idéntica a la recibida en otras instituciones. Se tiene claro que esta responsabilidad es de la Secretaría de Educación Departamental, y que ella la ha venido cumpliendo al trasladar a los docentes que sufran esta situación hacia una zona más segura para ellos. En la protección de los profesores también colaboran la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el sindicato de educadores.

En la misma entrevista, el señor rector de la Institución Fray Plácido comenta que allí sí se han aplicado algunos métodos flexibles para ayudar a estudiantes en extra edad, es decir aquellos que han superado el nivel de edad máximo para el grado en que se encuentran y que debido a eso se encuentran retrasados en nivel escolar, esto lo aplican a estudiantes desplazados que son los que más sufren tal situación.

En cuanto al apoyo por parte de la Administración local para la construcción de salones y remodelación de la infraestructura existente, no se ha recibido ni el más mínimo apoyo. Esto contrasta con lo realizado por algunas agencias de cooperación internacional como USAID Y OIM, pues con sus aportes se logró la construcción de varios salones, ampliando la planta física y por lo tanto aumentando la cobertura.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de planeación, ejecución y seguimiento de las acciones educativas, el ente encargado es el Ministerio de Educación en coordinación con las Secretarías de Educación Departamental y Municipal

El rector manifiesta que hasta el momento no se ha hecho ni se ha dado iniciativa de la creación de cooperativas, la comunidad reclama asesoría para poder organizarse.

En cuanto a la construcción y apoyo al sistema de educación en los lugares de desplazamiento para facilitar el retorno de la población, la SED es la encargada y para ello cuenta con el sistema de ley 21 para la construcción de escuelas, esto lo ha hecho en coordinación con la OIM, cuya intervención ha sido de cofinanciar los proyectos.

Con esta investigación y la respectiva verificación que se hace en estas instituciones educativas, se logró comprobar de primera fuente, la calidad de educación que se les ha venido brindando a los desplazados; es importante mostrar en este trabajo, la responsabilidad que han asumido la administración local y departamental en la atención a la PSD en edad escolar.

4. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EDUCACION PARA LOS DESPLAZADOS

Es necesario poner en discusión la actual política pública educativa y hacer un análisis sobre el modelo que debe prevalecer a partir del reconocimiento de las deficiencias del actual sistema educativo que hay en Colombia; aun mas con la situación que se ha venido presentando con el problema del desplazamiento y la población en edad escolar. A raíz de esas dificultades, los gobiernos, teniendo como base, el ordenamiento jurídico internacional y la Constitución de 1991 han facilitado una serie de normas que amparan protegen y brindan garantías a la población en situación en desplazamiento.

La ley 387/97 determina adoptar modelos educativos acordes con la situación que tiene la población desplazada, a travez del Ministerio de Educacion nacional en el orden nacional y las Secretarias de Educación departamental y municipal en lo regional y local. En concordancia con todas estas instituciones, el derecho a la educación se ha facilitado hasta cierto punto, debido a que la obligatoriedad de proporcionar este derecho, esta enmarcado en los tratados y acuerdos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito.

Mirando la dificultad que se ha presentado en los últimos años, por el aumento de los desplazados se crea el “decreto 2231 del 3 de octubre de 1989, cuya finalidad es darle apoyo y facilitar el ingreso a las personas y familias victimas de la violencia; con base en ese decreto se los exonera de pago y de pension, que el sector educativo nacional está vinculado activamente al proceso de rehabilitación, normalización y reconciliación del país, que en este sentido debe aportar servicios e infraestructura para mitigar los efectos negativos de los hechos

de violencia y colaborar con el proceso de reinserción social de los familiares de las víctimas de la violencia”¹⁰⁶.

En un principio se empezó con ese decreto y esas ayuda a las personas victimas de la violencia. Hoy en dia, los gobiernos han creado, una serie de instituciones, que se han encargado de favorecer y ampara a esta población. La Red de solidarida Social hoy AccionSocial junto con al algunos ministerios, en este caso el Ministerio de educación Nacional se ha fijado unas metas para disminuir el abandono escolar y aumentar cobertura, en los municipios que haya mayor recepción de desplazados y por ende, aumentar la cobertura en los establecimientos educativos publicos; junto a este derecho, va consigo el de garantizarle el servicio de una forma eficiente. Esta obligatorieda esta en marcada en el decreto 2562 del 27 de noviembre de 2001 cuya finalidad es el de dar un completo apoyo y permanente, con un conjunto de instituciones del orden nacional departamental y local, para brindarle mayor protección a los desplazados en la destinación y adecuación de establecimientos en la cual se desrrollen programas educativos.

Ante la delicada situación que viven actualmente los desplazados en materia educativa, también se hace necesario llegar a acuerdos, y frente a este complejo escenario se hace indispensable entrar a analizar el porqué de lo que está sucediendo; una de las primeras respuestas es que “la alta racionalidad administrativa deteriora los mismos procesos educativos y pedagógicos. Estos procesos se ven reflejados por ejemplo en los objetivos del aumento de cobertura a través de la denominada racionalización educativa, que sin aumento de inversión ha buscado el incremento de

¹⁰⁶ Decreto 2231 de Octubre 1989

los cupos de las diferentes instituciones con el aumento del tiempo aula – institución por maestro, directivas docentes y el aumento del número de estudiantes por salón de clase”¹⁰⁷.

Para referirse al análisis de las políticas públicas en educación y la situación que viven los desplazados en edad escolar, poniendo como pilar fundamental el instrumento de las 4 A encontramos las siguientes inconsistencias.

En cuanto a la **Asequibilidad**, el Estado ha venido proporcionando de forma normal y cumpliendo con todo los preceptos que Colombia ha ratificado en el orden internacional; con una serie de debilidades para esta población, en el caso del municipio de Mocoa, que no hay, ni destinan el suficiente recurso para asegurar que los establecimientos educativos, los docentes y los programas de enseñanza, estén a disposición de todos los niños y niñas, en cantidad aptas para esta población. En esas situaciones el Estado no ha hecho los suficientes esfuerzos financieros tanto para invertir en el desarrollo de infraestructura, como en dotación de los establecimientos educativos públicos, ante eso se pudo demostrar con la investigación, que hay una gran deficiencia en la construcción sedes físicas adecuadas, servicios públicos, bibliotecas, material de enseñanza, libros, útiles escolares, complementario a esto se le suma, la importancia de establecer los criterios de incorporación del personal docente y los programas de formación y profesionalización, como para asegurar a los maestros y maestras salarios competitivos y la garantía de sus derechos laborales, en esta situación, el Estado ha ido desprotegiendo y decuidando toda esa labor de los profesores, en la cual los docentes que enseñan a los desplazados y no desplazados se les siguen quitando garantías.

¹⁰⁷ Apuntes sobre la Política Pública de Educación en Colombia Programa Educación para Todos. Septiembre del 2008

En la **Accesibilidad**, el Estado ha garantizado el acceso a la población estudiantil a entrar a los establecimientos educativos públicos, evitándoles cobrar ningún valor por hacerlo, desafortunadamente, en el caso de algunas instituciones educativas en el municipio, las exigencias se hacen de otra manera, como el requerimiento de uniforme, útiles escolares, auxilio para transporte y restaurante escolar, todas estas barreras frenan bastante el acceso de los niños al sistema educativo o en la gran mayoría de casos impidiendo su continuidad en la escuela, de estas situaciones, en particular el municipio de Mocoa se han quejado mucho, los padres de familia esto lo han hecho en la personería y defensoría del pueblo instituciones que velan por la no violación de los Derechos Humanos

La **aceptabilidad**, el Estado ha aumentado de manera deficiente en garantizar este componente de las 4 A debido a muchas razones, se mira que la calidad de la educación ha bajado significativamente. En el caso del municipio de Mocoa y en especial el escenario que tiene en estos momentos la población desplazada en edad escolar no goza ni tiene modelos pedagógicos acorde con la población beneficiada, se puede ver que el “Estado no ha garantizado que todas las escuelas o sedes donde hay población desplazada se ajusten a unos criterios mínimos de enseñanza, y que la calidad de la educación sea aceptable para los niños y las niñas”¹⁰⁸. Y es por eso, que ante falta de garantías de calidad teniendo en cuenta este punto de las 4 A se ha aumentado la deserción, ya que no han hecho respetar sus condiciones de desplazado, se ha venido atentando con la dignidad, con la condición de desplazado y la diversidad cultural de las personas desplazadas en edad escolar.

Con la **Adaptabilidad** el “Estado tiene la obligación de garantizar que la educación se adapte a las necesidades de los niños y niñas, de la sociedad y de la comunidad, y no a la inversa. En

¹⁰⁸ Sistema de Seguimiento y Evaluación de Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación

desarrollo de esta obligación se deben implementar acciones que tiendan a garantizar la permanencia de los niños y las niñas en el sistema educativo y la eliminación de toda forma de discriminación que amenace su adaptación”¹⁰⁹.

Los cambios que se han venido dando en favor de las prsonas desplazada en edad escolar, teniendo como base las recomendaciones de las 4 A no se ha dado, en las instituciones que se investigo, examinando e investigando a los docentes y comunidad educativa cuyos resultados fueron diferentes a lo que recomienda la relatora sobre este criterio en educación.

“Por otro lado, no se están articulando en forma asertiva los programas desarrollados para la atención a esta población dentro del Proyecto Educativo Institucional, creando inconsistencias en el cumplimiento de la calidad educativa, ejemplo de esto es la no valoración de las historias de vida de los pequeños infantes que han sufrido la problemática del desplazamiento al momento del ingresar a la escuela, debilidades institucionales que se reflejan en la poca permanencia de los niños, fomentando el rechazo a la educación”¹¹⁰

Una política pública educativa para personas en situación de desplazamiento, tendría que tomar en cuenta que es necesario apoyar integralmente a las instituciones educativas, de tal manera que se creen las condiciones para que estas personas puedan adquirir una solución económica en el mediano y largo plazo. De lo contrario, quedan sumidos en la trampa de la pobreza y la necesidad del asistencialismo estatal para sobrevivir, lo cual quebranta de manera permanente sus derechos fundamentales.

¹⁰⁹ Ibid P 38

¹¹⁰ Analisis de la Politica Publica Educativa en el Marco de la calidad y cobertura para la población infantil desplazada

En Colombia no ha existido una política pública en educación que cumpla con estas características; se puede afirmar que nuestra educación ha jugado un papel importante, antes que por sus lineamientos nacionales, por la labor comprometida de sus maestros y profesores. Como se ha visto, las iniciativas de mejoramiento de la calidad de la educación, en sus evaluaciones finales no han cumplido con sus metas, se han dado otros plazos, se han presentado enfrentamientos entre agencias por los presupuestos, se ha presentado incredulidad e incertidumbre en cuanto a las metas, el panorama no está claro para los llamados a transformar la educación, ¿Qué le puede esperar a un país que no tiene un horizonte claro en su política pública en educación? Tal vez, el deber de seguir luchando por la independencia educativa y continuar con el amor por la profesión docente que es lo que ha salvado a Colombia.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Al estudiar, como se ha hecho en esta investigación, las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan la actual situación de los desplazados en el Departamento de Putumayo y en especial en el municipio de Mocoa como mayor receptor de personas desplazadas, vemos que se trata de una problemática que ha transformado claramente la región en muchos sentidos en los últimos 10 años. A pesar de que la situación es evidente y existen las disposiciones legales, la Administración local no ha generado las acciones suficientes para atender a dicha población y evitar que se sigan vulnerando sus derechos humanos básicos y los especiales que tienen por su condición. Ante esto se puede afirmar que por más normas que expida el Estado éstas no se cumplirán mientras no exista la voluntad política y la capacidad de los funcionarios locales para darles un cumplimiento real. Entre tanto los desplazados siguen sufriendo la deficiencia en los

servicios de educación, salud, vivienda digna, fuentes de empleo y muchas otras carencias que les impiden siquiera vislumbrar un futuro en el que puedan vivir dignamente.

En el sector de educación se observó que, durante el periodo estudiado, la Administración local y las demás instituciones no han mejorado significativamente el servicio, sobre todo en relación con las normas y leyes que amparan a los desplazados. Algo notable es que en las instituciones que acogen a esta población en edad escolar perduran las falencias en infraestructura escolar, mobiliario, bibliotecas, salas de sistemas, restaurantes escolares, capacitación a docentes y mucho apoyo psicosocial; este apoyo requiere personal especializado como psicólogos y trabajadores sociales con experiencia que ayuden a fortalecer la parte anímica de la población, para generar alternativas en la recreación y la utilización del tiempo libre dando más seguridad al individuo regenerando lazos afectivos y sociales, con esto se ayudaría fortalecer los espacios de expresión y reconocimiento del impacto emocional que los hechos violentos les han ocasionado. Por otra parte, se verificó también que se destina poco presupuesto a este servicio y esto refleja la falta de compromiso por parte de la administración local con su obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. También se pudo observar que la coordinación entre la Secretaría de Educación Municipal junto con las demás dependencias de la administración y las instituciones descentralizadas como el ICBF, Acción Social, la Gobernación y las agencias de cooperación internacional como OIM, ACNUR y, Cruz Roja no es la mejor; tanto es así que, por negligencia de la administración local, los resultados de acciones conjuntas en beneficio de los desplazados no han sido los mejores.

Al hacer seguimiento a la ejecución de política pública en favor de los desplazados en el municipio de Mocoa, y su obligatorio cumplimiento, es necesario tener en cuenta el documento CONPES 2804 Ministerio del Interior DNP Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

13 septiembre de 1995: “En este documento Conpes se hace una primera formulación de un programa de carácter nacional para la atención integral a la población desplazada, en el cual se establecen estrategias de consolidación socioeconómicas, acciones de mediano y largo plazo, tendientes a generar condiciones de sostenibilidad económica social para la población desplazada, en el marco del retorno voluntario o reasentamiento en zonas rurales y urbanas. El programa permite específicamente el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno. En el campo de la generación de ingresos comprendía una línea de proyectos productivos, muy completa en su formulación, con acciones específicas para el fomento del empleo la asistencia y la capacitación técnica, el acceso a créditos para creación e impulso de microempresas. Adicionalmente se proponían acciones de formación de jóvenes, con apoyo de sostenimiento, y el acceso de la población desplazada a los programas de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social”¹¹¹.

A la luz de esto, es muy importante observar y analizar la situación económica de los lugares donde están ubicados los desplazados. En el caso particular del asentamiento donde reside el mayor número de personas, los otros donde se hizo esta investigación, se encuentra un escenario caracterizado por unos índices tan altos de miseria, que directa o indirectamente afectan a la niñez y toda la comunidad estudiantil que allí habita. Es tal la pobreza que en muchas ocasiones obliga a que los niños en edad escolar se retiren de la escuela, y se dediquen a otras labores que no les son propias por condiciones de su edad y sus derechos, pues las leyes nacionales y acuerdos internacionales son claros al afirmar que los niños deben estar estudiando y no trabajando.

¹¹¹ Ibíd. Óp. Pág. 13

En tiempos recientes esta situación se ha venido complicando, ya que el índice de menores trabajadores ha venido creciendo, y, en consecuencia ha aumentado la deserción escolar, sin que la administración local y las instituciones respectivas generen alternativas para frenar este grave problema.

Sobre los asentamientos de desplazados y la difícil situación en que se encuentran estos lugares, es necesario destacar que los líderes, y la comunidad en general, han venido pidiendo más atención de la administración municipal para frenar el grave problema de deserción escolar; pero hace falta que dicha ayuda sea con proyectos productivos que generen ingresos para el sostenimiento de las familias, de modo que los adultos puedan dar las mínimas condiciones vitales a los niños y estos puedan asistir a la escuela de manera permanente.

El gobierno hasta el momento ha incumplido todo lo que ha prometido para los desplazados. En palabras de habitantes de los asentamientos “ni la alcaldía ni la gobernación, nadie nos tiene en cuenta”. El deterioro en la calidad de vida de los desplazados pasó de ser una situación de pobreza a una situación de indigencia, tal es caso en que “el 57% de las familias desplazadas al momento de huir de los actores de la guerra tenían ingresos iguales o superiores a los 900 mil pesos mensuales. Hoy el 98% de los hogares desplazados incluidos en el registro gubernamental sobrevive en condiciones de pobreza y el 82% subiste en condiciones de indigencia. Más del 53% de los hogares sólo percibe ingresos iguales a la mitad del salario mínimo y tienen que trabajar en promedio 60 horas a la semana. Un significativo número no consume las tres comidas diarias. La mayor parte de los niños padece de desnutrición crónica”.¹¹²

¹¹² www.viva.org.co

CONCLUSIONES

- Como se puede ver, la situación y toda la problemática de desplazamiento que se vive en estos momentos en el departamento del Putumayo, persiste desde tiempo atrás, debido al total abandono que se dio por parte del Estado para las regiones fronterizas desde principios de siglo, en este caso al departamento del Putumayo. A esto le agregamos la indiferencia, la corrupción administrativa que han mostrado los gobiernos del departamento y las diferentes administraciones de los municipios que conforman el Putumayo, todo eso ha hecho que la región y sus habitantes se hundan en el más absoluto atraso y conformismo en que hoy se encuentra esta región del país.
- El problema de la violación de los derechos humanos en el departamento del Putumayo viene desde muchos años atrás, primero el sometimiento de esclavitud que hicieron con los nativos de este departamento para la explotación del caucho, segundo, el desalojo y el desplazamiento que empezaron a tener los grupos indígenas donde se cultivaba el caucho, todo eso se dio, sin que el Estado colombiano cuide y salvaguarde la integridad de sus ciudadanos; en esta época, viene sucediendo lo mismo se siguen cometiendo las mismas violaciones, hay una explotación de las personas que trabajan el campo, se siguen desalojando y sacando al campesino, de su lugar de origen “campo” sin que el Estado no asuma la responsabilidad que tiene tomar en materia de Derechos Humanos
- Con la investigación, se pudo comprobar, que las instituciones encargadas de velar por la responsabilidad y todo el proceso educativo en el departamento del Putumayo, desconocen el sistema de las 4 A expuesta por la Relatora en educación de las Naciones Unidas. Con este sistema, se pudo comprobar que la prestación de este servicio en

departamento del Putumayo ha estado con grandes deficiencias, sin que hasta el momento generen alternativas de solución.

- Al analizar todos los indicadores estudiados, como deserción escolar, necesidades básicas insatisfechas, desnutrición y muchos servicios que se les tiene que brindar a toda esta población, suministrados por las diferentes instituciones como la Secretaria de Educación Departamental y Municipal, el ICBF, Accion Social Etc. Y a la vez constatados en esta investigación, nos damos cuenta que la Política Pública para población desplazada hasta el momento no ha dado los resultados esperados, ya que su aplicación por parte de la administración regional ni local no se ha venido dando, por la falta de gestión coordinacio con esta instituciones, y por lo tanto no se han suplido las necesidades que por ley tiene que resolversele a estas personas.
- Es importante tener en cuenta que el incumplimiento por parte del Estado colombiano en su obligación de garantizar las condiciones de vida digna a cada uno de sus ciudadanos, y más aún tratándose de población infantil en situación de desplazamiento, puede tener repercusiones bastante negativas para el país, se sabe que los convenios, tratados y compromisos adquiridos por Colombia, con organismos multilaterales cuyas disposiciones son de obligatorio cumplimiento, como el derecho a la educación, consagrado en la declaración de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y que ante su incumplimiento se tenga que recurrir a instancias internacionales, dejando mal posicionado a Colombia en materia de Derechos Humanos.

FORMATO DE ENTREVISTA A LOS RECTORES DE LAS INSTITUCIONES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION

Institución: _____

Nombre del Rector: _____

Departamento: _____

Municipio: _____

Dirección de la Institución: _____

¿Cuántos estudiantes tienen la institución?

¿Cuántos son desplazados)

¿Qué problemas se ha dado en la institución por tener alumnos en situación en desplazamiento?

¿Si ha existido coordinación en atender a los desplazados, la institución educativa y las demás instituciones gubernamentales?

¿El personal docente y administrativo si está preparado para atender a los estudiantes desplazados?

¿La Alcaldía si se ha personado de los estudiantes desplazados que hay en esta institución?

FORMATO DE ENTREVISTA A LOS LÍDERES DE LOS ASENTAMIENTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____

Departamento: _____

Municipio: _____

Asentamiento: _____

Dirección o Sector: _____

¿Proceso histórico porque se dio la creación del asentamiento?

¿Cuántas familias se encuentran en el asentamiento?

¿Cuál es la actividad Económica de los habitantes del asentamiento?

¿Cómo es la Situación Actual del asentamiento y de sus habitantes?

¿La administración Municipal les ha colaborado?

¿Cómo ha sido la ayuda que les ha dado la alcaldía?

¿Qué otras instituciones les han colaborado?

¿En qué condiciones esta la escuela del asentamiento?

¿Por qué los niños dejan, o se salen de estudiar?

BIBLIOGRAFIA

Libros

Ariza G, Eduardo. (1998) *Cultural de la Amazonia, (La construcción del Territorio en el Siglo XX)*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

Beristain, Carlos Martin. (2008) *Diálogos Sobre La Reparación, Experiencias en el Sistema Interamericano de derechos humanos* Tomo II / San José de Costa Rica Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Gonzáles Arias, José Jairo. (1987) *Aspectos Socioeconómicos y Políticos de la Violencia en el Caquetá 1978-1982*. Florencia: Universidad de la Amazonia-ICFES.

Góngora Mera, Manuel. (2003) El Derecho a la Educación. En la Constitución, La Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales, p 69-85.

Constitución Política De Colombia (Defensoría del Pueblo) PROSEDHER.

Guerrero Albán, Franco.(1995) *Putumayo Economía y Sociedad*. Bogotá: Editorial Produmédios.

Molano Bravo, Alfredo. *Algunas consideraciones sobre Colonización y Violencia*. En: Legrand, Catherine (Compilador). *El Agro y la Cuestión Social*. Bogotá: Tercer mundo editores, Minagricultura.

Lerna C, Carlos Alberto, (2007) *El Derecho a la Educación en Colombia*.

Sánchez Steiner, Lina M. *Impacto Urbano del Desplazamiento Forzado, Elementos de Diagnóstico Para un Ordenamiento espacial*, p 41-70.

Santoyo Jimeno, Myriam. (1989) *Los procesos de colonización. Siglo XX*. En: Nueva historia de Colombia. Bogotá: Planeta. Vol. 3. Págs. 371-395.

Ramírez, María Clemencia. (2001) *Entre El Estado y la guerrilla: Identidad y Ciudadanía en el Putumayo* Bogotá: Colciencias.

Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa
a la Luz del Derecho a la Educación (Defensoría del Pueblo) SERIE DESC.

--- (2006) *La prevalencia de los derechos de las víctimas del delito del Desplazamiento Forzado*.
Procuraduría General de la Nación. Editorial Gráfica Editores Ltda Noviembre. P 19.

Parra, Juliana I. Bohorquez Viviana. (2007) *Desplazamiento forzado en Colombia, Derecho Acceso a la Justicia y reparación*.

La Situación de los Refugiados en el Mundo, Desplazamientos humanos en el nuevo milenio, ACNUR, 2007. Capítulo 7, desplazados Internos. Citado por: Parra, Aldana A y Bohorquez, Viviana. (2007) *Desplazamiento Forzado en Colombia, Derecho a la Justicia y Reparación*. Colombia

Artículos de Revistas y libros

Becerra, Virgilio. (2001) *Putumayo Estratégico*. En: Periódico Universidad Nacional de Colombia.

Segura E, Nora. *Colombia Guerra y Desplazamiento*. En: Análisis Político. N° 43 (Mayo- Agosto de 2001); p.83-85

Machado C, Absalón. *Reforma Agraria o Reforma Rural*. En: Análisis Político. N° 40 (Mayo- Agosto de 2000); p.81-82.

Abramovich, V., Curtis, C. *Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales*. Pg. 1
Sanchez, E., Jair. Representante de la Asociacion Departamental de Campesinos del Putumayo ANUC- Putumayo p. 1.

Tres Lutros de Jurisprudencia Constitucional: Primer Informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la defensoría del Pueblo Marzo 1992- febrero 2007 p 17

Informes y documentos institucionales

Anuario Estadístico del Putumayo. 1998. CORPOAMAZONIA.

Balance de la Política Pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia.
Enero 2004- abril 2007.

Barajas, A María. Putumayo Refugio y Desplazamiento en el marco del Plan Colombia y el conflicto armado interno.

Boletín Informativo de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Numero 79, Bogotá, enero 27 de 2010 Codhes.

Decreto 2562 de Noviembre 27 de 2001.

Documento CONPES INDÍGENA de la Amazonía – Capítulo Putumayo. OZIP. 2004.

Plan de Desarrollo para la Población Afro putumayense “Hacia un Putumayo Pluriétnico y Multicultural 2001-2006”

INFORME. Secretaría de Educación Municipal Municipio de Mocoa (Población en situación en Desplazamiento).

INFORME. Secretaria de Educación Departamental sobre población en situación en desplazamiento en edad escolar departamento del Putumayo.

Informe de Cobertura Económica Regional. Banco de la República. 2000.

Palacios M. Luisa Fernanda. Análisis de políticas educativas en el marco de calidad y Cobertura para población infantil desplazada en el nivel preescolar

Sistema de Información Socio-Demográfica –SISDE- del DANE.

Sentencia T- 025 de 2004. Desplazamiento Forzado. Defensoría del Pueblo y Acnur 2004

Sentencia T-402-92

Sentencia T-078-96

Sentencia C-376/10

Cartillas

ABC En Salud para la Población en Situación en Desplazamiento

Ministerio de Protección Social (Derecho a la Salud Por una Vida Digna)

Corte Constitucional. Autos de Seguimiento a la Sentencia T- 025 de 2004 Años 2008-2009.

Publicaciones en internet

- Datos sobre titulación de terrenos baldíos. En: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – INCODER www.incoder.gov.co
- Información sobre el Departamento de Putumayo: www.todacolombia.com
- Datos sobre proyectos educativos: www.colombiaaprende.edu.co
- Sánchez, María Camila. *La bonanza del caucho en el Amazonas colombiano: una historia que no se olvida* [versión electrónica]. Disponible en: www.prensarural.org
- Derecho a la educación en Colombia En: www.dejusticia.org
- San Miguel Agreda de Mocoa en: www.mocoa.8k.com
- www.sinic.gov.co
- www.virtual.unal.edu
- www.unodc.org/colombia
- www.codhes.org
- www.defensoria.org.co
- www.dane.gov.co